

**UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

**UNIDAD DE POSGRADO**

**“CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA AIMARA EN LA  
REGIÓN PUNO: CONFLICTO DE ILAVE (2004)”**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE MAGISTER EN SOCIOLOGIA  
CON MENCIÓN EN ESTUDIOS POLÍTICOS**

**AUTOR**

Silvia Itusaca Condori

**ASESOR**

Dr. Tirso Aníbal Molinari Morales

Lima – Perú

2014

A la población indígena de los andes peruanos,  
muchos distantes de la modernidad, pero con gran  
sentido de humanidad.

A mis hijos Angelina Leydi, Ana Silvia, Ángel Alyxis,  
que me impulsan a saber cada vez más y a ser mejor.

A mi esposo Percy.

# ÍNDICE

LISTA DE CUADROS .....	VI
RESUMEN.....	VIII
ABSTRACT .....	IX
INTRODUCCIÓN .....	1
CAPÍTULO I	
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	5
1.1. Planteamiento del problema.....	5
1.2. Formulación del problema .....	8
1.3. Objetivos .....	9
1.4. Justificación del estudio .....	10
1.5. Hipótesis.....	13
1.6. Limitaciones de la investigación.....	14
CAPÍTULO II	
LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	15
2.1. Perspectiva metodológica .....	15
2.2. Método de la investigación .....	16
2.3. Muestra.....	16
2.4. Técnicas de investigación y análisis de datos e interpretación .....	17
2.4.1. Técnicas de investigación documental y de conversación .....	17
2.4.2. Análisis de datos e interpretación .....	18
CAPÍTULO III	
LINEAMIENTOS TEÓRICOS: PROBLEMÁTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PERÚ .....	19
3.1. Sobre la definición de la ciudadanía .....	19
3.2. Política de dignidad igualitaria y la política de reconocimiento de la diferencia ....	22
3.3. Multiculturalismo y ciudadanía.....	25
3.4. Del multiculturalismo a la interculturalidad y democracia .....	26
3.5. El nuevo concepto de la ciudadanía: la ciudadanía diferenciada .....	31
3.6. Poscolonialidad y la ciudadanía subalterna.....	35
3.7. Construcción de la ciudadanía en la interacción social.....	38
3.8. Percepción y construcción de la ciudadanía peruana.....	42

## CAPÍTULO IV

### CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA AIMARA EN LA REGIÓN PUNO ..... 47

4.1. Caracterización de la población .....	47
4.2. Presencia del Estado y el ejercicio de la ciudadanía en la provincia de El Collao ..	49
4.2.1. Ejercicio de ciudadanía civil .....	50
4.2.2. Ejercicio de ciudadanía social .....	55
4.2.3. Ejercicio de ciudadanía política .....	66
4.3. Breve antecedente histórico de la ciudadanía regional .....	73
4.4. Construcción de la ciudadanía aimara en la provincia El Collao - Ilave .....	86
4.4.1. Patrones organizativos de las comunidades rurales aimaras .....	86
4.4.2. Concepción de derecho basado en las costumbres .....	93
4.4.3. Predominio del patrón de organización de las comunidades rurales aimaras durante el conflicto .....	98
4.4.4. Sistema legal consuetudinario de la ciudadanía aimara y el sistema legal oficial .....	101
4.4.5. Práctica ciudadana basada en las costumbres .....	112
4.4.6. El reconocimiento y la ciudadanía aimara .....	115

## CAPÍTULO V

### PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO DE ILAVE 118

5.1. Antecedentes de la dinámica relación entre las comunidades rurales aimaras y la Municipalidad .....	118
a) Presencia de la Municipalidad en las comunidades rurales aimaras .....	118
b) Apertura de participación ciudadana en el gobierno local .....	122
c) Mecanismos de participación ciudadana promovidos por el Estado .....	123
5.2. Sucesos del conflicto de Ilave .....	131
5.2.1. Aspectos previos al conflicto .....	131
a) Pugna por el poder .....	131
b) Contrato de personal foráneo e incremento de sueldos exorbitantes .....	137
c) Ruptura de una relación: la percepción de maltrato .....	139
d) Ilegitimidad social del Alcalde y crisis de los partidos políticos .....	142
5.2.2. Inicio del conflicto .....	145
5.2.3. Escalamiento del conflicto .....	147
5.2.4. Formación de Comisión Mediadora y búsqueda de solución al conflicto .....	149
5.2.5. Anuncio de la «nación aimara» y el entrapamiento del conflicto .....	151
5.2.6. Asesinato del Alcalde e intervención de la Comisión de Alto Nivel .....	152
5.2.7. Alcaldes designados por el Jurado Nacional de Elecciones durante el conflicto .....	159
5.2.8. Cese del conflicto .....	163

## CAPÍTULO VI

PARTICULARIDADES DEL CONFLICTO DE ILAVE (2004).....	165
6.1. Trascendencia política del conflicto.....	165
6.2. Movilización de los aimaras y la politización de la identidad étnica.....	167
6.3. Reivindicación de la identidad aimara .....	171
6.4. Estigmatización del Alcalde.....	173
CONCLUSIONES .....	176
RECOMENDACIONES .....	177
ANEXOS .....	178
Anexo N°1: Mapa del departamento de Puno.....	179
Anexo N°2: Guion de entrevista .....	180
Anexo N°3: Memorial alcanzado a la Defensoría del Pueblo – Lima. ....	181
Anexo N°4: Resolución N°284 de la Contraloría General de la República.....	186
BIBLIOGRAFÍA .....	189

## LISTA DE CUADROS

Cuadro 01: Muestra de la investigación.....	17
Cuadro 02: Población en la provincia de El Collao, según distritos, 2005 .....	48
Cuadro 03: Porcentaje de la población de 5 años y de más edad, por lengua aprendida en la niñez.....	49
Cuadro 04: Actividades económicas de la PEA, según distritos de la provincia El Collao –1993 .....	51
Cuadro 05: Actividades económicas de la PEA, según distritos de la provincia El Collao -2007 .....	53
Cuadro 06: Población ocupada de 14 años y de más edad, por categoría de ocupación, según provincia y distrito .....	54
Cuadro 07: Existencia de programas sociales en los distritos de la provincia El Collao .....	56
Cuadro 08: Comparación de los índices de desarrollo humano departamental, varios años	
Cuadro 09: Índice de Densidad del Estado departamental y provincial 1993 .....	60
Cuadro 10: Índice de Desarrollo Humano 2000 .....	60
Cuadro 11: Perú: Índice de densidad del Estado provincial 2007 .....	61
Cuadro 12: Índice de Desarrollo Humano distrital 2003 y 2005 .....	64
Cuadro 13: Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2007 ...	65
Cuadro 14: Elecciones municipales 1980, distrito Ilave .....	66
Cuadro 15: Elecciones municipales 1983, distrito Ilave .....	67
Cuadro 16: Elecciones municipales 1986, distrito Ilave .....	67
Cuadro 17: Elecciones municipales 1989, distrito Ilave .....	68
Cuadro 18: Elecciones municipales 1993, provincia de El Collao .....	69
Cuadro 19: Elecciones municipales 1995, provincia de El Collao .....	70

Cuadro 20: Elecciones municipales 1998, provincia de El Collao .....	71
Cuadro 21: Elecciones municipales 2002, provincia de El Collao .....	72
Cuadro 22: Elecciones municipales complementarias 2004, provincia de El Collao.....	73
Cuadro 23: Participación de los agentes y el carácter de la propuesta de solución al conflicto.....	92
Cuadro 24: Reclamos y pedidos de los pobladores durante el conflicto .....	104
Cuadro 25: Resoluciones de recomposición del Consejo Provincial El Collao emitido por JNE – 2004 .....	107
Cuadro 26: Consejo Provincial de El Collao - Ilave, proclamado por el sector de población movilizado – 2004 .....	108
Cuadro 27: Alcaldes elegidos democráticamente del distrito de Ilave y provincia de El Collao.....	120
Cuadro 28: Mecanismos de la Ley 26300 usados hasta el 2004 a nivel nacional .....	124
Cuadro 29: Consejo Provincial de El Collao-Ilave 2003 hasta abril de 2004.....	132
Cuadro 30: Facción de gobiernistas y opositores 2003 – abril 2004 .....	135
Cuadro 31: Remuneración de personal de confianza (2002 – 2003) en la Municipalidad provincial de El Collao .....	138
Cuadro 32: Resultado de las elecciones provinciales de El Collao – 2002 .....	144
Cuadro 33: Alcaldes distritales de la provincia de El Collao elegidos el 2002 .....	144
Cuadro 34: Primera Recomposición de JNE al Consejo Provincial El Collao - Ilave Resolución N° 077-2004-JNE (9 de mayo) .....	160
Cuadro 35: Segunda Recomposición de JNE al Consejo Provincial El Collao-Ilave Resolución N° 098-2004-JNE (24 de mayo) .....	161
Cuadro 36: Tercera Recomposición del Consejo Provincial de El Collao Resolución N° 191– 2004 – JNE (27 de setiembre) .....	163
Cuadro 37: Consejo Provincial de El Collao - Ilave, resultado de elecciones complementarias 2004 .....	164
Cuadro 38: Organizaciones políticas inscritas ante JEE – Puno en las elecciones complementarias 2004 con discurso étnico.....	170

## **RESUMEN**

La presente tesis de maestría tiene como objetivo central analizar el desencuentro entre el Estado y la ciudadanía local durante el conflicto acaecido en Ilave (2004). Ese desencuentro evidencia el soslayamiento por parte del Estado de los aspectos culturales presentes en las movilizaciones del pueblo aimara. El análisis sociológico, desde una perspectiva fenomenológica y etnometodológica, nos permite visualizar la construcción de la ciudadanía aimara desde la socialización y la presencia de sujetos activos que despliegan su vida cotidiana en un entorno de diversidad cultural.

La hipótesis principal del trabajo sostiene que el desencuentro entre el Estado y la sociedad aimara local plasmado en el conflicto de Ilave se debe al soslayamiento de las costumbres, la identidad étnica y las vivencias de la población movilizada. En virtud de una invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara, se genera la posibilidad de conflictos que pueden llegar a un nivel exacerbado de violencia.

Con el fin de corroborar la hipótesis delineada, el presente estudio se inserta en una metodología de investigación cualitativa que pone de relieve un enfoque fenomenológico y una perspectiva etnometodológica. Así se ha explorado en los significados que dan los ciudadanos aimaras a sus experiencias sociales y se ha visualizado la interacción de los sujetos en la vida cotidiana en tanto que ciudadanos aimaras. El diseño de la investigación implicó llevar a cabo una entrevista en profundidad para dilucidar la construcción de la ciudadanía aimara en la región Puno en el contexto del conflicto de Ilave (2004).

Palabras clave:

Ciudadanía, pueblo aimara, interculturalidad, poscolonialidad, Ilave.



## **ABSTRACT**

This thesis has as main objective to analyze the mismatch between the State and local citizens during the conflict occurred in Ilave (2004). That disagreement evidence evasion by the state cultural aspect of the local population; which clearly made visible in the demonstrations of aymara people during the conflict. The sociological analysis, from a phenomenological and ethnomethodological perspective allows us to visualize the construction of the aymara citizenship from socialization and the presence of active subjects who build their citizenship in an environment of cultural diversity.

The main hypothesis of the study is that the disagreement between the State and the local aymara society originated in the conflict of wrench is due to evasion of customs, ethnic identity and experiences of the mobilized population. Under an invisibility of the construction of the aymara citizenship, the possibility of conflicts that can reach a level of violence exacerbated generated.

In order to corroborate the hypothesis outlined, the present study is inserted in a qualitative research methodology that highlights a phenomenological approach and ethnomethodological perspective. This has explored the meanings that give the aymara people of their social experiences and was shown the interaction of individuals in everyday life while aymara citizens. The design of the research involved conducting an in depth interview to elucidate the construction of the aymara citizenship in the Puno region in the context of conflict in Ilave (2004).

Keywords:

State, citizenship, aymara people, multiculturalism, postcolonialism, Ilave.

## INTRODUCCIÓN

La investigación titulada **Construcción de la ciudadanía aimara en la región Puno: Conflicto de Ilave (2004)** fue realizada para esclarecer el desencuentro suscitado entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave ocurrido en el 2004, desencuentro producido por la evasión de parte del Estado, de la cultura de la población movilizada. La evasión del aspecto cultural que es fruto de la subalternización, ausencia de políticas de firme reconocimiento de las diferencias e invisibilización de la peculiaridad de la población aimara.

Este estudio pretende identificar el carácter activo y pasivo del ciudadano y aportar varios aspectos necesarios a ser tomados en cuenta en la prevención y gestión de los conflictos sociales. Así, por lo general, al ciudadano se le concibe en términos pasivos, cuando se producen los conflictos sociales y por lo mismo es minimizada su participación y señalada como provocada por la desinformación, incitación, o manipulación. De antemano se ignora la acción ciudadana y se produce todo un imaginario de ciudadano lerdo, manipulable, con poca capacidad de organización y discernimiento propio. En conjunto, este imaginario refleja el prejuicio, el desconocimiento, la incomprensión y la incapacidad de respuesta a las diversas expresiones ciudadanas, a pesar de manifestarse continuamente por el aumento de los conflictos sociales de los últimos años en el Perú.

Los problemas del estudio se expresan en las siguientes interrogantes: ¿El desencuentro entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave se debió a la evasión de la cultura de la población movilizada?, ¿esto evidenciaría, a su vez, la invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara en el ámbito local y el aspecto activo del ciudadano que construye su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana en la región Puno?

Los objetivos planteados en esta investigación son: a) describir y analizar la dinámica del establecimiento de relaciones entre la municipalidad y las comunidades rurales aimaras; b) analizar los sucesos del desencuentro entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave y evidenciar la evasión del aspecto cultural de la población movilizada; c) visualizar la construcción de la ciudadanía aimara (diferenciada) desde la socialización de los patrones culturales en la región Puno; y d) identificar y analizar las particularidades del conflicto.

La metodología empleada es básicamente de carácter cualitativo y se utilizaron las siguientes técnicas: entrevista en profundidad, lectura y análisis de los discursos documentales. El proceso de investigación no ha sido de carácter rígido, ya que la etapa preparatoria, el trabajo de campo y las fases analíticas e informativas no han tenido un principio y un final marcadamente delimitado.

En función del problema de investigación y de los objetivos que perseguimos, se ha optado por una metodología cualitativa, dado que un enfoque cuantitativo no hubiese permitido la inmersión analítica en los conflictos originados por la construcción de la ciudadanía.

La tesis se organiza en seis capítulos. En el primero plantea el problema y los objetivos de la investigación, en el que se especifican las interrogantes, la justificación, las hipótesis y las dificultades presentadas durante la investigación.

El segundo capítulo trata del marco metodológico del estudio, se detalla la perspectiva fenomenológica y etnometodológica, el método, la muestra, las técnicas y análisis de datos e interpretación.

En el tercer capítulo se presenta la perspectiva teórica relacionada a la noción de ciudadanía, políticas de reconocimiento y diferencia, multiculturalismo, interculturalidad, ciudadanía diferenciada, poscolonialidad, percepción y construcción de la ciudadanía peruana. En este capítulo, se pone en cuestión la noción tradicional de ciudadanía en la medida en que presupone un marco unidimensional de la cultura. En agudo contraste, postulamos la necesidad de una definición de ciudadanía diversa, inscrita en el contexto de la interculturalidad.

El cuarto capítulo desarrolla la construcción de la ciudadanía aimara, describiendo, primero, las características de la población. Después de analizar la presencia del Estado y el ejercicio de la ciudadanía en la provincia de El Collao, se expone un breve antecedente histórico de la ciudadanía regional, luego se visualiza la construcción de la ciudadanía aimara analizando la socialización e interacción en el mundo social aimara, como la concepción del derecho para la población aimara, sus patrones de organización, su sistema legal consuetudinario y el sistema legal oficial, la práctica ciudadana, el reconocimiento y la ciudadanía aimara.

El quinto capítulo examina la perspectiva histórica y cronológica del conflicto, y se inicia con los antecedentes de las relaciones entre la municipalidad y las comunidades rurales. Se analiza también cómo el municipio fue tomando presencia en las comunidades rurales, además la apertura de la participación ciudadana a través de los diversos mecanismos promovidos por el Estado y para culminar, en esta parte, se detalla los sucesos del conflicto de Ilave.

El sexto capítulo nos ofrece las particularidades que se presentaron durante el conflicto de Ilave y las derivaciones sociopolíticas del mismo. Se desarrolla la manera como la identidad cultural aimara adquirió una dimensión política en el curso del conflicto. Soslayar esta dimensión ha significado un reduccionismo y, por ende, un fallo en el estudio del conflicto.

Finalmente, debo agradecer inmensamente al doctor Tirso Molinari por su dedicación en la asesoría de esta investigación expresada en sus múltiples orientaciones, sugerencias y aclaraciones sin las cuales no habría podido culminar mi labor. Reconozco que constituyeron el eje primordial para lograr el objetivo tan ansiado de graduarme de Magíster en Sociología afianzando así mi estatus académico. Además, toda mi gratitud a la profesora Lilia Pizarro por su apoyo incansable en la etapa final de mi trabajo que permitió la presentación revisada y oportuna de la tesis.

## CAPÍTULO I

### PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

#### 1.1. Planteamiento del problema

La concepción actual de la ciudadanía peruana tiene basamentos en la versión de la ciudadanía ilustrada y, desde la constitución de la República peruana, se adoptó esta noción como válida para nuestro contexto pluriétnico y multicultural; consecuentemente se discriminó y se excluyó a la mayoría de la población culturalmente diferente, y con la República se ha continuado invisibilizando a los pueblos indígenas como el aimara; así las brechas sociales y culturales se han hecho más profundas. Por lo tanto, muchos de los problemas y conflictos que se presentan en el siglo XXI son consecuencia de la falta de reconocimiento de la diversidad cultural y de la evasión del aspecto cultural de las poblaciones indígenas. El caso de conflictos como el de Ilave (2004) y el de Bagua (2009) deben entenderse en este marco. Es más, el Estado peruano siempre ha carecido de políticas de firme reconocimiento de la diferencia, lo cual ha propiciado y propicia el predominio del prejuicio hacia una ciudadanía diferenciada como la aimara.

Resaltando el carácter diverso del país, el Censo Nacional 2007 identificó a 3'919.314 personas mayores de cinco años como indígenas a partir de su lengua materna y concretamente en Puno un 39% de la población mayor de cinco años aprendió el quechua y un 28% el aimara. Con incidencia de pobreza de 79% en el año 2004, de 75% en el 2005, de 76% en 2006 y 67% en el 2007<sup>1</sup>; y según los índices de desarrollo humano departamental realizado por el PNUD por varios años, Puno ocupó los últimos lugares en el *ranking* de Índice de Desarrollo Humano (IDH) entre las veinticinco

---

<sup>1</sup> INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG): anual, 2004-2008.

regiones del país. Coincidentemente en estas zonas altoandinas es bajo el Índice de Densidad del Estado (IDE). Es evidente, pues, la desigualdad de oportunidades. La igualdad de derechos de todos los peruanos reconocidas en la Constitución se reduce a la igualdad formal, razón por la cual la concepción «igualdad de derechos» que deriva de la premisa «dignidad igual de los seres humanos» tiene que ajustarse a la realidad de la ciudadanía, pues cada realidad es única y la legislación no siempre parte de la realidad, sino del deseo o imaginación de los legisladores u otros.

Se entiende la ciudadanía como un ejercicio en el espacio público, pero la idea de lo público como universal tiende a reducir las diferencias culturales al ámbito de lo privado y se pretende así hacer de lo público un espacio culturalmente neutral. Sin embargo, los aimaras como actores sociales consideran los asuntos públicos influidos por sus propios intereses, necesidades, valores culturales, historias, experiencias y percepciones. Aun así, el ejercicio ideal de ciudadanía implica que todos los ciudadanos asuman el mismo e imparcial punto de vista, al margen de sus particularidades existentes; pero esto resulta ilusorio, ya que simplemente encuentra a los aimaras en condiciones de desventaja ante los diversos asuntos públicos.

Enfocando la promoción de la identidad cultural, «los estados-nación latinoamericanos debían realizar una “misión imposible”: crear sociedades nacionales, integradas y homogéneas a partir de paisajes humanos pluriculturales, multiétnicos y altamente diferenciados» (Guevara, 2009:29), sin embargo el estado-nación peruano promueve cierta identidad cultural, además no puede dejar de decidir qué prácticas, lenguas, historias y entre otros elementos culturales promover; en consecuencia, por medio de la educación se emprendió la construcción de la ciudadanía buscando el desarraigo y asimilación cultural mediante el acriollamiento forzado a fines del siglo XIX y su posterior modificatoria en acriollamiento amable (López 1997:219), generando

violencia simbólica durante el intento sistemático de inclusión subordinada de pueblos indígenas como el aimara, debido a la imposición de la versión de la ciudadanía ilustrada conjuntamente con la modernidad. Asimismo, las políticas de educación intercultural aplicadas durante las últimas tres décadas son bastante limitadas.

El Estado peruano siempre se ha gobernado de manera centralista y constantemente ha invisibilizado la presencia de los pueblos indígenas; y la incidencia de pobreza en la población indígena es casi el doble de la registrada en la población no indígena. (Correa, 2011: 23) y “«el 77% de las comunidades que agrupan a la población indígena andina y amazónica están ubicadas en los departamentos más pobres del país» (Chirinos, 220). También se constata que de las 33 provincias con Índices de Desarrollo Humano bajo y con Índices de Densidad del Estado (IDE) bajo y medio bajo, 29 son andinas, 15 en la sierra sur y 14 en la sierra norte<sup>2</sup>. Entonces este mapa de IDE revela que el Estado tiene presencia desigual en el territorio nacional, cuando debería ser lo más importante la presencia del Estado en las provincias y distritos más alejados con perspectiva intercultural y con capacidad de dar respuesta a las demandas sociales y gestionar adecuadamente los problemas y conflictos que se producen al interior del país. Sin embargo, el proceso de regionalización –descentralización, iniciado en el 2002, presenta severas limitaciones así como la aplicación de la ley de la consulta previa promulgada en el 2011.

---

<sup>2</sup>Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2007.



## **1.2. Formulación del problema**

### **Problema general**

- ¿El desencuentro entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave se produce al eludir la cultura de la población movilizada? ¿Esto, a su vez, evidenciaría la invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara en el ámbito local y el aspecto activo del ciudadano que construye su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana en la región Puno?

### **Problemas específicos:**

- ¿El desencuentro entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave se debió a la evasión de las costumbres, identidad étnica y vivencias de la población movilizada?
- ¿La evasión del Estado de las costumbres, identidad étnica y vivencias de la población movilizada evidenciaría la invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara en el ámbito local?
- ¿La evasión del Estado de las costumbres, identidad étnica y vivencias de la población movilizada evidenciaría la invisibilización del aspecto activo del ciudadano que construye su ciudadanía en el mundo social de la vida cotidiana?

### **1.3. Objetivos**

#### **Objetivos generales:**

- Analizar los sucesos del desencuentro entre el Estado y la ciudadanía local durante el conflicto de Ilave.
- Visualizar la construcción de la ciudadanía aimara desde la socialización y la presencia de sujetos activos que construyen su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana en la región Puno.

#### **Objetivos específicos:**

- Describir y analizar la dinámica de las formas de establecimiento de las relaciones entre la municipalidad y las comunidades rurales aimaras.
- Analizar los sucesos del desencuentro entre el Estado y la sociedad local durante el conflicto de Ilave y evidenciar la evasión de las costumbres, identidad étnica y vivencias de la población aimara.
- Visualizar la construcción de la ciudadanía aimara(diferenciada) y la presencia de sujetos activos en la región Puno que construyen su ciudadanía desde la socialización de los patrones culturales locales y regionales.
- Identificar y analizar las particularidades del conflicto.

#### **1.4. Justificación del estudio**

El tema de construcción de la ciudadanía aimara nace a partir del desencuentro suscitado entre el Estado y la sociedad local en el conflicto de Ilave en el año 2004, fisura abierta al soslayar el Estado el aspecto cultural de la población movilizadora a causa de la subalternización, ausencia de políticas de firme reconocimiento de la diferencia e invisibilización de la construcción de la ciudadanía en los ámbitos locales. Por lo tanto, el estudio es importante porque visualiza la construcción de la ciudadanía con un enfoque intercultural, tomando en cuenta el aspecto activo y pasivo del ciudadano, dado que al ciudadano se le suele concebir solo en términos pasivos. Este estudio también es relevante porque aporta elementos a tomar en cuenta en la prevención y gestión de los conflictos sociales. Generalmente en el manejo de los conflictos sociales, el Estado no toma en cuenta el aspecto cultural de los movilizadores a pesar de ser evidente su manifestación en los diversos conflictos sociales, los cuales se vienen incrementando en los últimos años en el Perú.

La investigación enfatiza la diversidad sociocultural, puesto que los ciudadanos y ciudadanas del Perú ejercen su ciudadanía de manera diferenciada, según su entorno social, cultural, geográfico, etc., y tienen sus propias formas de entender y construirla ciudadanía.

Específicamente, la región Puno se encuentra en la zona altiplánica del país, entre 3,812 y 5,500 m.s.n.m. y forma parte de la Región Hidrográfica del Titicaca; posee un Índice de Desarrollo Humano (IDH) promedio de 0.5416 y en la región habitan los quechuas, aimaras e hispanohablantes. Territorio, históricamente, de los grandes gamonalismos y movimientos e insurrecciones campesinas, cuya población mayoritariamente radica en las zonas rurales de las trece provincias y 109 distritos del departamento, solo Puno y Juliaca son considerados distritos urbanos, con una población de 24,776 y 229,236 respectivamente; ambas son las provincias más pobladas de la

región. Y en la provincia de El Collao el 72% de la población pertenece a la zona rural y solo el 28% al medio urbano<sup>3</sup>; según nivel de pobreza, el total de pobres es de 87% y pobres extremos es de 53%,<sup>4</sup> con un 22,1 de tasa de analfabetismo<sup>5</sup>. La gente de la región tiene sus propias experiencias, intereses, historias, culturas, lenguas y percepciones, e influidas por estos aspectos construye su ciudadanía y la manifiesta en situaciones concretas.

Consideramos que es preciso el reconocimiento de las expresiones ciudadanas, ante la evidente manifestación del aspecto activo de los ciudadanos que construyen su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana desde sus propios imaginarios, como cuando los pobladores de Ilave exigieron como un derecho los fondos que la municipalidad transfería anualmente, sin apelar a ningún tipo de derecho universal. Además, la concepción convencional de ciudadanía del paradigma de la ciencia política occidental no es la expresión de la práctica de la ciudadanía en los ámbitos locales, razón por la cual requiere ser replanteada esta noción clásica de ciudadanía en el marco de una ciudadanía intercultural.

El conflicto de Ilave ha sido manejado por la clase política hegemónica y por los operadores del Estado con marcada indiferencia, aunque se intentó dialogar con la población movilizada, pero se carecía de categorías e instrumentos políticos adecuados para la solución del conflicto, pues «la realidad de nuestro continente se explica a partir de categorías que fueron elaboradas para dar cuenta del mundo europeo, concepción que se transforma en una visión de alcance y validez universal» (Mejía, 2009:31), por lo tanto, había desencuentros y entrapamientos durante el conflicto, por eso se tienen que desarrollar nuevas categorías epistemológicas y esquemas e instrumentos políticos adecuados que permitan comprender y explicarla ciudadanía desde la propia realidad socio-cultural.

---

<sup>3</sup> Censo Nacional de Población y Vivienda, 2007.

<sup>4</sup> Diagnóstico situacional de la región Puno, 2009

<sup>5</sup> INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) anual 2004.

En la actualidad, hay la necesidad de emprender políticas de firme reconocimiento de la diversidad cultural y así replantear la concepción de ciudadanía convencional combatiendo la exclusión, la discriminación y la violencia simbólica contra los pueblos indígenas; es más, los ciudadanos y ciudadanas ya no se sienten representados por las estructuras estatales debido a su mínima incidencia en los problemas concretos de la vida cotidiana, tal como se demuestra en la encuesta sobre el funcionamiento de la democracia: en Puno el 40% de los ciudadanos encuestados la califica como mala,<sup>6</sup> esto es un indicador que se debe tomar en cuenta porque el propio sistema político está en proceso de ilegitimidad social.

Es pertinente señalar que cuando se producen convulsiones sociales en territorios de poca presencia del Estado, estas son generalmente minimizadas y señaladas exageradamente como producto de instigación, presencia de radicales, financiadas por terceros, etc.; por supuesto no solamente se pretende descalificar las demandas y reclamos sociales sino que esa indiferencia encierra todo un imaginario del ciudadano como pasivo, manipulable, con poca capacidad de organización y discernimiento propio. En conjunto, así se refleja el prejuicio, la incompreensión e incapacidad de respuesta a las diversas expresiones ciudadanas.

---

<sup>6</sup> INEI, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG): 2007.

## **1.5. Hipótesis**

### **Hipótesis principal**

- El desencuentro entre el Estado y la sociedad local se debe a la evasión del aspecto cultural de la población movilizada, lo que evidencia la invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara en el ámbito local. Desde su propia socialización cultural, los sujetos activos construyen su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana en la región Puno.

### **Hipótesis secundarias:**

- El desencuentro entre el Estado y la sociedad local en el conflicto de Ilave se debió a la evasión de las costumbres, identidad étnica y las vivencias de la población movilizada.
- El Estado al evadir las costumbres, identidad étnica y las vivencias de la población movilizada evidencia la invisibilización de la construcción de la ciudadanía aimara (diferenciada) en el ámbito local desde la socialización de sus propios patrones culturales.
- El Estado al evadir las costumbres, identidad étnica y las vivencias de la población movilizada evidencia la invisibilización del aspecto activo del ciudadano que construye su ciudadanía en el mundo de la vida cotidiana en la región Puno.

## 1.6. Limitaciones en la investigación

Durante el proceso de investigación se presentó una serie de limitaciones y dificultades, las más notorias se detallan a continuación:

- En una etapa previa a la aplicación del guion de entrevista en profundidad, se hizo la prueba piloto. Esto sirvió para adecuarse al lenguaje de la población de Ilave, porque al inicio de la prueba piloto cuando se les hacía mención del caso Ilave a los pobladores automáticamente se negaban a hablar del tema; sobre todo cuando se trataba la crisis del conflicto. En la aplicación de las entrevistas en profundidad propiamente dicha ya no se mencionaban explícitamente ciertos sucesos y términos que eran muy sensibles como el «linchamiento del Alcalde».
- Algunos de los que iban a ser entrevistados se abstuvieron. En cambio los que sí accedieron lo hicieron con la condición de mantener en total anonimato su identidad, pues aún había temor entre la gente; en efecto, en ese contexto, realizar una investigación a partir del caso del conflicto de Ilave se volvió complicado y delicado; más aún cuando los ilaveños han sido estigmatizados en la región como «mata alcaldes» y a nivel nacional, sobre todo por la prensa limeña, como «bárbaros» y «salvajes», etc.
- Algunos entrevistados, a pesar de haber participado directamente en los hechos del caso Ilave, se negaron a opinar con respecto a determinados sucesos. Otros hablaron en tercera persona (“ellos”) y algunos, muy pocos, en primera persona, ya que en todo momento evitaron ser involucrados con los hechos debido a la desconfianza y temor.

## **CAPÍTULO II**

### **LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **2.1. Perspectiva metodológica**

La metodología del estudio se enmarca en la perspectiva de investigación cualitativa. Para Julio Mejía, «lo cualitativo son las dimensiones, propiedades subjetivas que unifican y dan sentido a cada acto o hecho social» (2004:107). El objeto de estudio es la ciudadanía aimara (diferenciada) conformada por sujetos que construyen complejamente su ciudadanía. Por lo tanto, la metodología cualitativa es apropiada para la investigación, puesto que se hizo el estudio del conjunto de cualidades y acciones simbólicas que se exteriorizaron en el conflicto de Ilave y «toda manifestación social refleja una interioridad subjetiva, al actuar las personas piensan, valoran, tienen sentimientos y motivaciones» (Mejía, 2004:107).

De la presente investigación social se desprende el conocimiento de primer orden, ya que la realidad social está conformada por sujetos activos que observan, resignifican, signan, describen e reinterpretan y se desenvuelven en la vida cotidiana. En consecuencia, la investigación toma en cuenta las implicancias del conocimiento de primer orden, siendo la Sociología una ciencia de segundo orden. Para Peter Berger y Thomas Luckmann: «el sentido común encierra innumerables interpretaciones precientíficas y cuasicientíficas sobre la realidad cotidiana, a la que da por establecida. Si vamos a describir la realidad del sentido común, tendremos que referirnos a estas interpretaciones» (2003:38).



## 2.2. Método de la investigación

Esta investigación se abordó con los métodos comprensivos cualitativos: fenomenología y etnometodología. Es fenomenológica porque se realizó la exploración de los significados que dan los ciudadanos aimaras a sus experiencias, en efecto, interpretan y actúan en la realidad social, por lo que el objeto de estudio es una realidad preinterpretada. Y es etnometodológica porque se visualizó la interacción de los sujetos en la vida cotidiana en un determinado contexto y se dio atención a los puntos de vista compartidos entre los ciudadanos aimaras como sujetos socializados desde unos patrones específicos y simultáneos.

## 2.3. Muestra

La muestra se estableció desde basamentos cualitativos y la estrategia de muestreo consistió en la elección de los ciudadanos que radican en Ilave, de habla aimara y que habían experimentado la situación del conflicto en Ilave; a continuación se especifica los integrantes de la muestra de manera clasificada:

- **Sección a:** conformada por los ciudadanos aimaras que estaban involucrados de manera directa con la gestión municipal trunca del extinto Alcalde.
- **Sección b:** constituida por los ciudadanos aimaras que no tenían ningún vínculo directo con la gestión municipal, pero sí integraron el sector de la población movilizadora.
- **Sección c:** integrada por los ciudadanos aimaras que no participaron en las movilizaciones ni han estado involucrados con la gestión municipal, solo han estado observando y presenciando el conflicto.

**Cuadro N° 01**  
**Muestra de la investigación**

Sección a		Sección b	
<b>Ciudadanos involucrados con la gestión municipal</b>	<b>N°</b>	<b>Ciudadanos que integraron el sector de población movilizada</b>	<b>N°</b>
<b>Regidor municipal gobiernista</b>	01	Excandidato a la alcaldía (2002 -2004)	02
<b>Regidor de la oposición</b>	01	Exdirigente (2004)	01
<b>Funcionarios de la municipalidad</b>	02	Exreo del conflicto de Ilave (2004)	01
<b>Personal contratado (2003 - 2004)</b>	04	Exalcalde del centro poblado	01
<b>Familiar de uno de los regidores gobiernistas</b>	01	Acusado de instigación	01
		<b>Sección c</b>	
		<b>Ciudadanos neutros</b>	03
	09		09
<b>Total</b>		<b>18</b>	

## 2.4. Técnicas de investigación y análisis de datos e interpretación

### 2.4.1. Técnicas de investigación documental y de conversación

**a) Técnica de lectura y documentación.** Con esta técnica se recogió información de los documentos escritos, como la prensa escrita, y de los textos, documentos oficiales y no oficiales de la administración pública generados durante y después del conflicto. Específicamente, de la prensa escrita se han obtenido datos e información consistente en discursos, arengas, declaraciones, manifestaciones e información de los diarios locales y nacionales que se indican a continuación:

Diarios locales:

- *Correo (C)*
- *Los Andes (LA)*

Diarios nacionales de edición de Lima:

- *La República*
- *Correo*
- *La Razón*
- *Expreso*
- *El Comercio*

**b) La entrevista en profundidad.** En esta técnica de conversación se aplicó el guion de entrevista a los dieciocho (18) ciudadanos aimaras (ver anexo 2). El guion ha sido organizado en temas y subtemas con algunas variaciones según la clasificación en secciones:

- A: Ciudadanos aimaras involucrados con la gestión municipal
- B: Ciudadanos aimaras que integraron el sector de población movilizada
- C: Ciudadanos aimaras neutrales

#### **2.4.2. Análisis de datos e interpretación**

Para el análisis de datos se trabajó con datos de fuentes primarias y secundarias. En la medida en que la información recolectada fue de carácter cualitativo se procedió con el análisis cualitativo. Primero, se transcribió las entrevistas organizadamente y a los documentos escritos se les extrajo fragmentos relevantes en las fichas; posteriormente se prosiguió con el análisis comparativo de las ideas semejantes y contrarias a partir de la información obtenida (entrevistas en profundidad y extracto de fragmentos textuales); luego se captó las categorías y se organizó las unidades temáticas y, finalmente, se hizo la interpretación de los datos significativos de manera inductiva.

## **CAPÍTULO III**

### **LINEAMIENTOS TEÓRICOS: PROBLEMÁTICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN EL PERÚ**

#### **3.1. Sobre la definición de la ciudadanía**

La incongruencia entre la ciudadanía imaginaria y la ciudadanía real en contextos específicos hace que la concepción clásica o convencional de la ciudadanía necesite ser replanteada en función del ejercicio diferenciado de la ciudadanía y que permita tener una concepción de la ciudadanía en el marco de la diversidad cultural. «La construcción de una ciudadanía “desde abajo” ha introducido un conjunto de demandas relacionadas con derechos que quedaban al margen del modelo liberal tradicional [...] De este modo, la noción tradicional de ciudadanía debe ampliarse hacia los derechos económicos, sociales y culturales, y dentro de estos, hacia un ámbito, todavía en debate, como son los derechos colectivos o de grupo» (Bello, citado en Alfaro, 2008: 15). Para Alfaro, dada la importancia que tiene en el mundo de hoy la presencia de lo étnico en lo público: «[...] la ciudadanía necesita ser replanteada porque su noción clásica no ofrece herramientas para elaborar discursos ni desarrollar políticas orientadas a gestionar la diversidad cultural de las sociedades actuales» (13).

Tubino y Ansión señala que hay tres razones para distanciarse de la concepción liberal de la ciudadanía: Primero, al no reconocer que las colectividades también pueden ser sujetos de derechos, la concepción liberal de ciudadanía se centra exclusivamente en derechos individuales como derechos fundamentales y deja de lado los derechos colectivos de los pueblos indígenas que también son fundamentales. Segundo, la concepción liberal de la ciudadanía tiene un carácter marcadamente etnocéntrico y, por

lo mismo, homogeneizante. En efecto, con facilidad en la doctrina clásica de los derechos humanos, se confunde equidad con homogeneidad y así en nombre de la igualdad ciudadana se procede a la promoción del desarraigo cultural y a la asimilación forzada. Y, en tercer lugar, la concepción clásica recluye las diferencias culturales y religiosas en el ámbito de lo privado y pretende hacer de lo público un espacio culturalmente neutral mediante la invisibilización de las diferencias culturales.

Según Tubino, para empezar se debería dejar de hablar de la versión ilustrada de la ciudadanía como si fuera un modelo universal y exportable a cualquier contexto cultural. Tenemos que reentenderla desde otros horizontes, redescubirla desde otras tradiciones, reinventarla desde otras valoraciones y dejar de presentar a la democracia liberal como la única forma de convivencia razonable. Es una contradicción extrema proclamar la tolerancia como principio de la convivencia entre los diferentes y, al mismo tiempo, colocar nuestra versión de la democracia como la única fórmula de convivencia civilizada (2003: 173). Además, el ciudadano nunca es pasivo, sino es productor de signos y símbolos, asimismo, es consumidor de los mismos. Como señalan Biondi y Zapata: “la concepción del ciudadano como productor de signos y símbolos y no como mero consumidor, y la concepción de la democracia como un sistema abierto en construcción, hacen necesario que la escuela aliente competencias y habilidades en orden a estos objetivos[...]. En ese sentido, debe quedar claro una y otra vez que el papel de la escuela no es simplemente de repetición, reproducción y copia, sino de aliento a la producción»(2006:67- 68).

El reconocimiento de las diversas vías de construcción de la ciudadanía puede implicar la efectivización del ejercicio de los derechos en la diversidad cultural. Entonces conceptualizar la ciudadanía de modo diferente implicaría cambiar muchas nociones; como señalan Tubino y Ansión: «pensar la ciudadanía desde la diferencia y la diversidad, desde la interculturalidad, significa la posibilidad de adecuar la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas a su propio contexto,

cotidianidad y expectativas, lo que significa un cambio en las nociones actuales de Estado, mercado y sociedad» (2008: 35). Asimismo, Bello sostiene:

*...la noción formal de ciudadano-individuo, como sujeto de derechos y deberes que son transferidos o reconocidos por el Estado, ha comenzado a dar paso a una visión más amplia que reconoce diversas vías para construir ciudadanía o, dicho de otro modo, que busca nuevas referencias y dimensiones para el ejercicio efectivo de la ciudadanía. Dentro de estas nuevas referencias y dimensiones se encuentra, en primer término, la forma en que los sujetos acceden a la ciudadanía; ya no solo como el producto o la consecuencia de una dádiva del Estado, sino como una forma de integración y participación en la que los propios sujetos son capaces de avanzar hacia lo que Elizabet Jelin ha llamado la construcción de la ciudadanía “desde abajo”, que se encuentra en directa relación con la constitución de un nuevo tipo de sujetos sociales, anclados en las experiencias cotidianas y articulados en torno a una acción colectiva específica desde la que elaboran nuevas formas de ciudadanía. Por tanto, ya no es solo el Estado el que construye ciudadanía ni son solo sus términos o condiciones los que definen el carácter de esta, sino que, por el contrario, son los propios sujetos los que aspiran a la ciudadanía y esperan definir los términos en que esta les sea reconocida ( 30-31).*

### **3.2. Política de dignidad igualitaria y la política del reconocimiento de la diferencia**

Para tratar sobre política de dignidad igualitaria es necesario plantear la pregunta siguiente: ¿cuándo surge la ciudadanía? Cuando los sujetos transitan de ser reconocidos como objetos a ser reconocidos como sujetos de poder; como señala Sinesio López: «la emergencia de la ciudadanía implica un cambio fundamental en las relaciones tradicionales de autoridad. Gracias a ese cambio, los gobernados dejan de ser un objeto sometido al poder para convertirse en un sujeto y titular legítimo del poder» (1997:43), pues las sociedades jerárquicas se basaban en la asimetría ontológica del ser humano y el sustento filosófico fue que las diferencias fueron dadas por naturaleza. Como dice Fidel Tubino: «en el siglo XVIII la teoría crítica de la Ilustración dismanteló la filosofía orgánica de las élites preilustradas de las sociedades jerárquicas y proporcionó el fundamento filosófico al desarrollo de las políticas igualitaristas y homogeneizadoras de los estados nacionales modernos» (2002:56-57). Y «la Revolución francesa instaló la libertad y la ciudadanía en el léxico político, pero no fijó sus significados, los límites espaciales de los conceptos o los criterios culturales necesarios para su aplicación» (Cooper, 2009:273-274).

La política del reconocimiento igualitario ha significado y puede significar dos cosas bastante distintas relacionadas respectivamente con los dos cambios principales. Para Charles Taylor, «Con el tránsito del honor a la dignidad sobrevino la política del universalismo que subraya la dignidad igual de todos los ciudadanos, y el contenido de esta política fue la igualación de los derechos y de los títulos ... y el segundo cambio, el desarrollo del concepto moderno de identidad, hizo surgir la política de la diferencia» (59-60).

La política de la diferencia surge como respuesta a los efectos de la política de la dignidad universal redefiniendo el estatus igualitario. Al respecto Taylor dice: «Mientras que la política de la dignidad universal luchaba por unas formas de no discriminación que eran enteramente “ciegas” a los modos en que difieren los ciudadanos, en cambio la política de la diferencia a menudo redefine la no discriminación exigiendo que hagamos de estas distinciones la base del tratamiento diferencial» (1993: 62).

Nuevamente Taylor señala que «el reconocimiento debido no solo es una cortesía que debemos a los demás; es una necesidad humana vital» (1993:45). Asimismo, Axel Honneth, basado en Hegel, entiende el reconocimiento como:

*un proceso social e integral de formación, digamos quizá como el proceso habitual de socialización de los individuos, el cual puede ser visto tanto desde la perspectiva de su desarrollo progresivo como desde la perspectiva de su situación global momentánea. Este proceso comprende al menos tres grandes tipos de relaciones sociales en las que todos nos vemos constantemente involucrados: las relaciones interpersonales de amor o amistad, las relaciones jurídicas dentro de la sociedad y las relaciones valorativas propias de una determinada cultura. Todos los seres humanos pasamos por esta triple forma de socialización y la mantenemos y cultivamos permanentemente en nuestra vida: somos siempre personas que aman o son amadas, somos sujetos de derecho y vivimos además en tradiciones culturales particulares. Y en cada uno de estos tipos de relaciones establecemos un vínculo con los otros que idealmente se expresa en el reconocimiento exitoso de la unidad en la diversidad o, cuando el vínculo no es ideal, en el desconocimiento de la diversidad y en la fractura de la unidad. (Honneth, citado por Giusti, 2011:39).*



Crear una concepción universal de ciudadanía que trascienda las diferencias individuales o grupales es injusto, por eso Iris Marión Young dice:

*el intento de realizar un ideal de ciudadanía universal que encuentra lo público en la mayoría antagónica de la particularidad, en lo común frente a la diferencia tenderá a excluir o a poner en desventaja a algunos grupos, pese a que dispongan formalmente de idéntico status de ciudadanía. La idea de lo público como universal y la concomitante identificación de la particularidad con la privacidad hacen de la homogeneidad un requisito de la participación pública. Al ejercer su ciudadanía, todos los ciudadanos/as deberían asumir el mismo e imparcial punto de vista, que trasciende todos los intereses, perspectivas y experiencias particulares. Pero esa perspectiva general imparcial es un mito. Las personas, necesariamente y correctamente, consideran los asuntos públicos en términos influidos por su experiencia y su percepción de las relaciones sociales. Diferentes grupos tienen diferentes necesidades, culturas, historia, experiencias y percepciones de las relaciones sociales que influyen en la interpretación de su significado y consecuencias de las propuestas políticas, así como en su forma de razonar políticamente. Estas diferencias en la interpretación política no son meramente, ni siquiera básicamente, un resultado de intereses diferentes o conflictivos, puesto que los grupos tienen interpretaciones diferentes aún cuando buscan promover la justicia y no sólo la satisfacción de sus propios fines interesados. En una sociedad donde algunos son privilegiados, mientras otros están oprimidos, insistir en que las personas, en tanto ciudadanos / as, deberían omitir sus experiencias y afiliaciones particulares para adoptar un punto de vista general solo sirve para reforzar ese privilegio, puesto que las perspectivas e intereses de los privilegiados tenderán a dominar ese sector público unificado, marginando o silenciando a todos los grupos restantes(Young en López, 1997:386).*

### 3.3. Multiculturalismo y ciudadanía

El multiculturalismo implica la coexistencia paralela de distintas culturas bajo el principio de la tolerancia. «El multiculturalismo es, por tanto, una corriente de pensamiento, a su vez internamente plural, que formula propuestas políticas en tal sentido» (Pérez, José 136). En la medida en que el multiculturalismo no abandona los ideales sociales de la ilustración, «se ha propuesto radicalizar los ideales de autonomía y tolerancia de la ilustración» (Tubino, 2002:60). Por otro lado, las acciones afirmativas del multiculturalismo generan jerarquía en la diversidad, pero no unidad en la diversidad, «las acciones afirmativas son políticas multiculturales que genera equidad social pero no genera integración cultural. En lugar de sociedades interculturales e integradas, han generado un conglomerado de sociedades paralelas que se toleran entre sí pero que no se comunican entre ellas» (Tubino, 2003:177).

Debido a la presencia de diversas culturas, el Estado liberal promueve la neutralidad cultural. Taylor afirma que «el liberalismo no puede ni debe atribuirse una completa neutralidad cultural», puesto que «el liberalismo no constituye un posible campo de reunión para todas las culturas, sino que es la expresión política de cierto género de culturas, totalmente incompatible con otros géneros» (1993:92-93). Por lo tanto, la neutralidad cultural del Estado es ilusoria, porque:

*Un ciudadano tiene que elegir entre una cultura societal con funcionalidad social –la cultura hegemónica– y otras culturas disfuncionales, el ciudadano está siendo coactado a enajenarse de su cultura de procedencia, asimilarse a la cultura hegemónica para poder acceder a la educación pública, al círculo laboral, a la administración de justicia, a los medios de comunicación, etc. De lo que se trata es de generar las condiciones que permitan a los ciudadanos el ejercicio de su libertad individual de escoger su identidad, su credo, su horizonte moral (Tubino, 2002: 68).*

Para Fidel Tubino, el multiculturalismo nórdico es liberalismo II. La democracia norteamericana es liberalismo I. Los multiculturalistas no han cesado de desenmascarar al liberalismo I, toda vez que la neutralidad cultural del Estado es una máscara, pues «todas las naciones-Estado actúan para reproducir a hombres y mujeres de cierta índole. El Estado no puede dejar de decidir qué lengua y qué historia promover en la educación pública y, de esta manera, sella su compromiso con la promoción de una cierta identidad cultural colectiva. El liberalismo II es, en otras palabras, un intento de practicar la ecología cultural sin vulnerar los derechos individuales» (2002: 68).

### **3.4. Del multiculturalismo a la interculturalidad y democracia**

Guevara sostiene que a nivel del sistema internacional, se reconoce 191 Estados y, de acuerdo con los estudios, hay grupos étnicos, pueblos indígenas y naciones que superan los cinco mil; solo el 10% de los Estados son étnicamente homogéneos y únicamente el 50% de los Estados tienen un grupo étnico que suma tres cuartas partes de sus poblaciones respectivas. Se calcula que en las veinte repúblicas latinoamericanas viven unos 400 grupos étnicos indígenas con más de 30 millones de personas. En el caso del Perú, la multiplicidad étnica se expresa en la presencia de unos 61 grupos étnicos amazónicos, los grandes grupos etnolingüísticos quechua y aimara, y las «colonias» de migrantes. Frente a esta realidad, Norma Fuller manifiesta:

*Es necesario diferenciar la interculturalidad como situación de hecho de la interculturalidad como principio normativo. El primer caso expresa el dato concreto de que en la mayoría de las naciones-Estado coexisten culturas diferentes, que pueden convivir armónicamente o, como es el caso de gran parte de América Latina, pueden rechazarse y discriminarse. El segundo se refiere a una propuesta ético-política que busca perfeccionar el concepto de ciudadanía*

*con el fin de añadir a los derechos ya consagrados de libertad e igualdad ante la ley, el del reconocimiento de los derechos culturales de los pueblos, culturas y grupos étnicos que conviven dentro de las fronteras de las naciones-Estado (2002:10).*

También, de similar manera, Fidel Tubino plantea distinguir:

*La interculturalidad como concepto descriptivo y como propuesta ético-política. Como concepto descriptivo se refiere a las diversas formas de relación entre las culturas que encontramos de hecho en la vida social. La aculturación, el mestizaje, el sincretismo, la hibridación y la diglosia cultural son algunos de los conceptos descriptivos que se han inventado para describir la complejidad de las relaciones interculturales. Y con respecto a la interculturalidad como propuesta ético – política, como deber – ser posible, como utopía realizable. En tanto, las políticas interculturales buscan resolver los problemas que generaron la discriminación positiva y la acción afirmativa y los problemas que no se resuelven (2002:73).*

Ante la presencia de la diversidad cultural, es necesario concebir al diferente en condiciones de igualdad y no como culturas inferiores ni superiores. Debe haber diálogo, respeto, reconocimiento recíproco con el fin de evitar toda jerarquización en la diversidad cultural. Al respecto, Catherine Walsh sostiene:

*Como concepto y práctica, la interculturalidad significa ‘entre culturas’, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por*

*encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad (Walsh, citado por Córdova, 2003:107).*

Es digno el reconocimiento de las diversas culturas, su capacidad y su aporte a la convivencia humana, por ende de la generación de cultura, ya que en distintos contextos se generan distintas habilidades, entendiendo la cultura como sistema de significados y prácticas. En ese sentido, es propicio girar hacia la interculturalidad como propuesta ética-política, pero no en discurso, sino para empalmar en la realidad, como dice Etxeberria:

*Si en el multiculturalismo la palabra clave es respeto, en la interculturalidad la palabra clave es diálogo. La interculturalidad reasume en parte el multiculturalismo, en el sentido de que para dialogar hay que presuponer respeto mutuo y condiciones de igualdad entre quienes dialogan. Lo reasume también en el sentido de que para dotarse de la consistencia que se necesita para entrar en un diálogo creativo, todo colectivo cultural precisa cierta separación (relativa), esto es, el cultivo de sus rasgos definitorios propios en ámbitos e instituciones específicas. Pero a diferencia del multiculturalismo, desde la interculturalidad se propugna específicamente el diálogo y encuentro entre culturas, porque es visto como vehículo de desarrollo creativo de estas y como expresión de la solidaridad entre estas. La interculturalidad no precisa solo de las condiciones antedichas de respeto mutuo y de igualdad de circunstancias sociales, precisa también que los grupos implicados se reconozcan recíproca y empáticamente capacidad de creación cultural, que reconozcan que ninguna cultura realiza plenamente las posibilidades del ser humano y que todas aportan posibilidades dignas de ser tenidas en cuenta. Como diálogo que es, no pretende fundirse con el otro en una única identidad, pretende reforzar creativa y solidariamente las identidades*

*específicas de los que dialogan, desde la interpelación y desde la incorporación inculturada –esto es “digerida” y en cierto sentido transformada por el marco cultural propio– de elementos provenientes de las otras culturas*(Etxeberria, 2003:107).

También Pérez señala: «ni asimilación a la cultura dominante ni segregación culturalista son caminos transitables para sociedades de pluralidad compleja, si queremos verdaderos espacios de convivencia democrática. De ahí la necesidad de acogernos a la otra alternativa que se vislumbra como viable: la del diálogo intercultural» (138). Para el diálogo no solo se requiere concebir al otro como igual sino también que haya buenas condiciones de vida, «lo primero que urge es establecer las condiciones en las que ese diálogo intercultural puede ser viable: simetría entre los interlocutores, igual acceso a la información disponible, conocimiento adecuado del otro, y condiciones de reconocimiento recíproco -que han de plasmarse políticamente, pero que también requieren condiciones materiales de vida consonantes con las exigencias de una vida digna» (140).

Teniendo en consideración que «no ha existido ni existirá jamás verdadera democracia» (Bobbio, 1996:34), entonces es preciso que la democracia como sistema sea molde en cada situación particular y contexto específico. «No hay interculturalidad si no hay ciudadanía intercultural, si no hay democracia intercultural y si no se crea un sistema diferenciado para la ciudadanía» (Vigil y Zariquiey 2003:5). También Touraine sostiene que «la democracia es imposible si un actor se identifica con la racionalidad universal y reduce a los otros a la defensa de su identidad particular» (2000:201). Por lo tanto, hay la necesidad de cambiar la racionalidad, como dice Tubino, «la radicalización de la democracia moderna nos obliga a transitar de la racionalidad monológica a la racionalidad dialógica y de la racionalidad instrumental a la racionalidad prudencial» (2003:169). Incluso Touraine dice: «Llamo democracia a la sociedad que asocia la mayor diversidad cultural posible al uso más extendido posible de la razón. Sobre todo,

no recurramos a una revancha de la afectividad sobre la razón, de la tradición sobre la modernidad o del equilibrio sobre el cambio. Procuremos combinar y no oponer o escoger. Puesto que todo rumbo de separación resulta en el fortalecimiento de las relaciones de dominación y exclusión» (Touraine, 2000:203). Asimismo, recalca que la sociedad democrática reconoce el trabajo del sujeto, incluso aún donde otros no ven sino transgresión de las normas.

La democracia no solamente implica procedimientos e instituciones, sino también valores como la paz, justicia, libertad e igualdad. «La democracia no nace del Estado de derecho sino del llamado a unos principios éticos –libertad, justicia– en nombre de la mayoría sin poder y contra los intereses dominantes» (Touraine, 2000:35). Entonces si la democracia encarna unos principios, también la interculturalidad implica principios. Pérez Tapias señala: «hay que reparar en que la justicia como valor sobre el que ha de gravitar el encuentro intercultural, para que de dicho encuentro salgan acuerdos concretos acerca de los principios en los que han de traducirse, se sitúa en el centro de una constelación axiológica en la que no puede faltar la paz, la libertad y la igualdad, entendidos como “valores de la vida digna” que –desde un punto de vista normativo– van en la entraña de la democracia como sistema político» (2003:142).

### **3.5. El nuevo concepto de la ciudadanía: la ciudadanía diferenciada**

Will Kymlicka (1996) propone un nuevo concepto de ciudadanía: la noción de «ciudadanía diferenciada». Consiste en la idea de una multiplicidad de ciudadanía culturalmente diferenciadas, puesto que la noción de ciudadanía desde la perspectiva de la Ilustración estuvo y aún está enfrascada en un modelo etnocéntrico y con ello está ligada a nuevas formas de colonialismo cultural.

La idea de ciudadanía diferenciada es una nueva forma de concebir la ciudadanía, pero muchos se resisten a la idea; como José María Fariñas dice:

*Cuando se plantea la posibilidad de llegar a construir una idea de «ciudadanía fragmentada», con diferencias jurídicas y políticamente estables, inmediatamente se piensa en la ruptura de la cohesión social, jurídica y política, a la vez que en la vuelta a situaciones premodernas. Sin embargo, frecuentemente, se olvida que contribuyen mucho más a la ruptura de la cohesión social las propuestas neoliberales de desregulación y de desprotección social de los ciudadanos, que la propuesta de reconocimiento y preservación de las diferencias en el ámbito de las estructuras públicas. Por otra parte, el cuestionar el concepto tradicional de ciudadanía en favor de un concepto «diferenciado» o «fragmentado» de la misma, no implica el cuestionar la igualdad de todos los individuos ante la ley, sino considerar, que esa igualdad formal requiere hoy día ser articulada con el reconocimiento de circunstancias especiales que están presentes en determinados grupos diferenciados, porque, en ocasiones, aquellas circunstancias especiales impiden que los individuos pertenecientes a dichos grupos puedan ejercer sus derechos de forma igual a como la ejercen otros individuos, en los que no confluyen las referidas especialidades. De lo contrario, se seguiría generando un sutil mecanismo de exclusión (Fariñas, 1999).*

Actualmente, en plena concepción de igualdad entre ciudadanos hay profunda desigualdad de oportunidades entre los ciudadanos y ciudadanas. Al respecto, Rodrigo Montoya sostiene:

*La igualdad formal de todos los individuos dentro de la ideología del Estado Nación parece suficiente pero esconde una profunda desigualdad de oportunidades para que los individuos y los pueblos ejerzan plenamente sus derechos. Teniendo en cuenta exclusivamente el derecho al voto hay en nuestros países ciudadanos de primera, segunda y tercera categorías: en la **primera** están los que saben leer y escribir y pueden elegir y ser elegidos; en la **segunda**,*



*aquellos analfabetos que pueden elegir pero no pueden ser elegidos; y, en la tercera, los analfabetos que tienen la potestad de votar si lo desean pero que tampoco pueden ser elegidos. En suma, la escolaridad occidental define la condición de ciudadano. De ese modo, el saber y la experiencia de los adultos analfabetos de las sociedades indígenas – analfabetos pero sabios – no es tomada en cuenta. El panorama es más complejo y negativo aún si se observa que una proporción importante de hombres y mujeres no tiene registro de nacimientos, documentos personales y por lo tanto están excluidos de esa pequeña parcela de ciudadanía (1998:67).*

Debido a la presencia de diversas culturas en los Estados nacionales de democracias liberales, se plantea la protección de los derechos civiles y políticos de los individuos a través de derechos especiales. Tubino señala cuatro tipos de derechos especiales e indica que depende de cada caso particular:

- a. Los derechos especiales de representación se refieren al otorgamiento temporal de cuotas de representación en las asambleas a los grupos vulnerables. Pero indica que son acciones afirmativas que no atacan el fondo del problema. Son medidas a corto plazo. Para que sean duraderas deben ser complementadas con acciones transformativas a largo plazo que cambien las estructuras del imaginario simbólico de la sociedad en su conjunto.
- b. Los derechos especiales de autogobierno le confieren autonomía política a las minorías nacionales para que no sean excluidas por la mayoría «en decisiones que son de particular importancia para su cultura, como las cuestiones de educación, inmigración, desarrollo de recursos, lengua y derecho familiar» (Kymlicka 1996: 61). También se refieren al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a participar en las decisiones que se toman en relación a los recursos naturales de sus respectivos territorios. El convenio 169 de la OIT es especialmente relevante al respecto.

- c. Los derechos especiales lingüísticos se refieren al derecho de los pueblos a utilizar sus lenguas en la esfera pública. «En la mayoría de Estados democráticos, los gobiernos han adoptado el lenguaje de la mayoría como el único “lenguaje oficial”»; esto es, el lenguaje del gobierno, la burocracia, las cortes, las escuelas y más. Todos los ciudadanos han sido forzados a aprender este lenguaje de la escuela, y la fluidez en su uso es requerida para trabajar o para tratar con el gobierno. La oficialización de una sola lengua en un contexto plurilingüe es una manera de silenciar la manifestación de la diversidad. Es una política de construcción nacional (*national building*) destinada a asimilar a las culturas subalternas a los modelos de expresión y de pensamiento de la cultura hegemónica. «Hay firmes evidencias de que los lenguajes no pueden sobrevivir por mucho tiempo en el mundo moderno a no ser que sean usados en la vida pública, de esta manera, las decisiones gubernamentales relativas a los lenguajes oficiales son, en efecto, decisiones acerca de qué lenguas prosperarán y cuáles se extinguirán» (Kymlicka 2001:78). La protección de las culturas se debe realizar, por ello, a través de la protección de las lenguas y estas se protegen oficializando su uso público.
- d. Los derechos especiales poliétnicos «protegen prácticas religiosas y culturales específicas que podrían no estar adecuadamente apoyadas mediante el mercado o que están en desventaja en la legislación vigente». (Kymlicka 1996:61). Dentro de la «protección externa» de las creencias y las costumbres, el derecho consuetudinario ocupa un lugar especial. La protección del pluralismo jurídico, al igual que la protección del pluralismo lingüístico, solo se garantiza oficializando su uso público. Los problemas se presentan cuando hay colisión entre el derecho estatal y el derecho consuetudinario. La solución clásica es permitir el uso del derecho consuetudinario mientras no contravenga al derecho oficial. Pero el problema es que el derecho estatal no está interculturalizado. Es un derecho etnocéntrico. Por ello hay que empezar por revisarlo para enraizarlo y diversificarlo culturalmente para que no sea más una externalidad impuesta (180).

El reconocimiento de la diversidad cultural no se puede afrontar con políticas sociales dictadas desde los gobiernos, sino que trata de enraizarse en las reivindicaciones de las ciudadanías locales.

### 3.6. Poscolonialidad y la ciudadanía subalterna

Las diversas identidades en el Perú son fruto de la coexistencia de la diversidad étnica y cultural, pero estas identidades han sido atropelladas en la conquista, durante el periodo colonial y republicano por falta de reconocimiento. Como sostiene Frantz Fanon: «la principal arma de los colonizadores es la imposición de su imagen de los colonizados sobre el pueblo subyugado» (Fanon, 1961, citado en Taylor, 1993:96). Ya que se inició con la desintegración de los patrones de poder y la civilización, y «la meta era en primer lugar, lograr que los subyugados interiorizaran como autoimagen la imagen que los colonizadores tenían de ellos y, al mismo tiempo, que interiorizaran como imagen de los colonizadores la que ellos tenían de sí mismos. De esta manera se lograba no solamente deteriorar la identidad étnica de los indígenas, sino que ellos incorporarán una autoimagen negativa que favoreciera el automenosprecio y el aprecio del colonizador» (Tubino, 2002:56).

El menosprecio que han sufrido los sobrevivientes de la Conquista se arrastra en la mente de muchos ciudadanos y ciudadanas hasta la actualidad y es importante visualizar y atender las identidades étnicas porque la imagen despectiva y destructiva fue proyectada sistemáticamente. Como dice Aníbal Quijano: «la vasta y plural historia de identidades y memorias (sus nombres más famosos son de todos conocidos, Mayas, Aztecas, Incas) del mundo conquistado, fue deliberadamente destruida y sobre toda la población sobreviviente fue impuesta una única identidad, racial, colonial y derogatoria, “indios”. Así, además de la destrucción de su previo mundo histórico-cultural, a esos pueblos les fue impuesto la idea de raza y una identidad racial, como emblema de su nuevo lugar en el universo del poder. Y, peor, durante 500 años les fue enseñado a mirarse con el ojo del dominador» (2006:355). Además, Mignolo sostiene que «con el inicio del colonialismo en América comienza no solo la organización colonial del mundo sino –simultáneamente– la constitución colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria y del imaginario» (Mignolo, 1995 citado por Lander, 2000:16).

El Perú antes de la llegada de los españoles era una sociedad oral, donde había primacía de la palabra hablada; pero después se impuso la sociedad escrita y «el paso de una tecnología de la información o tecnosfera oral a una escrital y a una electronal supone modificaciones en las instituciones sociales (desde la familia hasta el Estado), en las relaciones de interacción y en los modos de aprehender/aprender, así como en los valores» (Juan Biondi y Eduardo Zapata, 2006: 54).

El reconocimiento se funda merced a que las personas de manera individual o grupal necesitan del otro para poder construir su identidad de manera estable, además hay nexo entre la formación de la identidad de los individuos o grupo de individuos y el reconocimiento. Como dice Taylor:

*Nuestra identidad se moldea en parte por el reconocimiento o por la falta de este; a menudo, también, por el falso reconocimiento de otros, y así, un individuo o un grupo de personas puede sufrir un verdadero daño, una auténtica deformación si la gente o la sociedad que lo rodean le muestran, como reflejo, un cuadro limitativo, o degradante o despreciable de sí mismo. El falso reconocimiento o la falta de reconocimiento pueden causar daño, puede ser una forma de opresión que aprisione a alguien en un modo de ser falso, deformado y reducido (43-44).*

Por otra parte, es importante entender cómo surge la temática o la propuesta intercultural, Catherine Walsh sostiene:

*Esta temática no parte de la diversidad étnico cultural en sí, es decir, de la heterogeneidad de la población y la emergente visibilidad de los pueblos indígenas y afros. Mas bien, es central a la diferencia colonial que ha relegado y subalternizado a estos pueblos, sus prácticas y conocimientos demarcando, así, la relación entre localizaciones geo-históricas/culturales y la epistemología*

*moderna; la diferenciación entre saberes locales –folclóricos, no académicos– y la universalidad epistémica de la modernidad. (118).*

Entonces de acuerdo a su planteamiento de Walsh, son estas relaciones de subalternidad y colonialidad que la interculturalidad, como paradigma y proyecto, pretende estallar. Asimismo ella sostiene:

*“las diferencias étnico-culturales no son naturales ni parten de la etnicidad en sí, son fenómenos contruidos y reproducidos como parte de una subjetividad y locus de enunciación definidos por la experiencia de colonización y subalternización social, política y cultural, tanto del pasado como del presente...el problema de estas propuestas es que conciben a la interculturalidad como un asunto de voluntad personal; no como un problema enraizado en relaciones de poder. Este es el foco o núcleo de la lucha de sentidos (2002:119).*

Actualmente los pueblos indígenas son subalternizados, de manera que hay establecimiento de relación asimétrica entre las culturas y «Guha definió al subalterno, a grandes rasgos, como cualquiera que esté subordinado, en términos de clase, casta, edad, género y oficio o de cualquier otro modo» (Mallon 2009:163). Pero la subalternización de las diversas culturas ha dejado secuelas perjudiciales haciéndose vigentes en el tiempo y espacio. Asimismo, Mallon sostiene que los modelos importados de Europa como los marxismos, una fe en el progreso y la modernidad, un compromiso con la revolución como una transformación progresista, lineal y desarrollista están siendo cuestionados y la poscolonialidad «puede concebirse mejor como una forma de conciencia contestataria/oposicional que emerge ya sea de condiciones imperiales y coloniales preexistentes o de condiciones subalternas actuales que fomentan la aparición de procesos dirigidos a la revisión de normas y prácticas de formas de dominación antecedentes o aún vigentes» (Klor de Alva, 2009:116).

### 3.7. Construcción de la ciudadanía en la interacción social

Los sujetos como sujetos activos no ejercen su ciudadanía desde la concepción liberal de ciudadanía, sino desde sus propios contextos y experiencias. Hay enorme diferencia entre lo que concibe en teoría la ciudadanía (ciudadanía imaginaria) y la ciudadanía real (práctica ciudadana), pues como Fidel Tubino dice «la ciudadanía no es un universal abstracto, es un universal concreto arraigado en tradiciones y localizado en un espacio cargado de significados. Los derechos humanos no son atributos de un sujeto desterritorializado. Son atributos de subjetividades encarnadas y localizadas que conviven con otras subjetividades en comunidades valorativas concretas» (2003:174).

Asumiendo la construcción de la ciudadanía desde la socialización en espacios específicos, George H. Mead nos dice: «Cada persona actúa en referencia no solo al otro inmediato sino a un otro social más generalizado. Este otro generalizado es interno al actor, producto de su larga socialización y su integración a la vida colectiva» (citado en Alexander Jeffrey 1997:170). Además, Mead señala: «el “yo” es la reacción del organismo a las actitudes de los otros; el “mí” es la serie de actitudes organizadas de los otros que adopta uno mismo» (1982:202).

Definir la ciudadanía solo en términos de deberes y derechos es tener una visión pasiva del sujeto, sin embargo, el ciudadano como sujeto es reflexivo que interactúa, interpreta, imagina, asigna y comparte significados. «El agente, a través de las prácticas de la vida cotidiana, construye el mundo social. Nunca es pasivo» (Bourdieu, citado por Flachsland, 2003:35). También Mead diferencia entre el «yo» y el «mí» de un actor. El «yo» es el elemento nuevo, el «mí» es el elemento social que corresponde al otro generalizado. Mead dice que el «yo» y el «mí» son «dos fases diferenciadas» del mismo acto. Al describir la génesis y la constitución de los actos, sugiere una alternancia entre fases contingentes y determinadas (citado por Jeffrey: 172).

Garfinkel sostiene que el actor social no es un idiota cultural, «los sociólogos conciben al hombre-en-sociedad como a un idiota desprovisto de juicio (*a judgmental dope*)...El actor social de los sociólogos es un “idiota cultural” que produce la estabilidad de la sociedad al actuar de acuerdo con las alternativas de acción preestablecidas y legítimas que le proporciona la cultura» (citado por Coulon 1988: 57-58). Este sustento de Garfinkel se relaciona con la crítica a las tendencias sociológicas de enfoque estructural funcionalista, ya que la sociología de Garfinkel, «está constituida sobre el reconocimiento de la capacidad reflexiva e interpretativa propia de todo actor social» (citado por Coulon 1988:56).

En vista de que la socialización se produce en el mundo social, para Schütz «el mundo social no es inestructurado. Tiene un sentido particular y una estructura de significaciones para quienes viven en él. Las personas interpretan el mundo mediante una serie de construcciones de sentido común acerca de la realidad cotidiana; estos objetos de pensamiento determinan su conducta, definen los objetivos de acción y los medios para alcanzar esos objetivos» (citado por Reynoso, 1998:113-114). En el mundo social aimara, los pobladores interactúan con sus semejantes a través de comunicación significativa y «el sujeto no sólo es social por su dimensión interaccionista, también lo es porque depende de símbolos que comparte –el lenguaje–, principalmente con otros sujetos» (Baert, 2001: 88), de ahí que «el mundo simbólico de Mead también afecta a los “gestos no verbales” y a la “comunicación no verbal”. Saludar a alguien, inclinar la cabeza, el comportamiento en la mesa, guiñar o hacer como que alguien no está, todos estos son ejemplos de comunicación no verbal» (Mead citado por Baert, 2001: 88).

La interacción implica una mutua sintonía en la comunicación entre los sujetos, de manera que los miembros integrantes de las comunidades rurales aimaras tienen sus propias formas de interactuar y Mead «llamaba interacción a la “conversación de gestos”. Los gestos se refieren a los múltiples movimientos y expresiones que realiza la gente, incluido el lenguaje» (citado por Jeffrey, 1997: 169).



En determinados espacios específicos (zona aimara) hay compartimiento de contexto significativo. Por consiguiente, «para que se dé la comunicación es preciso compartir el contexto significativo en el que se da. Por lo tanto, no basta con compartir un mundo, hay que ser capaz de comprenderlo de un modo similar a como el otro lo comprende, pues solo de ese modo habrá el intercambio comunicativo» (Martin, 1993: 211). El mundo de la vida es un mundo de objetos que se experimentan en la percepción real, en tanto, los seres humanos se relacionan con su medio partiendo del significado que le atribuyen. «Blumer señaló que, para un individuo, el significado de un objeto procede de la tendencia que tenga tal individuo a actuar en relación con dicho objeto. En consecuencia, la disposición que muestre una persona a utilizar un lápiz como instrumento de escritura es lo que dará a este objeto el significado de lo que denominamos “un lápiz”. De esto se desprende que cada objeto puede tener varios significados» (Blumer, citado por Baert, 2001: 92).

Los ciudadanos y ciudadanas aimaras interactúan en el mundo de la vida cotidiana. «Y el mundo de la vida cotidiana no es un mundo privado, sino compartido con mis semejantes» (Schütz, 1932, citado en Brodersen 1964:33). En este ámbito se genera relaciones comunes, en el ámbito de la relación del Nosotros, donde hay pautas culturales comunes, relaciones sociales cotidianas y los significados son socialmente compartidos. Al respecto, Martín sostiene:

*El mundo de la vida cotidiana es un mundo intersubjetivo, ya que vivimos en él como hombres que se encuentran rodeados de semejantes, y estamos vinculados a ellos por nuestras acciones recíprocas, así como por una comprensión mutua. Además, el significado que ellos dan a los fenómenos del mundo está dirigido a nosotros, así como el significado que nosotros damos a nuestras experiencias está dirigido a ellos, de tal modo que, como ya dijimos, el mundo deja de ser “mi mundo” para pasar a ser “nuestro mundo” (1993: 93).*

A partir de la fundación de la República, la ciudadanía peruana se construyó desde una relación «Nosotros» y «Ellos», pues la élite gobierna con profundo desconocimiento y fragmentación de los Otros que se encontraban en la lejanía del poder central y cuando se menciona la construcción de la ciudadanía desde ámbito de relación del Nosotros, se hace referencia a la interacción de los sujetos del mismo mundo de la vida. En efecto, la relación Nosotros implica todo un flujo de conciencias en una verdadera simultaneidad, «en un encuentro, la vida consciente del Otro es accesible para mí a través de una máxima abundancia de síntomas. Puesto que él se halla de cuerpo presente ante mí, puedo aprehender los procesos de su conciencia, no solo mediante lo que él deliberadamente comparte conmigo, sino también mediante la observación e interpretación de sus movimientos, su expresión facial, sus gestos, el ritmo y la entonación con que habla, etc.»(Schütz y Luckmann, 2003:80). Por eso, Martin sostiene que «el carácter social de la vida cotidiana está determinado por la situación espacial y temporal de los sujetos que viven en el mundo. Si atendemos a la temporalidad, tenemos que solo en simultaneidad es posible alcanzar la familiaridad, mientras que conforme menos simultánea es la presencia de dos interlocutores, más crece el grado de anonimato entre ellos. Lo mismo sucede si nos referimos al espacio: la simultaneidad o compresencia genera la familiaridad, mientras que la ausencia genera anonimato» (1993: 94 - 95).

En el proceso de construcción de la ciudadanía peruana, la imaginación ha jugado un papel importante, ya que frente al desconocimiento de los pueblos indígenas se impuso la imaginación en una relación «Nosotros» y «Ellos». Para Schütz y Luckmann «el momento de fundación de la orientación Ellos es aquel en que uno imagina al Otro, cuya existencia supone o sospecha, como un punto de referencia de virtudes, características, etc., típicas» (92), además señala que «en el encuentro social experimento así concretamente a un semejante de manera inmediata, en su existencia fáctica y su ser de tal y cual modo, capto la existencia fáctica y el ser de tal y cual modo de un contemporáneo únicamente por medio de tipificaciones derivadas»( 87).

### 3.8. Percepción y construcción de la ciudadanía peruana

En el Perú la construcción de la ciudadanía se ha concebido como un proceso de formación y se ha instrumentalizado la educación para promover la construcción de la ciudadanía. Al respecto, Carlos Iván Degregori sostiene que «los procesos de construcción del Estado de derecho y de ampliación de la ciudadanía son asumidos como un “proceso civilizatorio”, o más concretamente pedagógico, de educación ciudadana; y no como un proceso de negociación de poder entre diferentes sectores, donde también los pobres, excluidos o “étnicos”, juegan un rol activo y dejan su huella» (2004:50).

Actualmente, muchos de los ciudadanos, a pesar de tener igual condición de ciudadanía, no son reconocidos como tales sino como sujetos que necesitan ser formados, debido al prejuicio existente. Como sostiene Víctor Vich «al igual que dentro de la lógica senderista mucho más que “ciudadanos” la mayor cantidad de gente en el Perú sigue siendo conceptualizada en los términos del tutelaje, vale decir, como “menores de edad” que necesitan que los “eduquen” y los castiguen utilizando, si es preciso, los tradicionales métodos de las antiguas haciendas» (2002:51). En el caso peruano, el estatus de ciudadanía ha sido adscrito, mas no fue fruto de una conquista social desde abajo, sino que se imaginó a la ciudadanía semejante a los países occidentales. Como dice Chatterjee: «el Estado que comenzó a surgir en los países poscoloniales interpeló a la sociedad a partir de un modelo de nación que estuvo basado en conceptos universales como “ciudadanía”, “sociedad civil”, “democracia”, etc. que no existían previamente en dichas sociedades» (citado en Vich. 2007:10). En consecuencia, la concepción de ciudadanía convencional no empalmó en la práctica y significado de la gran mayoría de la población que existía, históricamente, en el supuesto Perú moderno. A su vez, Chatterjee sostiene que en los países poscoloniales no ha habido ciudadanos sino poblaciones. Y según Basadre, «los liberales del siglo XIX instauraron las instituciones políticas modernas en el Perú, pero no porque en el país

había modernidad económica, social y política, sino simplemente como copia e imitación de países occidentales...; dichas instituciones modernas coexistieron con una estructura patrimonial e incluso sultanista del poder, con una sociedad de señores, siervos y esclavos y con una economía agraria pre-capitalista» (citado en López, 1997: 217).

En la búsqueda de homogeneización de la ciudadanía peruana, se han establecido estrategias políticas y culturales de construcción de ciudadanía, tal como indica López: «en un país con una enorme heterogeneidad cultural como el Perú no bastan las estrategias políticas para construir ciudadanía. Ha sido necesario apelar también a las estrategias específicamente culturales» (219). Por lo tanto, la ciudadanía peruana ha sido vista por las élites criollas como un conjunto de sujetos pasivos y se emprendió una serie de estrategias. Para Sinesio López, el proceso de formación de ciudadanía ha sido un proceso complejo, influenciado históricamente por dos matrices culturales clásicas: el comunitarismo y el liberalismo. Las estrategias de construcción de ciudadanía fueron promovidas desde el Estado, consistentes primero en acriollamiento forzado y segundo en un acriollamiento amable –estas han sido principalmente educativas– y se han visto obstaculizadas constantemente por la heterogeneidad existente, pero los criollos se han negado permanentemente a desarrollar políticas de reconocimiento de la diferencia cultural y étnica. La tercera fue la cholificación, esto ha sido asumido por la propia población, mediante la migración, inserción al mercado, abandono del habla quechua y de la vestimenta, mas no necesariamente de los valores culturales indígenas y asumiendo los valores occidentales resignificados desde una nueva identidad.

Visualizando comparativamente la construcción de la ciudadanía peruana con los países occidentales, «en el Perú no ha existido una élite central que dirija y organice el proceso de construcción ciudadana, en él han intervenido diversos actores con sus respectivas estrategias, abriendo caminos distintos en dicha construcción» (López, 1997: 230). En cambio, en los países europeos sí hubo una élite central que dirigió y organizó

los procesos de construcción ciudadana. Incluso, «en la época de la independencia, los países hispanoamericanos no tenían una burguesía criolla que pudiera servir como clase nacional dominante; las economías domésticas regionales no estaban bien articuladas entre sí; gran parte de la élite mercantil transatlántica era española; el capital minero requería muchas veces sociedades extranjeras. Así, la élite criolla era una élite regional y no era burguesía nacional» (Lomnitz, 2009:379-380).

Por el otro lado, las estrategias políticas de construcción de la ciudadanía peruana han sido emprendidas por las élites gobernantes desde una hegemonía cerrada, en esto Sinesio López menciona tres grandes estrategias políticas: a) la estrategia de la liberación sin democratización, emprendida por la oligarquía entre 1895 y 1930; esta estuvo restringida a las élites y desembocó en un régimen oligárquico competitivo; b) la estrategia de la democratización emprendida por las clases medias y populares, esta abrió la participación a las multitudes en distintos grados y formas, según los actores de la apertura democrática, y desembocó en una hegemonía incluyente; c) la estrategia de liberación con democratización de las clases medias de los años cincuenta, abrió simultáneamente la participación a las multitudes y la competencia a todas las fuerzas políticas y se dirigió a una democracia de masas, pero a nivel urbano, manteniendo la exclusión de los campesinos.

En la investigación es resaltable la estrategia de «cholificación», en vista de que aquí se observa con claridad al ciudadano como sujeto activo (actor social), porque son los que emprendieron la búsqueda de una nueva identidad y de un reconocimiento social. Como manifiesta Portocarrero «combaten el fantasma del ninguneo, la falta de reconocimiento» (citado en Morales, 2011: 14). Por otro lado, para Tirso Molinari, «los indígenas, y sin pretender alguna romántica idealización, están culturalmente vivos con (y desde) su música, su laboriosidad, su reciprocidad, sus redes de parentesco, su curanderismo, sus fiestas, su gastronomía, su religiosidad semimágica y su concepción del tiempo; hablando sus propias lenguas, apropiándose y resignificando, a su vez, todo

lo que les sea funcional de las estructuras sociales y culturales hegemónicas» (2008: 219).

Después de haberse constituido el Estado Constitucional se dinamizó «el proyecto de construir estados-nación latinoamericanos a imagen y semejanza de los idealizados modelos europeos que establecen cómo deben estar organizadas nuestras sociedades» (Guevara, 2009: 29). En ese contexto desde la mirada externa, eurocéntrica, etnocéntrica e ideológica criolla, relacionada al poder, según Molinari se le percibió a la población indígena bajo tres perspectivas:

1. Desde la expansión de la educación pública. Así, en la «república aristocrática», aparece el ideal liberal de la integración ciudadana de la población indígena, bajo una pragmática expansión educativa pública y con la castellanización compulsiva. Fue esa, entonces, la base para la pendiente tarea de la «integración nacional», derivada de aquella perspectiva liberal.
2. Desde el mestizaje, como proyecto de «unificación e integración nacional» y de «peruanidad», con el cual el impacto cultural-hispánico y el catolicismo se constituyen en el eje de aquella ideal integración criolla-indígena, entendida, a su vez, desde la hegemonía cultural criolla-católica, tal como lo concebían el propio Riva Agüero y sobre todo Víctor Andrés Belaunde.
3. Desde un singular racismo, pero nutrido ya de «justificaciones» biologicistas y positivistas, que reforzaban el más o menos espontáneo e histórico etnocentrismo y racismo criollo-hegemónico. Desde este enfoque es que se aboga por la inmigración de población europea, dado el explícito desprecio frente a la población indígena, pero también frente a la población de origen africano y

asiático. Bajo ese etnocentrismo criollo, mediante el cual se descalificaba la autonomía cultural de la población indígena, surge aquel proyecto «integrador» pero, a su vez, muy cargado de violencia simbólica, con la cual la ideología del «mestizaje» aparece como una suerte de coartada para validar ese hegemonismo criollo (Molinari, 2008: 220).

## **CAPÍTULO IV**

### **CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA AIMARA EN LA REGIÓN PUNO**

#### **4.1. Caracterización de la población**

Ilave, capital de la provincia de El Collao, creada en 1991 por Ley N° 25361, se encuentra ubicada en la sierra sur del altiplano peruano, a 52 km. de distancia de Puno, en la vía Panamericana Sur carretera Puno-Desaguadero (ver anexo N° 1).

El Collao, una de las provincias del departamento de Puno, está conformada por cinco distritos: Ilave, Pilcuyo, Santa Rosa, Capaso y Conduriri. En el cuadro N° 02 se puede apreciar la población de la provincia; el distrito de Ilave concentra el mayor porcentaje de población rural (63.7%), a diferencia de la población urbana 36.3%, y concentra el 65.6% de la población total de la provincia, seguido por el distrito de Pilcuyo con 21.8% de población; ambos distritos se ubican en la zona baja circunlacustre. Y los demás distritos como Capaso, Conduriri y Santa Rosa se encuentran ubicados en las zonas altas y en ellos residen menor porcentaje de población. Lo más resaltante es el predominio de población rural a nivel de todos los distritos. Además, de acuerdo con la distribución de la población a nivel nacional, en la sierra del Perú viven cerca de nueve millones de peruanos, la mitad de los cuales vive en el ámbito rural (4,5 millones de los habitantes).



**Cuadro N° 02****Población en la provincia de El Collao, según distritos, 2005**

Provincia distrito	Población total	Área urbana		Área rural		% total	Zonas
		Población	%	Población	%		
<b>Collao</b>	76749	21533	28,1	55216	71,9	100,0	Alta, media, baja
<b>Ilave</b>	50295	18265	36,3	32030	63,7	65,6	Baja
<b>Capaso</b>	1580	126	8,0	1454	92,0	2,0	Alta
<b>Pilcuyo</b>	16784	1506	9,0	15278	91,0	21,8	Baja
<b>Santa Rosa</b>	4414	1165	26,4	3249	73,6	5,8	Alta
<b>Conduriri</b>	3676	471	12,8	3205	87,2	4,8	Intermedia

**Fuente:** INEI, Censo de población y vivienda 2005.

En la provincia de El Collao, la mayoría de la población es de habla aimara en cuanto lengua materna, y a nivel nacional según los resultados del Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda, el castellano es el idioma que la mayoría de la población ha aprendido en su niñez. Entonces el 83.9% de la población de 5 y más años de edad manifestó haber aprendido ese idioma en su niñez, el 13.2% aprendió el quechua, el 1.8% el aimara y el 0,9% aprendió otra lengua nativa. Principalmente, la población de habla aimara se ubica en los departamentos del sur del país, Puno (27,5%), Tacna (17,1%) y Moquegua (11,1%). El departamento de Puno concentra el mayor porcentaje de población que aprendió aimara en su niñez a nivel nacional, pero en la región Puno hay poca diferencia en los porcentajes de población que aprendió el castellano, quechua y aimara, excepto el ashaninka (ver cuadro N° 03).

**Cuadro N° 03****Porcentaje de la población de 5 años y de más edad, por lengua aprendida en la niñez**

<b>País/Dpto.</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Castellano</b>	<b>Quechua</b>	<b>Aimara</b>	<b>Ashaninka</b>	<b>Otra lengua nativa</b>	<b>Otros</b>
<b>Perú</b>	24687537	100.0	83,9	13,2	1,8	0,3	0,7	0,10
<b>Puno</b>	1146685	100.0	33,8	38,5	27,5	0,1	0,0	0,10

**Fuente:** INEI – Censos Nacionales 2007, XI de Población y VI de vivienda.

#### **4.2. Presencia del Estado y el ejercicio de la ciudadanía en la provincia de El Collao**

En esta parte visualizaremos brevemente el ejercicio de la ciudadanía en la provincia de El Collao, desde la concepción clásica de la ciudadanía, planteado por Thomas Herbert Marshall (1950 – 1960), quien imaginaba la ciudadanía como un conjunto de derechos sociales, civiles y políticos (Marshall citado por López, 1997:95). Para lo cual detallaremos los términos de concepción de los tres tipos de derechos de ciudadanía:

- a. Derechos civiles:** constituidos por las libertades y los derechos a la propiedad y a la justicia.
- b. Derechos políticos:** esencialmente los derechos a elegir y ser elegido, para así participar de los organismos representativos.
- c. Derechos sociales:** aquellos relacionados con el bienestar y la seguridad económica, que permiten a los ciudadanos ejercer sus otros derechos y son asegurados a través de un conjunto de servicios sociales (educación, salud, empleo, etc.) (Bendix, citado por López, 1997: 95).

#### **4.2.1. Ejercicio de ciudadanía civil**

Este tipo de ciudadanía se constituyó en el siglo XVIII en Europa bajo la figura de «igualdad ante la ley», e inicialmente los derechos ciudadanos aparecen con esta figura, además, fue este derecho el hito que marcó la universalización de la ciudadanía. Y en la medida en que los estados nacionales europeos se iban formando, se extendieron a los derechos políticos y sociales durante los siglos XIX y XX, mientras en el Perú los liberales del siglo XIX se inspiraron a imagen y semejanza de los países europeos para construir la ciudadanía. «Siguiendo esa pauta, fundaron la República y sus instituciones modernas –la división de poderes, el parlamento representativo, la ciudadanía– sin haber logrado organizar una autoridad pública nacional ni un proceso de modernización económica» (Basadre, citado por López, 1997:217)

En esta entrada se visualiza el ejercicio de la ciudadanía civil en términos de libertad y autonomía de los ciudadanos y ciudadanas desde la visión clásica de ciudadanía, y se toma en cuenta las actividades económicas de la población económicamente activa (PEA) y la categoría de ocupación.

**Cuadro N° 04****Actividades económicas de la PEA, según distritos de la provincia El Collao – 1993**

Actividades	Ilave	Pilcuyo	Capaso	Santa Rosa	Total provincial	%
Agricultura, ganadería y otros	5540	2333	308	1654	9835	51.3
Pesca	20	5	0	0	25	0.1
Explotación de minas y canteras	6	1	0	0	7	0.0
Industrias manufactureras	721	176	23	118	1038	5.4
Suministro de electricidad, gas y agua	4	0	0	0	4	0.0
Construcción	166	40	7	64	277	1.4
Comercio, reparación de vehículos, automotores, motocicletas y enseres	1498	311	28	200	2027	10.6
Hoteles y restaurantes	76	9	0	14	99	0.5
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	386	84	5	30	505	2.6
Actividades de intermediación financiera	6	0	0	0	6	0.0
Actividades inmobiliarias y de alquiler	67	5	0	7	79	0.4
Administración pública y defensa	294	9	2	31	336	1.7
Enseñanza	534	144	15	45	738	3.8
Servicios sociales y salud	61	7	1	3	72	0.4
Otras actividades de servicios comunitarios	62	22	0	11	95	0.5
Servicio doméstico	104	3	4	19	130	0.7
Organizaciones extra territoriales	0	0	0	0	0	0.0
Actividades no declaradas	2054	84	46	310	3334	17.4
Busca trabajo por primera vez	410	52	9	130	601	3.1
<b>Total</b>	<b>12009</b>	<b>3285</b>	<b>448</b>	<b>2636</b>	<b>19208</b>	<b>100.0</b>

Fuente: INEI - resultado del Censo-1993.

(\*) No figura el distrito de Conduriri, debido a que fue incorporado como distrito después del censo de 1993.

De acuerdo con el Censo del año 1993, en el cuadro N° 04 se puede apreciar que el 51.3% de la población económicamente activa de la provincia El Collao se dedica a las actividades de agricultura, ganadería y otros; de manera que constituye una de las principales fuentes de ingreso y según la distribución porcentual de los ingresos en hogares de sierra rural, en la medida en que los hogares son más pobres, la importancia del ingreso derivado de actividades agropecuarias es mayor, 50% en el quintil de menores

ingresos<sup>7</sup>; a su vez la población es mayoritariamente del medio rural y de acuerdo con los estudios del PNUD (2007), el ingreso promedio per cápita mensual en nuevos soles es mayor en el distrito de Ilave (S/. 201.2) en comparación con los otros distritos como Capaso (S/. 113,7), Pilcuyo (S/. 152.9), Santa Rosa (S/. 139.2) y Conduriri (S/. 138.8).

Si más del 50% de la PEA de la provincia se ocupa en las actividades agropecuarias esto indica que hay una concentración de la PEA en el sector rural y, a su vez, goza de ciertas libertades necesarias; también las actividades a que se dedica la PEA arrojan las fuentes de ingreso lo que en parte refleja la ciudadanía social. Es decir, hay cierto grado de independencia económica, pero insuficiente ingreso económico e inestabilidad del mismo, lo que la expone al clientelismo político que practican las autoridades políticas.

Según el Censo de año 2007, se puede observar (ver cuadro N° 05) que la población económicamente activa de la provincia de El Collao en alto porcentaje se dedica a la actividad de agricultura, ganadería y silvicultura que se asemeja al Censo de 1993, por lo que se puede decir que no hay cambios marcados entre los censos de 1993 y 2007 en cuanto a la actividad económica de la PEA provincial.

---

<sup>7</sup> Encuesta Nacional de Hogares (ENAHOG) 2006. Red de Desarrollo Rural para la Sierra.

**Cuadro N° 05****Actividades económicas de la PEA, según distritos de la provincia El Collao -2007**

Actividades	Ilave	Pilcuyo	Capaso	Santa Rosa	Conduriri	Total provincial	%
<b>Agricultura, ganadería y silvicultura</b>	14,046	3665	846	2,045	900	21,502	58.16
<b>Pesca</b>	48	112	0	2	4	166	0.45
<b>Explotación de minas y canteras</b>	12	0	0	2	4	18	0.05
<b>Industrias manufactureras</b>	574	84	9	17	16	700	1.89
<b>Suministro de electricidad, gas y agua</b>	19	0	1	1	0	21	0.06
<b>Construcción</b>	468	67	16	41	34	626	1.69
<b>Comerc.,rep. veh. autom., motoc. efect.pers.</b>	3,062	305	46	128	114	3655	9.89
<b>Venta, mant.y rep. veh. autom.y motoc.</b>	212	22	2	4	7	247	0.67
<b>Comercio al por mayor</b>	60	0	0	4	2	71	0.18
<b>Comercio al por menor</b>	2,790	278	44	120	105	3337	9.03
<b>Hoteles y restaurantes</b>	434	15	5	45	16	515	1.39
<b>Trans., almac.y comunicaciones</b>	750	61	13	22	32	878	2.37
<b>Intermediación financiera</b>	10	0	0	0	0	10	0.03
<b>Activid.Inmóvil.,empres.y alquileres</b>	159	12	18	3	5	197	0.53
<b>Admin.púb.y defensa; p. segur. soc afil.</b>	550	58	51	62	14	735	1.99
<b>Enseñanza</b>	871	154	18	27	22	1,092	2.95
<b>Servicios sociales y de salud</b>	166	25	5	5	6	207	0.56
<b>Otras activid.serv. común.soc y personales.</b>	127	6	1	2	8	185	0.39
<b>Hogares privados con servicio doméstico</b>	80	14	1	14	6	115	0.31
<b>Actividades económica no específica</b>	461	159	24	126	50	820	2.22
<b>Desocupado</b>	1,079	282	11	320	226	1918	5.19
<b>Total</b>	22,957	5,019	1,065	2,862	1,457	33,360	100.0

Fuente: INEI. Censo Nacional 2007.

**Cuadro N° 06****Población ocupada de 14 años y de más edad, por categoría de ocupación, según provincia y distrito**

<b>Categoría de ocupación</b>	<b>Provincia</b>	<b>%</b>	<b>Distrito Ilave</b>	<b>%</b>
<b>Total</b>	<b>31096</b>	<b>100.0</b>	<b>21608</b>	<b>100.0</b>
<b>Empleado</b>	2585	8.3	2023	9.36
<b>Obrero</b>	1247	4.0	972	4.50
<b>Trabajador independiente</b>	19938	64.1	13429	62.15
<b>Empleado o patrono</b>	140	0.5	119	0.55
<b>Trabajador familiar no remunerado</b>	7075	22.8	4989	23.09
<b>Trabajador del hogar</b>	111	0.4	76	0.35

**Fuente:** Elaboración propia en base a los datos de Censos nacionales XI de población y VI de vivienda 2007.

En la provincia de El Collao, el 64.1% de la población ocupada de catorce años a más edad son trabajadores independientes (ver cuadro N° 06), asimismo, se puede observar que es significativo el porcentaje de trabajadores familiares no remunerados (22.8%). Estas cifras indican que el mayor porcentaje de la población de la provincia no está vinculado al mercado laboral remunerado, razón por lo cual, la realidad de los ciudadanos y ciudadanas es diversa y compleja.

Específicamente, en el distrito de Ilave el 62.15% es trabajador independiente sin vínculos laborales dependientes, así también el 23.09% es trabajador familiar no remunerado; en estas dos categorías de ocupación está concentrada la PEA del distrito, la que también refleja similares porcentajes para la provincia en general.

#### **4.2.2. Ejercicio de ciudadanía social**

La ciudadanía social implica el derecho de gozar de cierto estándar mínimo de vida, de bienestar y de seguridad económica, y el Estado peruano en la Constitución reconoce que todos los ciudadanos y ciudadanas gozan de los mismos derechos fundamentales. En efecto, se desprende una serie de acciones destinadas a satisfacer las expectativas y necesidades de la gente, pero estas acciones son focalizadas y cuando se verifica el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales reconocidos por la ley se observa que la presencia del Estado en el territorio nacional es desigual. Por consiguiente, no todos los ciudadanos y ciudadanas tienen igualdad de oportunidades, incluso en muchas provincias del país hay déficit de provisión de servicios básicos.

En el caso de la provincia de El Collao, las instituciones que prestan servicios y asistencia social en alimentación, educación, salud y empleo se encuentran concentrados en la capital de la provincia de Ilave y también en Pilcuyo, distrito más cercano a Ilave y segundo distrito más poblado de la provincia (ver cuadro 07). Entonces, analizando la oferta del Estado y las demandas sociales, observamos que el Estado es más denso en el distrito capital de la provincia, pero esto disminuye en los distritos de Santa Rosa, Capaso y Conduriri, distritos menos poblados, dispersos y lejanos de la ciudad capital, de manera que, en la provincia de El Collao a escala distrital hay desigual presencia del Estado. No solamente se puede presenciar esta desigualdad a nivel de los distritos sino también tanto a nivel departamental como provincial, tal como se muestra en los resultados de Índice de Densidad del Estado (IDE) realizado por el PNUD. Por otro lado, a pesar de que el Perú ha tenido un sostenido crecimiento económico durante la última década aún permanecen casi intactas las desigualdades sociales. Es decir, el crecimiento económico no ha disminuido visiblemente la desigualdad social en las comunidades rurales aimaras.



**Cuadro N° 07**  
**Existencia de programas sociales en los distritos de la provincia El Collao**

PROGRAMAS SOCIALES	Ilave		Financiado por (1)	Pilcuyo		Financiado por (1)	Santa Rosa		Financiado por (1)	Capaso		Financiado por (1)	Conduriri		Financiado por (1)
	Existe	No		Existe	No		Existe	No		Existe	No		Existe	No	
<b>Asistencia Alimentaria</b>	Sí	No		Sí	No		Sí	No		Sí	No		Sí	No	
1. Vaso de Leche	X		a y g	X		g	X		g	X		g	X		g
2. Comedor Popular	X		A	X		a	X		a	X		a		X	
3. Desayuno Escolar		X		X		a	X		a	X		g	X		a
<b>Educación</b>															
4. Textos y útiles escolares	X		H	X		h		X			X			X	
5. Programa de alfabetización	X		C	X		c	X		c	X		c	X		c
<b>Salud</b>															
6. Control de Crecimiento del Niño sano / Control integral del niño (niños menores de 6 años de edad)	X		E	X		e	X		e	X		e	X		e
7. Planificación familiar (mujeres de 12 a 49 años de edad)	X		E	X		e	X		e	X		e	X		e
8. Programas de vacunas (inmunizaciones)	X		E	X		e	X		e	X		e		X	
9. Suplemento de hierro (gestantes y niños menores de 3 años de edad)	X		E	X		e	X		e		X			X	
10. Prevención de enfermedades (campañas de salud)	X		E	X		e	X		e	X		e	X		e
11. Promociones de prácticas saludables (dietas, deportes, higiene, etc.)		X			X			X			X			X	
<b>Empleo</b>															
12. Empleo (a trabajar urbano, rural, servicios de colocación, asesoría laboral, etc.)	X		D		X			X			X			X	
13. Capacitación Laboral (cursos, oficios, etc.)	X		I		X			X			X			X	
14. Micro y pequeña empresa (asistencia técnica, créditos, desarrollo empres.)		X			X			X			X			X	
<b>Total</b>	11	03		10	04		09	05		08	06		06	08	

**Fuente:** Elaboración propia, en base a la Línea base del Proyecto Sierra Sur, 2006.

Financiado por (1)	<b>ESTATALES</b>		
	a) PRONAA / MIMDES	b) INFES	c) Ministerio de Educación
	d) Ministerio de la Presidencia	e) Ministerio de Salud	f) Gobierno Regional
	g) Municipio / Gobierno Local		
	<b>PRIVADOS</b>		
	h) ONG	i) Empresa privada	j) La comunidad
	k) La Iglesia	l) Organismo internacional	

**Cuadro N° 08**  
**Comparación de los índices de desarrollo humano departamental, varios años**

Departamento	Índice de Desarrollo Humano - 2007		Índice de Desarrollo Humano - 2005		Índice de Desarrollo Humano - 2003		Índice de Desarrollo Humano - 2000		Índice de Desarrollo Humano - 1993	
	IDH	Ranking	IDH	Ranking	IDH	Ranking	IDH	Ranking	IDH	Ranking
Perú a/	0,6234	-	0,5976		0,5901		0,6199		0,5731	
Lima y Callao	0,6788	1	0,7039	1	0,7189	1	0,7440	1	0,6827	2
Moquegua	0,6532	2	0,6435	5	0,6499	5	0,6661	4	0,6208	5
Ica	0,6528	3	0,6481	3	0,6620	3	0,6667	3	0,6439	4
Tumbes	0,6494	4	0,6169	7	0,6095	7	0,6201	8	0,6102	6
Arequipa	0,6479	5	0,6463	4	0,6526	4	0,6352	5	0,6503	3
Tacna	0,6474	6	0,6685	2	0,6654	2	0,6805	2	0,7115	1
Madre de Dios	0,6304	7	0,5997	9	0,6010	8	0,6206	7	0,5956	7
La Libertad	0,6210	8	0,6046	8	0,5851	11	0,6133	9	0,5754	9
Lambayeque	0,6179	9	0,6271	6	0,6165	6	0,6251	6	0,5909	8
Ucayali	0,6022	10	0,5760	12	0,5629	12	0,5650	13	0,5251	15
Junín	0,6004	11	0,5922	10	0,5955	9	0,5779	10	0,5430	10
Ancash	0,5996	12	0,5776	11	0,5577	13	0,5774	11	0,5344	12
Piura	0,5979	13	0,5714	15	0,5557	14	0,5506	16	0,5329	13
San Martín	0,5902	14	0,5735	14	0,5247	17	0,5528	15	0,5356	11
Loreto	0,5893	15	0,5660	16	0,5248	16	0,5634	14	0,5278	14
Pasco	0,5892	16	0,5752	13	0,5908	10	0,5748	12	0,5233	16
Cusco	0,5796	17	0,5377	20	0,5112	18	0,5371	17	0,4780	17
Amazonas	0,5736	18	0,5535	17	0,5019	20	0,5147	18	0,4678	18
Huánuco	0,5663	19	0,5311	21	0,4760	23	0,4939	21	0,4471	21
Cajamarca	0,5633	20	0,5400	19	0,4910	21	0,4946	20	0,4505	19
Ayacucho	0,5617	21	0,5280	22	0,5095	19	0,4882	22	0,4220	22
Puno	0,5611	22	0,5468	18	0,5495	15	0,5115	19	0,4500	20
Apurímac	0,5610	23	0,5209	23	0,4877	22	0,4571	24	0,3962	23
Huancavelica	0,5393	24	0,4924	24	0,4641	24	0,4598	23	0,3671	24

**Fuente:** Informe Nacional sobre Desarrollo Humano, 2002, 2005 y 2006. PNUD – Perú.

En la región Puno la incidencia de pobreza total es de 78.3%<sup>8</sup>, esto es un indicador de la desigualdad de oportunidades que hay entre los ciudadanos y ciudadanas del país. Y de acuerdo con los informes de Índices de Desarrollo Humano departamental del PNUD durante los años 1993, 2000, 2003, 2005 y 2007, Puno se ha mantenido en los últimos lugares. Solo el año 2003 se ubicó en el ranking 15 con un IDH (Índice de Desarrollo Humano) de 0,5495 (ver cuadro N° 08), pero los demás años ha estado fluctuando en los rankings 20, 19, 18 y 22.

Asimismo, en el cuadro N° 08 se puede apreciar la ubicación de los departamentos que ocupan los primeros lugares en el ranking del IDH nacional. Los primeros lugares casi siempre pertenecen a los departamentos de Lima y Callao, después el orden de ubicación varía entre los departamentos que ocupan los primeros lugares: Moquegua, Ica, Tumbes, Arequipa y Tacna, la mayoría pertenecientes al área costera del país. Y realizando un análisis comparativo entre los departamentos, de acuerdo con el *ranking* de IDH nacional, se observa que hay enormes diferencias entre los 25 departamentos.

La provincia de El Collao presentaba un IDH de 0,4291 en 1993 y se ubicaba en el ranking 125; en el año 2000 tuvo un IDH de 0,490, cuyo ranking fue 133 y en el año 2007 el IDH fue de 0,5630 y su respectivo ranking de ubicación ha sido 117 (ver cuadros N° 09, 10, 11). Y haciendo una comparación entre los indicadores de diferentes años se constata que no hubo cambios significativos durante los últimos años; además, en el año 2007 las provincias con IDH alto e IDE alto y medio alto están asociadas con la franja costera de las 39 provincias con esos índices, 31 están en la costa; por otro lado, de las 33 provincias con IDH bajo e IDE bajo y medio bajo, 29 son andinas.

---

<sup>8</sup> Encuesta Nacional de Hogares Anual: 2004 -2006.

Históricamente la sierra peruana ha sido marginada por una marcada tradición centralista heredada desde la Colonia y ese patrón también es reflejado por la densidad del Estado en el escenario actual, pues en la sierra sur se encuentran 15 provincias con IDH bajo e IDE bajo y medio bajo que es coincidente con los altos índices de pobreza y exclusión; en consecuencia, tanto en la provincia de El Collao como en el departamento de Puno es deficiente la provisión de servicios básicos y no todos los ciudadanos tienen acceso igualitario a las ofertas del Estado, cuando estos elementos son fundamentales para el despliegue de las capacidades humanas.

Los derechos fundamentales han variado de una época a otra, de un pueblo a otro y en el caso peruano se vive en un contexto en que los derechos fundamentales están garantizados constitucionalmente. Sin embargo, cuando se analiza comparativamente a nivel de las provincias de la región se observa que Puno, como provincia capital del departamento ahora región, sí tiene alto Índice de Densidad del Estado (0,6956) (ver cuadro N° 11), seguido por la provincia de San Román, Juliaca (IDE 0,7573). Estos datos evidencian, no obstante, que la igualdad de derechos reconocidos por la constitución no concuerda con el efectivo ejercicio de los derechos dada la desigualdad intrarregional.

**Cuadro N° 09**  
**Índice de Densidad del Estado departamental y provincial 1993**

Ubigeo	Departamento Provincia	Población	Índice de Desarrollo Humano		Índice de densidad del Estado		Salud		Educación		Saneamiento 1/		Electrificación	
							Médicos por 10 mil habitantes		Tasa de asistencia neta a secundaria de 12 a 16 años		% Vivienda con acceso a agua y desagüe		% Vivienda con electricidad	
			IDH	ranking	IDE	ranking	Razón	ranking	%	ranking	%	ranking	%	ranking
210000	Puno	1 079 849	0,4500	20	0,2366	18	3,57	17	43,01	11	15,78	22	20,01	20
210500	El Collao	75 456	0,4291	125	0,1727	107	1,06	38	46,49	40	8,28	138	9,62	149

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. Por una densidad del Estado al servicio de la gente.

**Cuadro N° 10**  
**Índice de Desarrollo Humano 2000**

Años	Ubigeo	Departamento	Provincia	Población		Índice de Desarrollo Humano		Esperanza de vida al nacer		Alfabetismo		Matriculados secundaria		Logro educativo		Ingreso familiar per cápita	
				Habitantes	ranking	IDH	ranking	Años	ranking	%	ranking	%	ranking	%	ranking	N.S. mes	Ranking
2000	210500	Puno	EL Collao	84,910	65	0.490	133	62.4	169	75.4	142	85	46	78.6	46	161.4	155

Fuente: PNUD, Índice de Desarrollo Humano Perú 2000. Aprovechando las potencialidades

**Cuadro N° 11**  
**Perú: Índice de densidad del Estado provincial 2007**

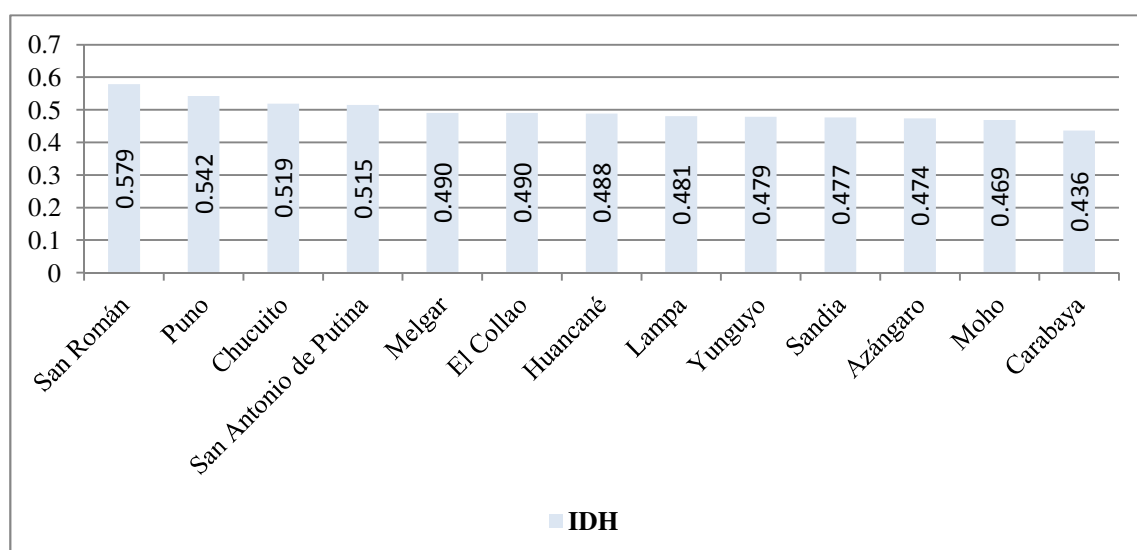
Ubigeo	Departamental  Provincial	Población	Índice de desarrollo humano		Índice de densidad del Estado		Identidad				Salud		Educación		Saneamiento		Electrificación	
							% población con acta de nacimiento o DNI		% población menor de 18 a más años con DNI	% población de 18 a más años con DNI	Médicos por cada 10 ml. Habitantes		Tasa de asistencia neta a secundaria de 12 a 16 años		% de viviendas con acceso a agua y desagüe		% viviendas con electricidad	
			IDH	Ranking	IDE	Ranking	%	Ranking			Razón	Ranking	%	Ranking	%	Ranking	%	Ranking
210000	Puno	1268441	0,5611	22	0,5824	17	97,94	6	98,24	97,76	8,4	20	80,74	6	32,32	22	57,49	18
210100	Puno	229236	0,5735	93	0,6956	30	98,07	25	98,37	97,92	17,4	16	83,89	14	44,59	76	69,48	61
210200	Azángaro	136829	0,5271	171	0,4757	143	97,85	37	98,40	97,45	1,7	192	76,72	49	21,15	145	40,88	150
210300	Carabaya	73946	0,5159	187	0,4804	141	97,33	69	98,15	96,66	3,8	156	68,94	96	22,30	142	43,65	139
210400	Chucuito	126259	0,5691	101	0,5076	120	97,78	40	98,56	97,28	3,1	175	82,56	20	18,89	154	48,80	126
210500	El Collao	81059	0,5630	117	0,5179	117	98,49	6	98,26	98,62	2,8	179	82,23	24	16,69	161	56,61	98
210600	Huancané	69522	0,5398	156	0,5048	124	97,68	45	98,42	97,25	4,5	139	79,39	36	18,39	155	46,78	127
210700	Lampa	48223	0,5571	125	0,4710	152	98,40	9	98,00	98,63	3,1	174	76,81	47	16,82	159	37,66	157
210800	Melgar	74735	0,5476	142	0,5415	99	98,19	16	98,45	98,00	4,8	127	76,52	52	40,91	90	43,82	137
210900	Moho	27819	0,5324	167	0,5336	104	97,21	77	98,20	96,59	1,8	191	76,60	51	32,25	121	59,12	91
211000	San Antonio de Putina	50490	0,5441	146	0,4502	165	97,91	34	97,67	98,04	2,8	180	74,81	65	6,94	187	40,71	151
211100	San Román	240776	0,6044	50	0,7573	16	98,12	21	97,84	98,29	16,2	19	88,27	1	62,30	36	82,09	23
211200	Sandia	62147	0,5497	141	0,4844	136	97,69	44	98,46	97,16	5,3	114	75,24	63	12,37	175	44,00	135
211300	Yunguyo	47400	0,5560	129	0,5955	63	97,47	58	98,43	96,92	5,1	119	81,99	26	31,81	122	74,38	44

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009, por una densidad del Estado al servicio de la gente

El Collao, a pesar de tener como distrito capital a Ilave y ser la tercera ciudad más importante del departamento, tiene bajo IDH (0.490), en comparación con la provincia de San Román-Juliaca (IDH: 0.579), Puno (IDH: 0.542), Chucuito (0.519) y San Antonio de Putina (0.515)(ver Gráfico 01); y ocupó el lugar 133 en el ranking de IDH de las 192 provincias del país. Estas cifras muestran que el dinamismo económico no necesariamente determina el desarrollo humano, además la calidad de vida no se define en términos de lo que *tiene*, sino en términos de lo que el ciudadano *es* y *hace*. Es decir, en términos de capacidad y libertades, ya que «el desarrollo humano consiste en la ampliación de las capacidades entendidas como las libertades de las personas para elegir lo que efectivamente pueden disfrutar»<sup>9</sup>. Asimismo, Amartya Sen propone que las libertades sean definidas como libertades positivas *que una persona tiene en un sentido general (libertad para hacer esto o ser aquello)*. En otros términos se trata de *lo que uno es libre de hacer teniendo en cuenta, tanto las interferencias o la ayuda por parte de los demás como los propios poderes y limitaciones* (citado en el informe de PNUD. 2000: 22)

**Gráfico 01**

**Índice de Desarrollo Humano provincial 2000**



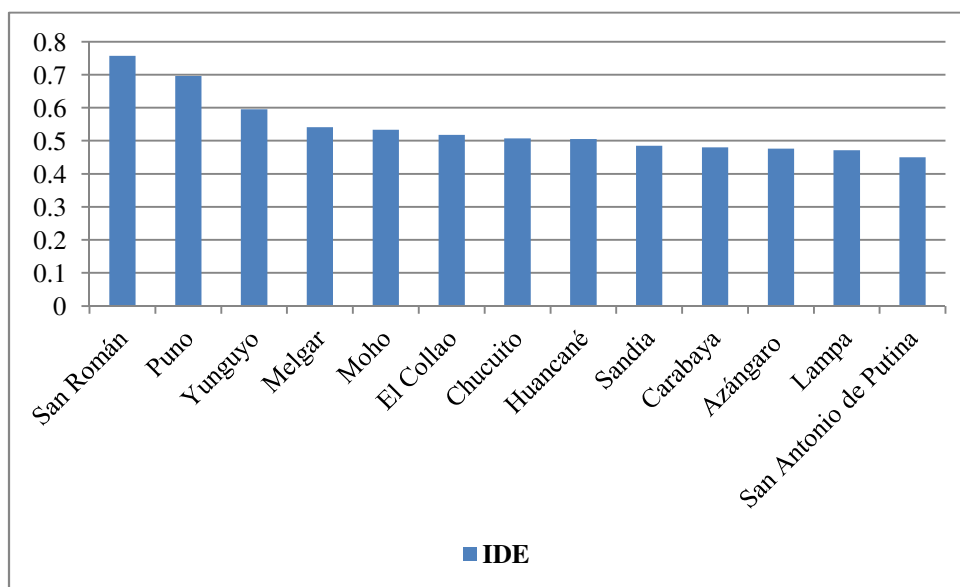
**Fuente:** Índice de Desarrollo Humano Perú 2000. Aprovechando las potencialidades. PNUD - Perú.

<sup>9</sup>Informe PNUD: IDH 2000:21.

Cabe mencionar que Estados Unidos, considerado como uno de los países más desarrollados del mundo, ocupa el décimo tercer lugar en los indicadores de IDH; en cambio, los países escandinavos obtienen los mejores resultados (Stiglitz, 2010:331), de ahí que son cuestionados los indicadores que definen lo desarrollado y lo no desarrollado, más aun cuando los bienes no materiales no se cuantifican. Pero se está usando ya otros indicadores relacionados con la felicidad de los ciudadanos que son diferentes al PIB.

Respecto al IDE provincial en el departamento de Puno, al igual que en IDH, encabezan las provincias de San Román y Puno. La provincia de El Collao se ubica en sexto lugar con IDE 0,5179 de las 13 provincias del departamento(ver gráfico 02).

**Gráfico 02**  
**Índice de Densidad del Estado provincial 2007**



**Fuente:** Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009, por una densidad del Estado al servicio de la gente

En el 2007 ninguno de los cinco distritos de la provincia de El Collao se ubicó en los distritos ordenados por IDH – en los treinta mejores distritos del país, ni entre los últimos treinta de los 1883 distritos del Perú, sin embargo los cuarenta y nueve distritos



de Lima Metropolitana se encuentran ubicados dentro de los primeros lugares, por ejemplo, para los años 2003 y 2005, el distrito de mayor IDH fue San Isidro que forma parte de Lima Metropolitana.

**Cuadro N° 12**

**Índice de Desarrollo Humano distrital 2003 y 2005**

Años	Distritos	Índice de Desarrollo Humano	Esperanza de vida al nacer	Alfabetismo	Matriculados secundaria	Logro educativo	Ingreso familiar per cápita
		IDH	Años	%	%	%	N.S. mes
2003	Ilave	0,5535	65	82	95	90	217
2003	Pilcuyo	0,4881	63	71	76	74	212
2003	Santa Rosa	0,5280	62	67	99	88	212
2003	Capaso	0,5474	64	87	93	91	214
2003	Conduriri	0,5192	62	77	90	86	197
2005	Ilave	0,5330	64	86	84	86	234
2005	Pilcuyo	0,5082	62	78	87	81	230
2005	Santa Rosa	0,5147	62	87	77	84	228
2005	Capaso	0,5465	64	92	86	90	231
2005	Conduriri	0,5089	62	82	82	82	213

**Fuente:** Informe de Desarrollo Humano 2005, informe de Desarrollo Humano Perú 2006.

Haciendo una comparación entre los distritos de la provincia de El Collao, podemos apreciar que el distrito de Ilave posee el más alto IDH los años 2003, 2005 y 2007 (ver cuadros N°12 y 13), seguido por el distrito de Capaso los años 2003 y 2005; pero en el año 2007 el distrito de Santa Rosa ascendió al segundo lugar con IDH 0,5591. Los distritos que poseen los menores Índices Desarrollo Humano son Pilcuyo y Conduriri y se han mantenido en los últimos lugares los años 2003, 2005 y 2007.

**Cuadro N° 13**  
**Índice de Desarrollo Humano departamental, provincial y distrital 2007**

Ubigeo	Departamento Provincia Distrito	Población		Índice de Desarrollo Humano		Esperanza de Vida al nacer		Alfabetismo		Escolaridad		Logro educativo		Ingreso Familiar per cápita	
		Habitantes	ranking	IDH	Ranking	Años	ranking	%	ranking	%	Ranking	%	ranking	N.S. mes	Ranking
2100000	Puno	1268	5	0,5611	22	68,55	24	87,76	17	86,48	10	87,33	16	208,8	20
210500	El Collao	81059	68	0,5630	117	71,10	115	85,44	122	83,88	118	84,92	113	182,4	130
210501	Ilave	54138	103	0,5693	911	71,10	1082	86,16	1048	85,40	971	85,91	933	201,2	840
210502	Capaso	1830	1384	0,5587	1,107	71,16	1063	95,74	274	69,08	1764	86,86	854	113,7	1746
210503	Pilcuyo	14151	384	0,5436	1,365	70,98	1124	79,07	1436	84,05	1115	80,73	1405	152,9	1307
210504	Santa Rosa	6663	677	0,5591	1,090	71,34	988	90,17	747	76,04	1604	85,46	987	139,2	1485
210505	Conduriri	4277	926	0,5523	1,230	71,04	1099	86,15	1049	79,53	1432	83,94	1140	138,8	1490

**Fuente:** Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009. Por una densidad del Estado al servicio de la gente.

### 4.2.3. Ejercicio de la ciudadanía política

Este tipo de ciudadanía fue promovida principalmente por los actores políticos en los años cincuenta y «las demandas para extender la ciudadanía política a las clases populares provinieron de las clases medias, tanto en el siglo XIX como en el XX» (López, 230). Producto del proceso de democratización del país, recién en el año 1980 con el voto universal, los ciudadanos y ciudadanas aimaras ejercieron su ciudadanía política en los comicios electorales en el distrito de Ilave (ver cuadro N° 14); esto es una muestra de la exclusión de la vida política de la población indígena más de un siglo, la que Flores Galindo (1988) llamó una república sin ciudadanos. «La nación misma era una creación de la élite que ha oscurecido, desde el principio, la presencia y realidad de los sujetos sociales subalternos en la historia latinoamericana» (Mallon, 2009:179).

**Cuadro N° 14**  
**Elecciones municipales 1980, distrito Ilave**

Agrupación política	N° de votos	% de votos
<b>Acción Popular</b>	793	17.38
<b>Izquierda Unida</b>	1448	31.74
<b>Partido Revolucionario de los Trabajadores</b>	402	8.81
<b>Lista Independiente Unión Integral de Barrios y Comunidades de Ilave.</b>	38	0.83
<b>Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos</b>	1881	41.23
<b>Votos válidos</b>	4562	77.92
<b>Votos nulos</b>	410	7.00
<b>Votos blancos</b>	882	15.07
<b>Votos emitidos</b>	5854	100.00

Fuente: JNE – 1980.

A nivel nacional, las elecciones presidenciales, congresales y municipales se llevan acabo desde el año 1962 hasta las elecciones del año 2011. Específicamente cuando Ilave

perteneció a la provincia de Chucuito se realizaron cuatro procesos electorales municipales en los años: 1980, 1983, 1986 y 1989. En 1980 emitieron su voto 5854 ciudadanos, de los cuales el 78% ha sido votos válidos; así sucesivamente en las elecciones posteriores fueron incrementándose el número de electores a causa del crecimiento de la población, el alfabetismo y las migraciones internas (ver cuadros N° 15, 16 y 17).

### **Cuadro N° 15**

#### **Elecciones municipales 1983, distrito Ilave**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Acción Popular</b>	723	14.55
<b>Izquierda Unida</b>	3194	64.28
<b>Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos</b>	253	5.09
<b>Partido Popular Cristiano</b>	44	0.89
<b>Partido Aprista Peruano</b>	755	15.19
<b>Votos válidos</b>	4969	77.71
<b>Votos nulos</b>	1093	17.09
<b>Votos blancos</b>	332	5.20
<b>Votos emitidos</b>	6394	15.19

Fuente: JNE – 1983.

### **Cuadro N° 16**

#### **Elecciones municipales 1986, distrito Ilave**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Partido Aprista Peruano</b>	6867	63.13
<b>Izquierda Unida</b>	3187	29.30
<b>Lista Independiente N° 03</b>	159	1.46
<b>Lista Independiente N° 07</b>	665	6.11
<b>Votos válidos</b>	10878	100.00
<b>Votos nulos</b>	-	-
<b>Votos blancos</b>	-	-
<b>Votos emitidos</b>	-	-

Fuente: JNE – 1986.

**Cuadro N° 17**  
**Elecciones municipales 1989, distrito Ilave**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Partido Aprista Peruano</b>	768	10.23
<b>Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos</b>	3878	51.67
<b>Acción Popular</b>	409	5.45
<b>Izquierda Unida</b>	2277	30.34
<b>Lista Independiente N° 09</b>	173	2.31
<b>Votos válidos</b>	7505	100.00
<b>Votos nulos</b>	-	-
<b>Votos blancos</b>	-	-
<b>Votos emitidos</b>	-	-

**Fuente:** JNE - 1989

Después de elevarse a categoría de provincia el 12 de diciembre de 1991 con el nombre El Collao, la primera elección provincial se llevó a cabo en 1993, donde participaron 12 agrupaciones políticas y votaron 22,485 ciudadanos; en ese comicio electoral salió elegido como alcalde provincial Gregorio Ticona Gómez con 37.71% de votos por Izquierda Unida (ver cuadro N°18); además, en la elección municipal de 1993 se incrementaron tanto las agrupaciones políticas participantes que generó la dispersión de los votos. Durante el gobierno local de Gregorio Ticona Gómez, Alberto Fujimori gobernaba el país y al iniciar su gobierno realizó medidas de ajuste estructural para insertarse a la economía internacional y así colocó por encima de cualquier otro fin estatal dicha acción gubernamental afectando los derechos ciudadanos.

**Cuadro N° 18**  
**Elecciones municipales 1993, provincia de El Collao**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Partido Aprista Peruano</b>	836	6.08
<b>Izquierda Unida</b>	5189	37.71
<b>Acción Popular</b>	216	1.57
<b>Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos</b>	1095	7.96
<b>Frente Agrícola FREPAP</b>	352	2.60
<b>Movimiento Independiente Agrario MIA</b>	2308	16.77
<b>Lista Independiente N° 03</b>	250	1.81
<b>Lista Independiente N° 07</b>	350	2.54
<b>Lista Independiente N° 13</b>	206	1.50
<b>Lista Independiente N° 15</b>	74	0.54
<b>Lista Independiente N° 17</b>	1428	10.38
<b>Lista Independiente N° 21</b>	1456	10.58
<b>Votos válidos</b>	13760	61.20
<b>Votos nulos</b>	7794	34.66
<b>Votos blancos</b>	931	4.14
<b>Votos emitidos</b>	22485	100.00

Fuente: JNE – 1993.

En las elecciones municipales de 1995 participaron 36,420 electores y fue reelegido Gregorio Ticona Gómez por segunda vez por una lista independiente (ver cuadro N° 19). En esa elección no ha participado ningún partido político como en anteriores elecciones, sino las únicas agrupaciones participantes fueron listas independientes; esto ha sido una clara muestra de la crisis de los partidos políticos. Además, se evidencia que el voto de los electores no solamente es por el programa político de las organizaciones participantes sino, sobre todo, por personalidades.

**Cuadro N° 19**  
**Elecciones municipales 1995, provincia de El Collao**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Lista Independiente N° 03</b>	2847	15.47
<b>Lista Independiente N° 05</b>	4380	23.8
<b>Lista Independiente N° 07</b>	6892	37.46
<b>Lista Independiente N° 09</b>	4281	23.27
<b>Votos válidos</b>	18400	68.69
<b>Votos nulos</b>	5302	19.79
<b>Votos blancos</b>	3085	11.52
<b>Votos emitidos</b>	26787	73.55
<b>Abstención</b>	9633	26.45
<b>Electores en el padrón</b>	36420	100.00

**Fuente:** JNE, ONPE – 1995.

En las elecciones municipales de 1998 se presentaron seis listas (ver cuadro N°20), en la cual resultó ganador José Antonio Maquera por el Frente Independiente Juntos por Obras (FIJO) con 21.75% de votos y en segundo lugar Fernando Robles Callomamani por Fraternidad Nacional El Collao hacia la Modernidad (FNCHM) con 21.73% de votos; en dicha elección se emitieron 31,855 votos, y fue significativo el porcentaje de ausentismo de electores (23.53%) de acuerdo con el padrón respectivo. Como se puede apreciar hay poca diferencia en el porcentaje de votos obtenidos por los dos candidatos, incluso en un primer momento Fernando Robles había sido declarado ganador por el Jurado Electoral Especial (JEE) y todo esta situación hizo que Robles se convirtiera en opositor frontal a la gestión de Antonio Maquera.

**Cuadro N° 20**  
**Elecciones municipales 1998, provincia de El Collao**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Fraternidad Nacional El Collao hacia la Modernidad – FNCHM</b>	5970	21.73
<b>Frente Independiente Juntos por Obras – FIJO</b>	5975	21.75
<b>Movimiento Independiente Vamos Vecino</b>	5921	21.56
<b>Movimiento Independiente Somos Perú</b>	4892	17.81
<b>Unión por el Perú</b>	3636	13.24
<b>Acción Popular</b>	1075	3.91
<b>Votos válidos</b>	27469	86.19
<b>Votos nulos</b>	3116	10.16
<b>Votos blancos</b>	1270	5.01
<b>Impugnados</b>		0.09
<b>Votos emitidos</b>	31855	76.46
<b>Ausentismo</b>	6658	23.54
<b>Electores hábiles</b>	38513	100.00

**Fuente:** JNE, ONPE – 1998.

En las elecciones municipales del 2002 (ver cuadro N° 21), emitieron sus votos 40,950 ciudadanos, y resultó elegido Fernando Robles Callomamani por el Movimiento Político Unión Regional para el Desarrollo con 21.65% de votos, con marcado ausentismo electoral (10.23%), y había 45,619 electores hábiles. La gestión de Alcalde y el cuerpo de regidores elegidos democráticamente para el periodo 2003-2006 quedó trunca a causa de la muerte del Alcalde en el fatal suceso de abril del 2004.



**Cuadro N° 21**  
**Elecciones municipales 2002, provincia de El Collao**

<b>Agrupación política</b>	<b>N° de votos</b>	<b>% de votos</b>
<b>Movimiento Independiente Democrático de los Aymaras - MIDA</b>	3046	8.43
<b>Poder Democrático Regional – PDR</b>	3219	8.91
<b>Movimiento Independiente Regional Frente Unido Progresista</b>	4519	12.51
<b>Movimiento Político Unión Regional para el Desarrollo</b>	<b>7822</b>	<b>21.65</b>
<b>Movimiento por la Autonomía Reg. Quechua y Aymara MARQA</b>	3733	10.33
<b>Aprista Peruano</b>	1117	3.09
<b>Movimiento Amplio País Unido - MAPU</b>	3834	10.61
<b>Renacimiento Andino</b>	1310	3.63
<b>Perú Posible</b>	1325	3.67
<b>Acción Popular</b>	1394	3.86
<b>Partido Democrático Somos Perú</b>	4811	13.32
<b>Votos válidos</b>	36130	88.23
<b>Votos nulos</b>	3644	8.9
<b>Votos blancos</b>	1176	2.87
<b>Votos emitidos</b>	40950	89.77
<b>Ausentismo</b>	4669	10.23
<b>Electores en el padrón</b>	45619	100.00

Fuente: JNE, ONPE – 2002.

En el 2004, ante la vacancia del Alcalde y los regidores se convocó a Elecciones Complementarias, conforme a lo establecido en la ley N° 26864, Ley de Elecciones Municipales. El 17 de octubre, fecha de la Elección Complementaria, emitieron sus votos 41,009 ciudadanos (ver cuadro N° 22), de un total de 49,085 electores hábiles, y continuó resaltando el ausentismo electoral. De acuerdo con los resultados el ganador fue Miguel Ángel Flores de la agrupación política Fuerza Democrática con un total de 8,552 votos, lo que equivale al 23.86% del total de electores.

## Cuadro N° 22

### Elecciones municipales complementarias 2004, provincia de El Collao

Agrupación política	N° de votos	% de votos
Movimiento Independiente Democrático de los Aymaras - MIDA	492	1.37
Alianza Electoral Unidad Nacional	797	2.22
Partido Democrático Somos Perú	7380	20.59
Acción Popular	3095	8.64
Movimiento Nueva Izquierda	3833	10.7
Avanza País – Partido de Integración Nacional	1485	4.14
Fuerza Democrática	<b>8552</b>	<b>23.86</b>
Aprista Peruano	1109	3.09
Frente Popular Agrícola FIA del Perú - FREPAP	3785	10.59
Movimiento por la Autonomía Reg. Quechua y Aymara MARQA	1223	3.41
Movimiento Independiente Regional Frente Unido Progresista	4087	11.4
<b>Votos válidos</b>	<b>35838</b>	<b>87.39</b>
<b>Votos nulos</b>	<b>4593</b>	<b>11.2</b>
<b>Votos blancos</b>	<b>578</b>	<b>1.41</b>
<b>Votos emitidos</b>	<b>41009</b>	<b>83.5</b>
<b>Ausentismo</b>	<b>8076</b>	<b>16.5</b>
<b>Electores en el padrón</b>	<b>49085</b>	<b>100.00</b>

Fuente: JNE, ONPE – 2004.

### 4.3. Breve antecedente histórico de la ciudadanía regional

En esta sección se trata de manera breve la historiografía de Puno, poniendo énfasis en el entorno en que se ha desarrollado la ciudadanía en el proceso histórico regional. Sin embargo, ponemos en claro que nuestra noción de historia no es lineal, progresiva ni unitaria, en el sentido de que creemos que las historias son múltiples. «La ontología no es otra cosa que interpretación de nuestra condición o situación, ya que el ser no está en modo alguno fuera de su “evento” el cual sucede en el “historicizarse” suyo y nuestro» (Vattimo, 2000:11), aunque las historias oficiales han invisibilizado las historias de los subordinados.

Los pueblos originarios, debido a la herencia colonial, no han tenido igual acceso a los derechos, poder, recursos y oportunidades en los sistemas (colonial o capitalista) imperantes en determinados momentos históricos. «La singularidad de Puno consiste en su aislamiento. Puno ha estado sometido siempre a una especie de “colonialismo interno”. Desde el siglo XVI hasta el XVIII estuvo ligado al circuito comercial minero cuyo eje era Potosí; en los siglos XIX y XX, al circuito comercial lanero que tuvo como centro Arequipa» (Zevallos, 2002:43). Incluso «en su mayoría, el gobierno europeo se movía por intereses económicos y de la ideología de libertad y de la igualdad se preocupaba poco, especialmente bajo los monarcas protestantes, por la europeización, la cristianización o, excepto retóricamente, por la civilización» (Klor de Alva, 128).

El desencuentro entre el Estado y la sociedad local suscitado en el conflicto de Ilave expresa la ausencia del Estado en los ámbitos locales, como el soslayamiento del aspecto cultural de los pueblos indígenas. Esto se viene arrastrando desde que nació el Estado-nación peruano en la segunda década del siglo XIX y se inició así la República sin reconocer la diversidad cultural del país. Y la población indígena fue construyendo difícilmente su ciudadanía desde la socialización de sus patrones culturales en los ámbitos locales. Pero, desde el Estado, siempre se vio como un problema la existencia de la diversidad cultural, por consiguiente se intentó homogeneizar a través de varias estrategias en pos de una sociedad nacional integrada. Sin embargo, no se logró dicha unidad, mientras el prejuicio, la exclusión, el racismo y la discriminación se impusieron por la falta de reconocimiento de la diferencia, la que fue convirtiéndose a través de la historia en una barrera para la unidad nacional en la diversidad.

El Perú del siglo XIX heredó el orden colonial, ya que el poder del Estado estaba centralizado en Lima a cargo de la oligarquía criolla y los poderes regionales y locales estaban monopolizados por los gamonales bajo una relación patrimonialista y clientelista

con las élites centrales y con las población indígena bajo una relación de servidumbre y discriminación racial, étnica y social. Por ejemplo, en el siguiente relato se puede apreciar la relación establecida en los ámbitos locales:

*No puedo dejar de lado aquello que desde niño pude constatar personalmente en lo que se refiere al indio pastor y al “ayllu runa”. En principio, todo propietario misti contaba con pastores, cuyo número guardaba relación con la importancia de la finca en cuanto a capital y extensión. El pequeño o mediano propietario no podía darse el lujo de contar con numerosos servidores. En cambio, el gran hacendado era poseedor de muchos indios, los mismos que desempeñaban distintas tareas: el pongo era un sirviente doméstico que ejercía su cargo por turnos; el mulero cuidaba de los caballos; la mitani que casi siempre era mujer joven, estuvo destinada a la cocina, lavado de ropa y cuidado de los hijos del patrón; los quipus tenían tareas distintas, desde el cuidado de la integridad territorial del fundo hasta velar por el cumplimiento de las obligaciones de los pastores comunes; el rodeante también ejercía tareas parecidas al quipu y de manera particular evitar las incursiones del ganado ajeno que causara daños en los pastizales y sementeras. De vez en cuando se valían los hacendados también de un «propio» o postillón para que condujera la correspondencia. Los que no cumplían estas tareas estaban dedicados al pastoreo en sí, preferentemente por las mujeres, incluyendo niños; en el cultivo, en la matanza y elaboración de la chalonga, en los viajes llevando productos nativos y traer de los valles otros que no se daban en el medio, etc., etc. (Ramos, 1990:63).*

Después de haberse proclamado la independencia del Perú en 1821 y declarado como ciudadana a toda la población aboliendo formalmente las diferencias entre criollos, indios y mestizos, sin embargo, esto no se llevó a la práctica así, ni la proclama de toda la población como ciudadana fue fiel reflejo de la situación real de la sociedad peruana. La élite criolla quiso construir el país bajo una sola identidad cultural común, a

pesar de la población indígena que formaba la mayoría de la población total; estadísticamente hablando «la mayoría de los peruanos vivían en la sierra: el 73.1% en 1876, el 61.9% en 1940 y el 52.2% en 1961» (López, 1997:134).

La cuestión indígena recién ha recobrado mayor fuerza después de la derrota en la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX ante las explicaciones de la derrota con Chile. «Según los grupos dominantes, la guerra se había perdido porque al no tener conciencia nacional, los indígenas peruanos -que constituían el grueso del ejército peruano- no lucharon como debían» (Zevallos, 58), de manera que se desarrolló un intenso debate entre los intelectuales y las élites sobre la búsqueda de solución a la problemática. Y debido a tal situación se emprendió una serie de estrategias de construcción ciudadana promovidas por la Iglesia y por el Estado. En Puno los «nuevos predicadores reclaman la lectura de la Biblia y, por lo tanto, establecen escuelas. De otro lado, la escolaridad se difunde por impulso del Estado y por el reclamo de los mismos campesinos. Todos –y entre ellos los intelectuales progresistas–, están convencidos de que el problema del indio, un término al uso entonces, es el problema de su supuesta ignorancia. Algunos la atribuyen a los mismos indios; otros se la enrostrarán a los gamonales» (Ramos, 9).

El proceso de establecimiento de la política educativa de homogenización cultural, consistente en la castellanización y el acceso a una educación asimilacionista promovida por el civilismo, constituía «una estrategia de integración y de inclusión de la población indígena» (López, 1997:219). En Puno los gamonales se oponían a la educación de los hijos de las indígenas en condiciones de servidumbre por temor a perder el control y continuidad del sistema de dominación gamonal en el mencionado contexto. «Condorena obtiene de Leguía algún tipo de autorización para construir escuelas autónomas sin injerencia de los mistis» (Rénique, 2009:477). De acuerdo con los resultados del censo de 1902, solo el 29% de los niños de 6 a 14 años recibían instrucción en todo el país y solo el 23% de la población sabía leer y escribir. El porcentaje de niños que no asistían a la escuela y el analfabetismo de los adultos se

incrementaba en departamentos de Apurímac, Huánuco, Puno, Ayacucho y Cusco, donde menos del 12% sabía leer y escribir. En 1947 existían 320 escuelas en los departamentos de Cusco y Puno, y en la década del cincuenta superaron la cifra de mil quinientos, distribuidos en once departamentos (López, 1997: 220 - 222).

La población indígena de la región Puno ha sufrido las secuelas de la conquista española ya que «antes de la llegada de los europeos, no existían “indios”, solo grupos de gente que vivían a lo largo del territorio americano y que se diferenciaban entre sí por sus lenguas y costumbres» (Espinosa, 2003: 79), pero desde la llegada de los españoles se ha subalternizado a los pueblos indígenas y se les ha clasificado como poblaciones incivilizadas sobre la base de la «raza» negándoles rotundamente la capacidad de generación de cultura y formas de convivencia humana civilizada. Entonces, así se inicia en el territorio la historia de la cultura dominante y otras subordinadas. De ahí que los gamonales, en esa relación racial de superioridad/inferioridad, cometieron una serie de abusos en contra de los pueblos indígenas; aunque estos se defendían movilizándose en contra de los abusos terminaban siendo acallados mediante masacres, asesinatos, despojos y diversos mecanismos de cruel represión, dado que el gamonal monopolizaba el poder local copando cargos en diferentes instituciones locales del Estado; además mantenía una relación clientelar con las altas esferas del poder central, constituyendo el cerco gamonal- regional.

En el altiplano puneño, ante los constantes abusos, se generaban rebeliones y se producían convulsiones sociales en todo el sur andino. «En la sierra, estallaron levantamientos de las comunidades campesinas contra el gamonalismo; en Huanta, Chucuito y Zepita donde fueron reprimidos brutalmente» (Asociación ADUNI, 2001: 435), así como también en los departamentos vecinos: Cusco, Arequipa, Moquegua y, todavía más lejos, hasta Huancavelica, Ayacucho, Ica e incluso más allá de las fronteras

nacionales, hasta el altiplano boliviano: más de cincuenta alzamientos que se sucedían entre 1920 y 1924. En Puno acontecieron en Pinaya, Huapará, Huancané, Calapuja y tuvo el epicentro ubicado en las provincias de Azángaro, Lampa y Huancané (Flores Galindo, 2002:7). Los quechuas y aimaras, al no ser atendidos en sus demandas a nivel de las autoridades locales, apelaban a los gobiernos nacionales sobrepasando el cerco gamonal local; para Rénique, las políticas indígenas han seguido dos orientaciones distintas y, por lo general, inconexas:

*a) «los teóricos e intelectuales» dedicados a reivindicar el valor e importancia del indígena, denunciando injusticias, analizando las peculiaridades de su existencia: y b) «los militantes», las propias víctimas movilizándose para «librarse de su opresión». La acción de estos últimos, a su vez, había asumido dos formas: (a) «los mensajeros» que «desde los lugares más apartados vienen, en doliente y estéril peregrinación, a la capital, a encontrar, si no la indiferencia, la incapacidad de la administración pública para poner término a sus males»; y b) las «sublevaciones», cuando «la magnitud de la desesperación no encuentra otra forma de expresarse que la agitación o el desenfreno multitudinario». Los «teóricos» escribieron la historia; «los militantes» hicieron mutis por el foro (Rénique, 2009:489).*

Cabe resaltar uno de los hechos históricos emblemáticos suscitados en el contexto del gamonalismo puneño durante el aparente indigenismo del presidente Leguía. Ante el compromiso de «patria nueva» y avalados por tan formidable respaldo, los «mensajeros» indígenas sintieron que finalmente habían sobrepasado el «cerco gamonal». En Huancané –uno de los más activos núcleos campesinos del departamento de Puno–, los líderes comunales interpretaron a su manera el «indigenismo oficial» (Rénique, 475), es decir, liderados por Carlos Condorena los indígenas intentaron forjar un nuevo sistema de gobierno denominado «República para los indios», una república dentro de otra república integrada por autoridades campesinas, proceso que terminó en una situación de

fatal confrontación con el poder local. Esta visión construida en contacto y apoyo del presidente Leguía, y desembocó finalmente en una represión infernal, lo que produjo una ruptura de la relación entre los líderes andinos y el gobierno autoritario-autocrático de Leguía. «Un capítulo más del viejo desencuentro entre el Perú andino y el Perú criollo había llegado a su punto final» (Rénique, 479). Aunque Leguía inicialmente apareció como un implacable reformador, con la nueva Constitución creó congresos regionales, estableció que la protección de la población indígena era el deber cardinal del Estado y extendió reconocimiento legal a las comunidades indígenas, declarando asimismo sus bienes como imprescriptibles. «Más leyes indígenas que en un siglo de república serían aprobados entre 1919 y 1924» (Rénique, 473-474).

En Puno los movimientos indígenas tenían apoyo ideológico del Grupo Orkopata, quien, después de intensas movilizaciones y rebeliones, daban explicaciones desde 1926 a 1930 mediante el *Boletín Titikaka* dirigido por Gamaliel Churata (Arturo Peralta) y Alberto Peralta; también tenían el apoyo de los intelectuales indigenistas de Lima. En el *Boletín* se enfatizaba que en el Perú «no existía una comunidad de ciudadanos dotada de todos los derechos y deberes definidos por un cuerpo común de leyes» (Zevallos, 53).

Los indígenas cansados de tantos abusos exigían justicia traspasando el cerco gamonal, pero ante la enorme debilidad del Estado y la falta de construcción de una comunidad política de ciudadanos, las demandas no eran procesadas adecuada y oportunamente, ni transformadas en derechos; por ejemplo Rénique indica la «Comisión Especial de Investigación de las cuestiones indígenas en el Sur de la República», presidida por José Antonio Encinas, recibió un alud de quejas y reclamaciones; en las más próximas provincias de Puno y Chucuito recabaron 521 y 562, respectivamente; 234 en Lampa. Peor aún en la zona norte: 777 en Ayaviri y 4552 en Azángaro, Sandia, 275 y Carabaya, 13. De un total de 7080 reclamaciones, 6125 (86%) eran relativas a problemas por tierras, seguidas por 553 (7%) por «abusos de gamonales» (2004:473).



Las experiencias vividas en condiciones de servidumbre de la población puneña son de larga data. El periodo histórico en que el gamonalismo ha predominado abarca cerca de setenta años; desde la década de 1860 hasta la década de 1940 (Dammert y Panfichi, 2007: 104), y aún en las décadas del cincuenta y sesenta «las haciendas seguían ahí, desmesuradas e imponentes, mientras el minifundio no alcanzaba ya a calzar los numerosos crecientes de la población rural. Amarga, como siempre, reiterada con cada sequía y cada “friaje”, la pobreza seguía asimismo en pie» (Rénique, 2004:177). Según Del Castillo, «antes de la reforma, el 0,9% de las familias puneñas terratenientes concentraba el 77,5% de las tierras agropecuarias, mientras que el 83,8% de las familias –campesinos– concentraba el 3,3% de las tierras agropecuarias, de acuerdo a la información del Censo de 1961» (Panfichi y Dammert, 2007: 105-106).

A fines de los años cincuenta e inicios de los sesenta, se presentó una sucesión de desastres naturales en la región y las familias, a través del pequeño comercio y la migración interna, como la espontánea colonización de la selva del Tambopata, mitigaron la situación crítica. «Los asentamientos humanos que rodean a Arequipa se llenan de puneños. Entre mediados de la década del cincuenta y mediados de la del sesenta su porcentaje en esas áreas experimentan un incremento notable: del 13% al 40%. La población de la ciudad de Puno, entretanto, pasa de 16 mil a 25 mil entre 1940 y 1961. Tendría en Juliaca un aumento explosivo: de siete mil a 20,500 habitantes» (Rénique, 2004:148). La migración es vista por algunos estudiosos como la mutación de lo indígena hasta volverse ciudadano, sujeto de la nación, «una de las corrientes más importantes que incrementaron el caudal de la ciudadanía fue la transformación del indio en campesino-indígena primero, y de campesino-indígena en ciudadano después» (López, 1997: 225). Pero migraban más los jóvenes que los adultos, los hombres más que las mujeres y las personas que tenían mayores niveles de educación, mientras tanto un gran sector de la población permaneció aún en el medio rural renovando su identidad aunque ser «indígena» o «indio» no podía ser nada más que un insulto.

Muchos de los quechuas y aimaras, después de soportar el gamonalismo y las inclemencias del tiempo, buscaron otros horizontes en un escenario en que el gamonalismo persistía con su hegemonía y la modernización se imponía parcialmente a través de diversos elementos como camiones, ferias comerciales, contrabando, instituciones religiosas, entidades estatales, movilidad social, diversificación de actividades económicas, etc. Así se creó nuevas oportunidades y actividades para la población rural.

En una perspectiva de evangelización de los pueblos indígenas, los misioneros Maryknoll hicieron su ingreso al Altiplano y muchos campesinos comenzaron a organizarse bajo la influencia de los misioneros. En cierta forma, estos sacerdotes retomaron el proyecto evangelizador de los primeros misioneros dominicos y jesuitas de los tiempos de la Conquista y de la Colonia, esta vez con una perspectiva basada en el respeto de los derechos civiles de los indígenas. Los misioneros Maryknoll cuestionaron a su llegada el fundamento del sistema de castas y el fuerte racismo imperante en la región. En el plano institucional crearon, a partir de 1957, nuevas jurisdicciones eclesíásticas: las prelaturas de Juli (1957), Ayaviri (1958) y Sicuani (1959), dedicadas a la evangelización, pero también a la defensa de los campesinos. Estas prelaturas serían los pilares de lo que luego se denominaría la Iglesia del Sur Andino (ISA), un actor crucial en el desarrollo histórico de Puno de la segunda mitad del siglo XX, en especial por su papel de promotor de líderes civiles y organizaciones campesinas y de defensa de los campesinos en su lucha por la tierra (Dammert y Panfichi, 2007: 105).

La cuestión de los pueblos indígenas siempre se asoció con el problema de la tierra, razón por la cual, en el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968) se impulsaron procesos de reconocimiento de las comunidades orientadas a generar desarrollo comunal además de pretender constituir un elemento de apoyo a la política estatal, pero no se revirtió la discriminación racial ni cultural. También en el gobierno del general Velasco Alvarado se amplió la Reforma Agraria bajo la consigna «tierra para

quien la trabaja» pero el uso de la tierra, después de eliminar el problema de la semifeudalidad, fue planificado y organizado por los agentes estatales desde sus propios imaginarios y visiones (desde arriba). En efecto, transformaron las haciendas en grandes empresas asociativas y las tierras comunales pasaron desapercibidas, «un 89% de las tierras y pastos naturales del departamento quedaban en manos del sector asociativo, en tanto que las sobrepobladas comunidades campesinas recibían tan solo un 2.5%» (Rénique, 2004: 169), ya que por medio tenían una meta clara de modernizar la economía rural. Para Sinesio López, la Reforma Agraria reconoció la tierra no como un derecho civil, sino como un derecho social.

Cabe mencionar que una de las políticas más importantes del gobierno de Velasco fue el tímido reconocimiento del quechua y del mundo andino, dado que hasta ese entonces ningún gobierno había promovido el reconocimiento de los elementos culturales de la población indígena. La política pública se emprendió con el objetivo de integrar a los quechuahablantes a la comunidad política y no se tomó en cuenta a los demás grupos étnicos: solo fue reconocido como lengua oficial el quechua. Para Sinesio López, el proyecto pasó por dos etapas: Primero, se caracterizó por la utilización del bilingüismo solo como método pedagógico en aquellas zonas rurales en que predominaba la lengua vernácula. Segundo, en la medida en que se oficializó la lengua quechua se tuvo que usar no solo en la enseñanza, sino también en otras instituciones públicas del Estado, como en la administración de justicia y otras actividades oficiales, en aquellas zonas donde la mayoría de la población hablaba predominantemente el quechua. El objetivo de la política de reconocimiento aplicado por el general Velasco Alvarado fue hacer del Perú un país bilingüe. En cuanto a los resultados de esta política fue la enorme contribución a la construcción de la ciudadanía social y política, debido a que se incrementó sosteniblemente los gastos en la educación, y por ende hubo más cobertura educativa, además del uso del método bilingüe. Asimismo, «los gobiernos que han tenido mayores iniciativas y un éxito mayor en implementar políticas estatales destinadas a favorecer al campesinado –es decir, incorporarlo a los beneficios de Estado y la ciudadanía– han sido gobiernos autoritarios. Ello al margen de su origen militar o

civil. Pienso específicamente en los gobiernos de Leguía (1919 – 1930) y Velasco (1968 – 1975)» (Méndez, 2009:564).

A mediados de la década del setenta la problemática étnica había perdido su relieve, dado «que las identidades étnicas no son algo dado de una vez por todas ni reflejan necesariamente lo que marcaba a estos pueblos antes de la invasión colonial española. Mantener, perder o adoptar tales identidades dependen mucho de cada contexto histórico» (Xavier Albó, 507). Por lo tanto, ante la llegada de las olas del marxismo al Perú, las organizaciones sociales se convierten en clasistas y las comunidades campesinas se articulan en organizaciones de carácter sindical y luego reunidas en el Frente Sindical de Trabajadores y Campesinos; posteriormente en la Federación Departamental de Campesinos de Puno (FDCP), y después fueron tomando liderazgo en la representación organizacional, constituyéndose en un actor decisivo en la lucha campesina por la tierra.

Después de la fracasada Reforma Agraria, hubo un fuerte ingreso de tendencias políticas marxistas a las organizaciones campesinas. «En el Perú, hay que responsabilizar en gran medida a los principales partidos presentes en las directivas de las organizaciones sindicales agrarias nacionales (CNA y CCP) por haber bloqueado sistemáticamente el desarrollo de esta dimensión étnica, vivida visceralmente en la vida cotidiana pero censurada ideológicamente en el quehacer político, sobre todo en la región andina» (Albó, 2009:520); es decir, el Partido Unificado Mariateguista con sus antecesores, Vanguardia Revolucionaria (VR) y el Partido Comunista Revolucionario (PCR), no tuvieron en cuenta la dimensión étnica. «Ni el Partido Unificado Mariateguista (PUM), que era el más presente entre las comunidades más organizadas del sur andino, ni los partidos lanzados verticalmente a la lucha armada y a la acción terrorista (Sendero Luminoso y MRTA) supieron complementar su visión con una perspectiva étnica» (Idem). Aparte de la Iglesia, los campesinos puneños a partir de la década del setenta han tenido nuevos aliados como las organizaciones no

gubernamentales (ONG) y el PUM; estos nuevos aliados, a través de los gremios campesinos principalmente, promovían la causa de las comunidades, la tierra y complementariamente capacitaban en temas agropecuarios, organización comunal, derechos humanos y ciudadanía.

En noviembre de 1986 el APRA ganó las elecciones municipales en Ilave y en siete provincias puneñas y, en febrero del mismo año, Alan García decreta la ansiada reestructuración de las tierras de las empresas asociativas (Decreto Supremo N° 5 y N°6-86-AG) a favor de las comunidades campesinas a fin de obtener réditos políticos, logrando desplazar al PUM (Partido Unificado Mariateguista) que había mantenido su hegemonía en las elecciones municipales anteriores.

Históricamente, Puno siempre fue un ámbito de fuerte presencia de quechuas y aimaras, en consecuencia, muchos actores políticos, activistas, grupos violentos y el propio ejército se inmiscuyó en asuntos de estos sectores de la población llevando consigo su propia percepción; distanciándose así, enormemente, de la propia perspectiva de los pueblos indígenas. Un claro ejemplo es el conflicto interno (1981-1992), expresado en una polarización armada entre Sendero Luminoso y el ejército, ambos distantes de la perspectiva indígena, que terminaron con la vida de aproximadamente 20,000 indígenas, tanto de la sierra andina como de la selva; estos indígenas fueron ejecutados tanto por el ejército que los acusaba de “terrucos” (terroristas), como por Sendero que los consideraba “soplones”.

Respecto de las normas que atañen al reconocimiento de los pueblos indígenas, en la Constitución Política de 1993 se introdujeron algunos cambios como el reconocimiento de la pluralidad étnica y cultural de la Nación (Art. 2) e incluso el carácter oficial del quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes « [...] en las zonas donde predominen» (Art. 48), ampliando así lo que Velasco Alvarado había

iniciado con el quechua. Pero, por otra parte –a diferencia de las otras e incluso de la Constitución peruana de 1979–, eliminó, al no explicitarla, la anterior restricción constitucional que impedía la compraventa de las tierras de las comunidades. Años después, la Ley de Tierras de 1995 y su respectivo reglamento de 1997 daban plena operatividad a este principio neoliberal (Albó, 2009:517). Por otro lado, «el desprestigio de los partidos arrastró consigo a sus organizaciones sociales aliadas y la prédica neoliberal dio sustento al proceso de parcelación de la tierra que los campesinos obtuvieron mediante sus luchas de los años anteriores. Igualmente, tuvo un papel importante la política de clientelismo y el fraccionamiento de la sociedad civil promovida por el gobierno fujimorista» (Dammert y Panfichi, 113).

#### **4.4. Construcción de la ciudadanía aimara en la provincia de El Collao –Ilave**

##### **4.4.1. Patrones organizativos de las comunidades rurales aimaras**

En la región Puno hay una intensa manifestación de la cultura andina, específicamente los aimaras son una comunidad de significaciones, en donde los significados que se atribuyen a las situaciones sociales o productos culturales son compartidos entre los miembros. Por ejemplo, la lengua aimara, como uno de los elementos culturales, constituye el lenguaje cotidiano de la población rural mediante el cual los aimaras en sus comunidades interactúan, se intercomunican y la comunicación no solo es verbal sino también es gestual, corporal, con tonos fonéticos y uso de objetos, entonces, las personas se manejan bajo sus propios convencionalismos.

Cuando se observó la relación entre el alcalde Fortunato Calle Incacutipa y los pobladores, en el despacho de la alcaldía de la municipalidad provincial de El Collao, se constató que el Alcalde como sujeto socializado bajo los patrones culturales aimaras – locales interactuaba y se manejaba comunicativamente mediante gestos corporales como el saludo con apretón de manos, con expresiones de cariño y de bienvenida, en aras de satisfacer expectativas. Así como cuando Gregorio Ticona estaba como Alcalde había una relación armónica con las autoridades comunales; en cambio durante el gobierno de Robles dicha relación se rompió porque los pobladores rurales habían percibido en el Alcalde arrogancia y menosprecio; esta percepción se fue consolidando cuando en sucesivas ocasiones no fueron tomados en cuenta sus pedidos y otras veces hubo actitudes y gestos de prepotencia por parte de algunos regidores, del Alcalde y del personal contratado de la municipalidad. Como cuando «el 09 de octubre, las comunidades de la zona media de Ilave realizaron una marcha hacia la municipalidad, exigiendo el esclarecimiento de la situación de sus presupuestos anuales. Al llegar al municipio no encontraron al Alcalde, que había optado por retirarse, y en su lugar hallaron a la regidora Melania Flores, dicha regidora, al verse confrontada, optó por insultar a los manifestantes, llegando a tildarlos de vagos y arrastrados» (Pajuelo, 2009:218).

En el proceso de gestión del extinto Alcalde poco a poco se fueron deteriorando las relaciones al interior de la municipalidad, como con la población local, poniendo en riesgo el orden social. Primeramente, en un inicio del conflicto los usuarios de electrificación se movilizaron y al realizar su mitin en la Plaza de Armas de la ciudad de Ilave invitaron al alcalde para que se pronuncie como autoridad respecto a sus reclamos pero el Alcalde no aceptó la invitación y, por consiguiente, cuando retornó la delegación que fue a invitarle, «los manifestantes silbaron, chiflaron y volvieron a gritar: **¡Queremos al Alcalde y no a sus delegados! ¡Nada de palabras! ¡Queremos su presencia! ¡Cirilo a la plaza y no en su despacho!**» (Ayala, 2005:25). También podemos ver la declaración de uno de los entrevistados al respecto:

«Yo soy testigo en una oportunidad cuando la población no solo de Ilave, sino de la región, se ha organizado; y esto por la situación de electrificación, donde la población se levantó y hubo paros, protestas, en eso invitaron al Alcalde para que saliera al frente del pueblo y decían; haber, él ¿qué diría?, ¿qué opinaría? como padre del pueblo, bueno esa vez no dio cara» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

La negativa del Alcalde a la invitación de los manifestantes inevitablemente emitió un mensaje, ya que dicha acción eludía o subestimaba al constructo simbólico de la realidad desde la reciprocidad; así los manifestantes al ser desatendidos se sintieron menospreciados. Dicho constructo simbólico fue socialmente compartido dado que han querido ser escuchados, atendidos, apoyados y defendidos por la autoridad local. Y muchos de los entrevistados indicaron que este hecho marcó el inicio del conflicto.

«El conflicto se da desde el momento que hubo inconveniencias con la energía eléctrica en el sector rural y empieza con un paro regional de comunidades por el tema de energía y pedían que el Alcalde intervenga también, invierta y apoye a las comunidades, ese día hicieron una marcha aquí en Ilave y una manifestación, y sus responsables de imagen institucional estaban en el techo del municipio filmando toda



la movilización y decían,...Alcalde sal, queremos conversar contigo y jamás se atendió a la población, entonces el resentimiento del sector rural empieza» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

Finalmente, el 2 de abril, día del informe económico, los pobladores aimaras tuvieron la oportunidad de encontrarse con el Alcalde y tenían la expectativa de informarse sobre el destino de los fondos de la municipalidad y participar democráticamente en un marco de respeto mutuo, pero debido a una divergencia política entre los aliados y los opositores terminó todo en un enfrentamiento campal. Entonces, una vez más, los pobladores se sintieron desatendidos, burlados, maltratados y ofendidos por el Alcalde, razón por la cual, en forma inmediata, solicitaron su presencia para que pudiera explicar lo sucedido y pudiera pedir disculpas al pueblo como gesto de respeto; o en todo caso renunciase al cargo, de ahí que uno de los manifestantes declaró a un diario local que **«nos quedaremos acá, esperando la aparición del Alcalde, porque nuestro objetivo es su renuncia, por su maltrato»**(*Correo*, 04.04.04). También al día siguiente una de las manifestantes declaró de similar manera: **«este enfrentamiento que provocó el Alcalde es una metida de pata que el pueblo de Ilave no perdonará. Robles debe irse a su casa porque ha demostrado que el cargo le cae grande, para muestra un botón. En el primer año de gestión no hizo nada, solo completó las obras del anterior Alcalde; dónde está su trabajo que no lo vemos, solo conocemos que sus funcionarios se han aumentado sus sueldos, no hay nada de obras. Debe renunciar si tiene un poco de decencia»** (*Correo*, 05.04.04). Asimismo, al respecto tenemos la siguiente declaración:

«...esa vez la población quería que llegue el Alcalde a pedir sus disculpas o algo por el estilo..., porque en ese Cabildo Abierto que solicitaron, pues empezó a organizar su gente y empezaron sus propios correligionarios, sus compañeros de la política prácticamente empezaron ofender al pueblo, entonces de esa manera el pueblo estaba molesto, porque tampoco de esa manera no se puede organizar, no se puede ofender al pueblo» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

En la región del altiplano la élite regional es amplia y diversa, por consiguiente el poder local está también en manos de las autoridades comunales, porque ellos también participan y se vinculan en la vida política local a su modo. Desde esta perspectiva, la obligación al alcalde Fortunato Calli a arrodillarse y pedir disculpas sucedido el 1 de julio de 2008 en Ilave (Relato 01), no es un hecho aislado de los sucesos ocurridos en el conflicto del 2004, dado que de similar manera la población movilizada exigió al Alcalde pedir perdón por propiciar el enfrentamiento pues según el memorial el enfrentamiento que se suscitó fue planificado, además se indica que el Alcalde efectuó agresiones en otras ocasiones así que era parte de su supuesta estrategia de “represión” a la oposición política ante los ataques, tal como consta en el memorial presentado a la Oficina Defensorial de Puno. A continuación, presentamos un fragmento del memorial:

«el Alcalde contrató personas de dudosa reputación y matones para que arremetan en contra de la población; es más tenemos pleno conocimiento de que en vehículos rurales (combis) trajeron piedras para cometer la agresión; ello significa que la agresión fue premeditada, haciéndoles presentes que no es un hecho aislado pues esta política de agresión y matonería también la efectuó en el proceso de las elecciones, como también en la primera asamblea informativa del año 2003, así mismo los trabajadores contratados del Municipio de El Collao por el Sr. Cirilo Robles estuvieron apoyando estos actos de violencia. EL ÚNICO AUTOR INTELECTUAL DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA ES EL SEÑOR CIRILO FERNANDO ROBLES CALLOMAMANI» (Fuente: Archivo Oficina Defensorial de Puno, 2004).

La multitud esperaba al Alcalde en el frontis de la municipalidad tomando el local, esperando ser informado sobre la supuesta malversación de fondos, pero no había señales de respuesta, por lo tanto, había mucha incertidumbre y desaliento entre los manifestantes, mientras el extinto Alcalde se encontraba en la ciudad de Puno, y no les daba la debida importancia, manifestaba que era víctima de un grupo de oposición que

querían su vacancia. Es decir, minimizaba la situación sin realizar las negociaciones ni asumir su rol ante lo que el grupo demandaba y declaró: **«No tengo temor a nadie porque no hice ningún mal manejo, todo es transparente, en mi vida política no tengo problemas legales»** (*Correo*, 04.04.04). Estas declaraciones caldearon más los ánimos de los manifestantes, porque no solo se le cuestionaba por el tema de malversación de fondos de la municipalidad, sino también por su forma de desplegar la comunicación, de su manejo gestual, corporal y tonos fonéticos, pues habían percibido que se gobernaba con arrogancia. Alanoca Arocutipa dice: «Lo que nos interesa es la actitud de racismo, exclusión, desprecio, explotación que han vivido estas culturas» (2008:30). Por ello, de acuerdo con sus percepciones y criterios para un amplio sector de la población este tipo de autoridad merecía dejar el cargo al margen de la existencia de normas que impedían su renuncia, simplemente el perfil del extinto Alcalde no se ajustaba en términos de legitimidad sociocultural al convencionalismo del mundo social aimara ni compatibilizaba con las expectativas. Al respecto tenemos dos entrevistas:

«Hubo prepotencia; a consecuencia de ello, toma de local; no queremos chicotes, palos ni piedras. El delito ha sido el haber golpeado a la población, el error ha sido el golpe y no tanto la corrupción, eso ha sido el detonante» (Entrevista: exregidor de la municipalidad “2003-2004” – sección a, 2009).

---

«Entonces, los dirigentes querían saber si verdaderamente ha malversado fondos o no. Pero el Alcalde por la situación de convulsión social ha abandonado el municipio, entonces, como quien dice “se escapó”. Más que todo la población ha tomado el municipio, él se fue a Puno y quiso gobernar desde esa ciudad, más que todo sus regidores no han permitido de que escuche a su población, sus regidores han despreciado a los pobladores del campo e Ilave es una población donde más que todo migran los hermanos del campo y a los campesinos no les gusta que los desprestigien, que los humillen, entonces, de eso han sido los problemas, han

empezado a organizarse más y a protestar más, porque el Alcalde ya no quiso dar cara absolutamente»(Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección, 2009)

Como históricamente los aimaras han sido subalternizados, se han vuelto tan sensibles a cualquier tipo de discriminación o menosprecio. «La percepción de engaño, maltrato e inclusive humillación, a las que son extremadamente sensibles las poblaciones rurales andinas» (Degregori, 2004:25). Al respecto el antropólogo Vicente Alanoca dice:

“La violación de los Derechos Humanos que han vivido estos pueblos y estos como elementos digamos son los que alimentan la furia, entonces esas cosas son cargadas” (Entrevista: docente de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2009).

El escalamiento y la posterior crisis del conflicto de Ilave es una clara muestra de la ineficacia del Estado, la poca credibilidad social e incomprensión de la clase política y de las instituciones oficiales del Estado a la ciudadanía local aimara, en vista de que la gestión del conflicto carecía de una perspectiva intercultural y puesto que se ha soslayado las propuestas desde el criterio de la población aimara y ahí se produjo el entrampamiento del conflicto, ya que toda propuesta de solución giraba en torno al cumplimiento de la normatividad oficial; por consiguiente, una y otra vez las autoridades políticas, incluidas las de la iglesia, explicaban a la multitud movilizada que el cargo de alcaldía era irrenunciable(ver cuadro N° 23). Asimismo, indicaban que no había causales de vacancia estipuladas en la ley para proceder con ella, sin embargo, los manifestantes al no ser comprendidos y atendidos permanecían movilizados indefinidamente; referente al tema el siguiente entrevistado dijo:

«...¡¡increíblemente el Estado ha esperado más de 20 días para voltear la mirada a Ilave. El único congresista que llegó es Jhonny Lescano para orientar a la población, de... ¿cuáles serían los caminos para buscar la salida a este conflicto? y no era lo que la población quería» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

Cuadro N° 23

**Participación de los agentes y el carácter de la propuesta de solución al conflicto**

N°	Agentes facilitadores	Propuestas e intervención
01	<b>La Comisión mediadora:</b> Prefectura de Puno, la Defensoría del Pueblo y la Vicaría de Solidaridad de la Prelatura de Juli.	<b>06 de abril-</b> La comisión explicó que el cargo de alcalde es irrenunciable y da conocer los mecanismos legales para su separación del cargo.
02	<b>Gobierno Regional de Puno.</b>	<b>11 de abril-</b> El gobierno regional presenta a la multitud la propuesta de alejamiento temporal de Fernando Robles Callomamani.
03	<b>Defensoría del Pueblo de Lima,</b> (Área de Gobiernos Locales).	<b>16 de abril-</b> Señala los procedimientos para la revocatoria y vacancia de autoridades municipales.
04	<b>Congresista:</b> Jhony Lescano Ancieta	<b>18 de abril-</b> Dialoga con la población y explica el procedimiento para la vacancia del Alcalde y regidores.

**Fuente:** Elaboración propia

El fracaso de los intentos de solución al conflicto evidencia la intervención culturalmente inapropiada, dado que hubo choque de propuestas de solución al conflicto entre las autoridades de instituciones públicas y la ciudadanía local, ya que la población movilizaba había decidido por consenso la destitución del Alcalde bajo el argumento de que si ellos eligieron al Alcalde también podían destituirlo; en cambio los operadores del Estado seguían planteando la solución dentro de los cánones legales, y sin dar apertura a otras propuestas fuera de los procesos legales; sin embargo, la población movilizaba exigía la destitución inmediata del Alcalde ignorando la burocracia, tal como se puede observar textualmente en la séptima parte del memorial emitido el 06 de abril del 2004 (ver anexo 3): **«Señores autoridades, les manifestamos que la voluntad del pueblo es que se produzca de una vez la DESTITUCIÓN DEL ALCALDE, por INCAPAZ, y si Uds. no nos hacen caso, la población seguirá en pie de lucha hasta lograr el objetivo trazado por nosotros sin dar un paso atrás porque sabemos que**

**LA VOZ DEL PUEBLO ES LA VOZ DE DIOS, y si nosotros elegimos a este alcalde incapaz, ahora somos nosotros también quienes pedimos su inmediata destitución»** (Fuente: archivo Oficina Defensorial de Puno). Sin embargo, es posible afirmar que se trató de todo un proceso de intervención-manipulación de la población involucrada y dada aquella carencia de legitimidad sociocultural, desde los operadores políticos de oposición al alcalde Robles.

Así pues, el fatal desenlace se suscita en un contexto de convulsión social. Primero, porque el conflicto ha estado gestándose hasta el punto de que la población ha empezado a movilizarse; segundo, el Estado estuvo respondiendo ineficazmente e ineficientemente; tercero, el Alcalde como autoridad no entendió el contexto social, a pesar de que el grupo presionó y le exigió, este no respondió a las expectativas de tal sector de la población en lo que respecta a su rol; tampoco negoció y se produjo, entonces, el desorden social, el desborde violento y el posterior y horrendo asesinato impulsado por aquellos operadores políticos de oposición.

#### **4.4.2. Concepción de derecho basado en las costumbres**

El mundo social aimara es estructurado, donde todos los actos y situaciones sociales tienen sentido y significado; concretamente en el conflicto de Ilave se ha observado que los pobladores aimaras tenían sus propias formas de concebir la gestión municipal, el derecho y el ejercicio de poder. Un modelo de gestión municipal para los pobladores aimaras fue el gobierno de tres periodos de Gregorio Ticona, cuyo liderazgo estaba basado en una estrecha relación con las autoridades comunales y la transferencia anual de los fondos de la municipalidad a las comunidades campesinas y centros poblados. «En la década de 1990 esta entrega se convirtió en una costumbre institucionalizada, que los pobladores rurales valoraron altamente» (Pajuelo, 215). El mencionado estilo de gestión se había convertido para los pobladores aimaras en una forma de hacer gobierno local y de ese modo concibieron las competencias, funciones del Alcalde y el destino del presupuesto municipal. De ahí que toda acción del Alcalde

contraria a ese estilo de gestión municipal provoque malestar, como se puede observar en la declaración del Presidente de la Central de Barrios y Urbanizaciones, después del informe económico del 2 de abril: **«no se tenía una idea clara del destino final de los recursos recibidos por parte del consejo que debieron ser destinados para la obra o repartidos para las comunidades»** (*Correo*, 04.04.04).

La transferencia de los recursos económicos a las comunidades, parcialidades y centros poblados era algo obvio y constituía parte del sentido común de los pobladores, tal como se puede apreciar en la declaración del alcalde del Centro Poblado de Sulcacatura II:

«Prácticamente ya desde el gobierno de Gregorio Ticona tenemos ya luz, presupuestos transferidos y es todos los años, y nosotros sabemos que todos los centros poblados, comunidades, parcialidades, exactamente saben cuánto de presupuesto tienen todos los años, entonces es algo obvio para mí ¿no?» (Entrevista a Cesar Rubén Pari (tomado del texto de Pajuelo, 2005: 82).

Es importante señalar que la ciudadanía no es un universal abstracto, sino es un universal concreto, pues los aimaras desde su cotidianidad van formando sus concepciones y construyendo su ciudadanía. Concretamente, los aimaras consideraron como “«derecho» aquella transferencia de fondos que recibían anualmente de parte de la municipalidad durante el gobierno de Gregorio Ticona, además exigían respeto; no obstante, quienes no compartían esta concepción de los derechos fueron el alcalde, algunos regidores y funcionarios de la municipalidad de la nueva gestión entrante del año 2003, puesto que para ellos esto no era un derecho, a tal punto que propusieron cambiar la transferencia de presupuesto por equipamiento de los locales comunales con equipos audiovisuales para la educación de los pobladores de las comunidades rurales. Al respecto, declaró el exfuncionario municipal:

«Entonces se inició esta campaña de incentivo a las comunidades para que puedan educarse y que puedan equiparse con artefactos como TV, DVD; varias comunidades aceptaron y otros no querían que sus centros comunales sean equipados, siempre querían dinero o

animales, según ellos era un DERECHO» (Entrevista: exfuncionario municipal (2003-2004), sección a, 2009).

En ese panorama de incompatibilidad, sin previa consulta ni acuerdo con los beneficiarios, el Alcalde, regidores y funcionarios de la gestión trunca de Robles, desde el año 2003 ya no realizaban la transferencia de presupuesto a las comunidades rurales y centros poblados. En efecto, había reclamos de las autoridades comunales y alcaldes menores de los centros poblados. Y el teniente alcalde Alberto Sandoval y opositor político de Robles, aprovechando la situación, realizó visitas a las comunidades que estaban en desacuerdo a fin de respaldarlas y ofrecerse a luchar por sus «derechos». Además realizó denuncias de la supuesta malversación de fondos que se estaba cometiendo en la municipalidad. Al respecto el entrevistado siguiente indica:

«Sabíamos que el señor Sandoval se agarraba de que él iba a luchar por la devolución de sus “derechos” supuestos, entre comillas, que tenían que recibir dinero anualmente» (Entrevista: exfuncionario municipal (2003- 2004), sección a, 2009).

La denuncia del Teniente alcalde de la supuesta malversación de fondos de la municipalidad, fue creída en el mundo social aimara, pues en el ámbito ‘nosotros’, en tal interacción, la información enviada resultó confiable, es por eso que uno de los entrevistados declaró lo siguiente:

«...la gente del campo hay veces basta con que le digas él está robando, cree, sin siquiera averiguar» (Entrevista: exfuncionario municipal (2003-2004), sección a, 2009)

Asimismo, en las comunidades rurales aimaras las personas actúan con veracidad y sinceridad; en efecto, tienen confianza en la palabra hablada y no siempre están en el afán de averiguar si son falsas o verdaderas las versiones vertidas por las personas, entonces este aspecto es parte del patrón cultural. También en el enfrentamiento del 02 de abril no cesaban de corear palabras como: **«fuera corrupto»**, **«ladrones del pueblo»**, **«la plata es del pueblo»**, **«renuncien por incapaces»**, **«que se vayan todos los**



**incompetentes, incluido los regidores»** (*Los Andes* 05.04.04). Igualmente, en las pancartas que portaban los manifestantes durante el escalamiento del conflicto se exhibían frases, junto a los nombres de los centros poblados, parcialidades y comunidades, tales como: **«Contra la corrupción», «Por más presupuesto», «Vacancia al Cirilo», «Exigimos respeto», «Fuera incapaz Alc. Cirilo Zorro»,** entre otras.

**Registro fotográfico 1:** Pancartas alusivas en contra del extinto Alcalde



**Fuente:** Diario *Correo* 05.04.04

Los ciudadanos aimaras no solo tenían una concepción definida respecto a las funciones del Alcalde y del destino del presupuesto municipal, sino también, según sus percepciones, la autoridad debía adoptar una posición de defensa de los intereses de la ciudadanía aimara, puesto que estos la eligieron y no gobernar con arrogancia y en forma patrimonialista; pues el aimara es un pueblo con sentido solidario y con alta necesidad de comunidad, esto se evidencia en el discurso dado por el Sr. Pedro Gutiérrez el día del paro por el tema de electrificación:

«Yo quiero decirle al Alcalde que nos está escuchando, que lo hemos elegido para trabajar con nosotros, para defendernos y hasta ahora solo se ha dedicado a viajar a Lima» (Discurso tomado del texto de Ayala, 2005:26).

La ciudadanía aimara se construye a partir del ejercicio efectivo de la ciudadanía y no en función a una narrativa o imaginario culturalmente externo. Los ciudadanos consideran como derecho a aquello que tienen acceso, por lo tanto, el significado de un servicio, producto cultural, de una situación social, institución o autoridad se basa en un conjunto de experiencias previas, de manera que adquiere un sentido y, a su vez, dado que sus derechos están reconocidos por la Constitución Política y en las diversas normas derivadas de esta. Pero el problema es quién les garantiza su cumplimiento y es más difícil cuando culturalmente no corresponde al tipo de derecho occidental, ya sea civil, político o social.

Cabe recalcar que el pedido de destitución del Alcalde de parte de los manifestantes se fundaba en que si ellos con su voto lo pusieron en el sillón municipal también podían sacarlo del cargo, como cuando expresan: **«no vamos tolerar que más gente se burle de nosotros, así como lo pusimos en el sillón municipal, también podemos sacarlo»**(*Los Andes* 05.04.04). Esta declaración no concuerda con que la «democracia se manifiesta únicamente en marcar aspas en el voto cada cierto tiempo» (Biondi y Zapata, 2006: 92), pues después de «la oportunidad de aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarles» (Nun, 2000: 26), ellos estaban convencidos de la lógica de que si ellos eligieron y aceptaron al gobierno local también podían destituirlo del cargo en caso de no responder a sus demandas, necesidades y expectativas; sin mayor conocimiento de la legitimidad legal del alcalde y la existencia de normas para la destitución y revocatoria, entonces, la legitimidad legal no es suficiente sino hay legitimidad social y cultural en determinada coyuntura.

#### 4.4.3. Predominio del patrón de organización de las comunidades rurales aimaras durante el conflicto

Los pobladores de las comunidades rurales aimaras tienen sus propias formas de organización y para movilizarse lo hicieron de acuerdo con sus patrones de organización, en vista de que sus derechos se vieron afectados (por ejemplo, la transferencia de recursos, etc.).

La organización fue la siguiente: **primero**, en el conflicto de Ilave había evidente presencia y liderazgo de las autoridades de las comunidades campesinas y ciertamente tanto el Teniente Gobernador como el presidente de la comunidad son parte del órgano de gobierno comunal y poseen alta legitimidad y «ellos fueron la columna vertebral del movimiento» (Degregori, 2004:43); **segundo**, la movilización fue masiva y cohesionada, esto ha sido el reflejo de la sólida organización de las comunidades rurales aimaras; **tercero**, los pobladores de las diversas comunidades campesinas han sido parcialmente coaccionados para movilizarse, no obstante fue bajo consenso que emprendieron la tarea de movilizarse en contra del extinto alcalde Robles Callomamani, dado que los mecanismos de coacción mediante las multas son una práctica cotidiana y legitimada desde las costumbres en las organizaciones comunales. Y tal vez sea esto, en parte, lo que permite que estas comunidades no se desintegren: «para lograr esa cohesión en un contexto nacional en el cual las organizaciones comunales tienden a debilitarse, las comunidades deben mantener algún(os) mecanismo(s) económicos de coacción» (Degregori, 48); al respecto uno de los entrevistados declaró lo siguiente:

«La organización aimara es sólida en sus determinaciones. Si dicen: hoy nos movilizamos, se movilizan todos, especialmente en las comunidades y no sucede eso a nivel urbano. En el sector aimara se aplican las multas cuando se incumple y eso

no sucede en el sector urbano, eso se mostró en las manifestaciones que se han dado» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

Respecto de los acuerdos que se toman unánimemente a nivel comunal, estos son de carácter obligatorio, y ante cualquier incumplimiento hay sanciones claras y precisas, como corrobora uno de los entrevistados:

«Usted sabe; hay veces las costumbres también ¿no? por ejemplo, aquí tenemos costumbres muy drásticas, por ejemplo, en las comunidades la asistencia y control en el trabajo todo es rígido» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

Los acuerdos que se toman en las reuniones comunales se registran en el Libro de Actas, por eso cuando tomaron acuerdos con el viceministro Richard Díaz en el Libro de Actas no se registró acuerdo alguno y fue desestimado y el Viceministro declaró a la prensa: **«que en dicha reunión se llegó a sustanciales acuerdos y que en ella participaron más de cien voceros aimaras. Empero los resultados, expresó, fueron desestimados por los ilaveños, pues no se levantó acta alguna»** (*Los Andes*, 28.06.04); entonces se puede observar que dicho documento sirve como memoria y es el principal instrumento de gestión comunal, además tiene carácter de ley. Si no se levanta el Acta en reuniones ni es firmado por los participantes no tienen validez los acuerdos tomados, entonces, el Libro de Actas constituye el documento oficial de las comunidades rurales aimaras.

En la provincia de El Collao en el Registro Único de Organizaciones Sociales (2009) de la zona baja o lago se registraron 18 comunidades campesinas, 29 de la zona media y 43 de la zona alta. «En el caso particular del Perú las comunidades representan una forma de minigobierno local. Las comunidades tienen un papel político, regulador,

normador y facilitador, son responsables del manejo y la gestión de bienes y de los intereses colectivos (riego, territorio, servicios comunes, etc.) y de las relaciones institucionales» (Pietro Simoni en Documento de trabajo 9, 200..., FIDA. p. 3). En ese marco de defensa de sus intereses, los pobladores de las comunidades aimaras se movilizaron bajo la dirección de los tenientes gobernadores y presidente de las comunidades campesinas en coordinación con alcaldes de centros poblados y dirigentes; al respecto se obtuvo las siguientes respuestas a la interrogante: ¿por qué hubo masiva movilización de la población aimara en el conflicto?

«Esto se manejaba a nivel de dirigencia, a nivel de Centros Poblados, entonces quienes convocaban era el Alcalde, presidente de la comunidad, porque había presupuesto para cada Centro Poblado para cada comunidad, entonces, ellos decían quienes no asistan a esta convocatoria, a esta movilización y vigilia van a tener sanción de no recibir su presupuesto» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

---

«Ha sido por exigencia de los tenientes porque había multa, cuando participaban en reuniones se les ha dicho vamos a ir a esa movilización y han sido obligados y mucha gente ha venido por cumplir para no ser castigado» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).

Después de la muerte del Alcalde, las movilizaciones no cesaban, continuaron hasta el 27 de setiembre; fecha de reapertura de la municipalidad. Por eso, «a fines de mayo las protestas se hallaban lejos de ser esporádicas, o de ser resultado de la simple manipulación de algunos dirigentes» (Pajuelo, 2009:241) y «en ese contexto, se dejó sentir la autoridad y la capacidad de movilización de las comunidades del entorno rural de Ilave» (Pajuelo, 2009:237).

#### **4.4.4. Sistema legal consuetudinario de la ciudadanía aimara y el sistema legal oficial**

Durante el conflicto hubo colisión de dos sistemas legales: a) el sistema normativo aimara basado en la costumbre, y b) el sistema legal oficial. El primero ha coexistido históricamente en las comunidades rurales aimaras regulando las relaciones entre sus miembros. Y el segundo es el derecho oficial que se sustenta en que el Estado es la única fuente del derecho. Pero es muy importante señalar que los dos sistemas al coexistir en el mismo espacio se interceptan, de manera que en las comunidades rurales al suscitarse problemas o conflictos entre los miembros se resuelven a nivel comunal, intermediado por las autoridades comunales, principalmente por el teniente gobernador, de manera eficaz y eficiente, de manera que «los tenientes cumplen el rol de los jilacatas. Por ejemplo, tienen autoridad para resolver los problemas familiares e interpersonales dentro de la comunidad, así como para convocar a los comuneros a reuniones periódicas y extraordinarias para tomar acuerdos» (Pajuelo, 2009: 220). Al respecto uno de los entrevistados señala lo siguiente:

«Hay junta directiva en la comunidad y los problemas por mayoría resolvemos, más por costumbre» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

En comunidades rurales aimaras no tiene mucho sentido hablar de normas y leyes del Estado, porque no forma parte de su lenguaje cotidiano, es decir, para la regulación del mundo social no se basan en normas escritas (legales o administrativas), sino que poseen sus propios lenguajes y parámetros de sanción como las costumbres, los valores y experiencias, como dijo Max Weber, «las leyes no escritas son a veces las que mejor funcionan y las más difíciles de erradicar» (citado en Méndez, 2009:230).A propósito de esto, un entrevistado declaró:

«Ellos no se rigen con las normas del Estado, sino de acuerdo a las normas de la comunidad campesina que pueden ser escritos, como no pueden ser» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).

Es preciso señalar que los valores morales y éticos que se practican en las comunidades rurales aimaras poseen amplia legitimidad, ya que estas son socializadas de generación en generación y tienen carácter convencional. Al respecto Guamán Poma de Ayala (1980) y Garcilaso de la Vega (1609 – 1984) trataron de ello en sus obras y Enríquez (2005: 38-39) infiere los siguientes valores y cualidades de un ciudadano aimara:

- a. Preparados para la vida colectiva y a la vez individual, adecuadamente insertados dentro de su sociedad.
- b. Que desarrollen las actividades económicas y estén aptos para asumir las diversas funciones que se les encomiende.
- c. Personas veraces que digan siempre la verdad, que no sean mentirosas.
- d. Que no sean ladrones y que no dediquen su vida a robar.
- e. Que no sean sucios ni de su cuerpo, ni de su hogar ni de sus sementeras.
- f. Que no sean perezosos o flojos, que no se dediquen a comer del trabajo ajeno.
- g. Que respeten a los productos que consumen, que no derramen el maíz y que no pelen las papas, «porque si tuvieran entendimiento llorarían».
- h. Que respeten la vida, que no maten por ningún medio ni que hagan abortar.
- i. Que respeten la biodiversidad de la naturaleza, que no depreden a los animales silvestres.
- j. Que obedezcan y respeten a sus padres, a los ancianos y a las autoridades del Inca.

- k. Que no mendiguen o pidan (hoy se conoce que en la concepción andina no existe el hecho de recibir algo sin dar nada a cambio. Cuando alguien recibe un convido, no es ético hacerlo en la mano, se extiende alguna prenda).
- l. Que estén dispuestos a ayudarse unos con otros en el trabajo agrícola y otras actividades. Y todo esto no obstante las mencionadas tendencias de más o menos parcial y compleja resignificación cultural contemporánea.

Durante el conflicto de Ilave, ante el vacío de gobierno local, se impuso la hegemonía de las comunidades rurales y durante el escalamiento, crisis y disminución del conflicto se fueron modificando los pedidos y reclamos (ver cuadro N° 24), y en su mayoría estos no concordaban con la normatividad oficial vigente. Entonces, esto es un indicador que los ciudadanos aimaras no siempre toman en cuenta las normas oficiales en la búsqueda de solución de los problemas y conflictos, o sea no forma parte de su esquema mental. Es como manifiesta Ilizarbe: «la presencia del Estado resulta débil y la propia comunidad es el referente para el orden, la seguridad y la administración de justicia. Así suplen la ausencia del Estado con sus propios recursos sociales y culturales» (2002: 99); así también señala en una de las entrevistas el presidente de Unión de Comunidades Aymaras (UNCA), Gerónimo Romero Huayna: **«ser aimara no es solamente hablar [la lengua], es un modo de pensar, de encarar la realidad»** (Mendoza, 2004: 12), en relación a lo anterior también dijo el siguiente entrevistado:

«La población es un poco rebelde y la población rural de Ilave piensa que las normas las hacen ellos mismos y no respetan las normas nacionales, la Constitución para ellos no existe simplemente, se basan en sus normas internas, reglamentos. Piensan que en la comunidad funciona y también puede funcionar en todo el país» (Entrevista: Ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).



**Cuadro N° 24****Reclamos y pedidos de los pobladores durante el conflicto**

<b>Momentos del conflicto</b>	<b>Reclamos y demandas</b>
<b>Escalamiento (antes de la muerte del Alcalde)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Piden la presencia del Alcalde en Ilave</li> <li>- Invocan al Alcalde a pedir perdón al pueblo</li> <li>- Piden vacancia del Alcalde.</li> </ul>
<b>Crisis(después de la muerte del Alcalde)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exigieron la liberación de los detenidos y pidieron dejar sin efecto la orden de detención preventiva contra 41 personas, todos ellos acusados por haber tenido participación en el crimen del burgomaestre.</li> <li>- Pidieron elecciones complementarias.</li> </ul>
<b>Desescalamiento (finalización del conflicto)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exigen el reconocimiento legal de Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a las autoridades proclamadas.</li> <li>- Demandan el desarrollo local integral.</li> </ul>

**Fuente:** Elaboración propia

En el cuadro N° 24 se observa que en un inicio del conflicto la población movilizada pidió la vacancia del Alcalde, pero al no ser atendidas oportunamente fue escalando cada vez más el conflicto hasta llegar a la crisis: la turba asesinó al Alcalde y fueron detenidos los regidores de la oposición y los propietarios de radio Armonía y San Miguel de Ilave a causa de la muerte del Alcalde; la población movilizada realizó un paro de 72 horas exigiendo la liberación de los detenidos y solicitaron dejar sin efecto las órdenes de detención que pesaba contra 41 personas aproximadamente, alegando que todos han participado en la muerte del alcalde; este sustento parece indicar la solidaridad con los detenidos, así como la aceptación social de aquel horrendo asesinato desde aquel contexto conflictivo. Posteriormente, en la etapa de desescalamiento, cuando el JNE no logró recomponer el Consejo Provincial, la población movilizada proclamó al Alcalde y

el cuerpo de regidores y para que sea legal exigieron al JNE el reconocimiento respectivo. Aquí se observa que los reclamos se fueron modificando según las etapas del conflicto y hubo preeminencia de la lógica del sistema legal aimara, en ese sentido, es evidente la poca hegemonía y legitimidad del sistema legal oficial y de las instituciones que efectivizan la normatividad. «El Perú es un contexto de pluralismo jurídico en el que confluyen una serie de tradiciones y experiencias jurídicas que producen una extraordinaria superposición y conflictividad normativa» (Guevara, 2009: 63).

La población movilizada, consciente de su sistema legal consuetudinario, se mantuvo firme en sus reclamos y cuestionó la normatividad oficial vigente, tal como se puede observar en la declaración del dirigente Roberto Ramírez Vizcarra: **«Los aimaras somos una nación y nuestros ancestros nos dieron leyes. Nosotros elegíamos a los jilacatas (autoridades comunales) y mallkus (supremos líderes) en asambleas públicas, pero ahora estos mecanismos no son aceptados por el pueblo, porque nos han complicado la vida»**(*Correo* 16.04.04). Primeramente, en el discurso se observa que hay una identidad étnica; segundo, el anhelo por una democracia directa (de tipo ateniense en el ágora), pues asevera que sus ancestros practicaban la elección democrática de los líderes en asambleas públicas; y tercero, hace referencia a los mecanismos actuales que no son aceptados por el pueblo, por lo que manifiesta que les ha complicado la vida, en otras palabras ilegítima la normatividad oficial. También, en ese entonces, el congresista Yonhy Lescano demandó cambio de la legislación, argumentando que debe adecuarse a **«las realidades ancestrales de los aimaras y quechuas, a fin de responder a las necesidades propias de esas poblaciones»** (Degregori, 2004: 34).

El entrampamiento del conflicto refleja la relación establecida entre el Estado y la sociedad local desde la formación de la república, porque, por un lado, se impone el Estado de derecho y por otro, la población local con sus formas de percepción y despliegue de acción reaccionan ante situaciones concretas a su modo, mientras los

operadores del Estado no comprenden ni cuentan con esquemas e instrumentos políticos sensibles a la diversidad cultural. Así, uno de los miembros de la Secretaría en Asuntos Agrarios del Frente Regional señaló: **«Yo creo que tiene que haber flexibilidad. Hay que entender este pedido unánime del pueblo de Ilave. En este sentido, las autoridades están parcializadas, porque, argumentan que las leyes no permiten la renuncia del Alcalde. Con esa justificación no podemos tener autoridades corruptas y que no son aceptadas. Creo que, si bien no existe una renuncia legal, se puede hacer una política. Esa renuncia debe permitir que el consejo de regidores discuta la vacancia del Alcalde»** (*Los Andes* 16.04.04).

Después de la fatídica muerte del Alcalde no cesaban las movilizaciones y el conflicto duró seis meses desde el 2 de abril hasta el 27 de setiembre, fecha de reapertura de la municipalidad provincial de El Collao, Ilave; aunque tras la muerte del Alcalde de inmediato se buscó la salida a la crisis y el propio Gastón Garatea Yori, Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza en ese entonces, dijo: **«lo que se tiene que hacer de modo urgente, es reabrir el municipio; solo resolviendo el problema de la acefalía que atraviesa Ilave se podrá trabajar en devolver la calma y tranquilidad»** (*Correo*, 07.05.04). Ante la búsqueda de reapertura de la municipalidad, el Jurado Nacional de Elecciones hasta en tres oportunidades emitió resolución de recomposición del Consejo Municipal(ver cuadro N° 25).

**Cuadro N° 25**

**Resoluciones de recomposición del Consejo Provincial El Collao emitido por**

**JNE - 2004**

<b>N°</b>	<b>Resoluciones</b>	<b>Consejo provincial El Collao</b>
<b>01</b>	Resolución N° 077-2004-JNE (9 de mayo).	<b>Alcalde:</b> Arnaldo Chambilla Maquera <b>Regidores:</b> Ramón Arias Santos Gertrudes Yanqui Mamani María Nora Nina Ramos Juan Mamani Mamani Melania Flores Yujra Edgar Segundo Lope Condori Gilberto Olivera Quispe Elías Rizalaso Incacutipa Encarnación Mamani Huanacuni
<b>02</b>	Resolución N° 098-2004-JNE (24 de mayo).	<b>Alcalde:</b> Ramón Arias Santos <b>Regidores:</b> Gertrudes Yanqui Mamani María Nora Nina Ramos Miguel Ángel Flores Chambi Rosalía Apaza Ccalli Sabú G, Gregorio Arias Elías Rizalaso Incacutipa Mateo Ticona Causacani Ricardo G. Butrón Calderon Mario Flores Muñuico
<b>03</b>	Resolución N° 191-2004-JNE (27 de setiembre).	<b>Alcalde:</b> Miguel Ángel Flores Chambi <b>Regidores:</b> Edgar Cotrado Ramírez Domingo Ticona Encinas Rasalía Apaza Ccalli Sabú Gil Gregorio Arias Aycachi Genoveva Inquilla Nina Elias Rizalaso Incacutipa Mateo Ticona Causacani Ricardo Butrón Calderón Mario Flores Muñuico

**Fuente:** Elaboración propia en base a los datos de JNE (2009).

El primer intento de recomposición fue a los catorce días de la muerte del Alcalde, con resolución N° 077-2004-JNE del 9 de mayo y se reemplazó al extinto Alcalde por el regidor hábil que siguió en su lista electoral, pero esta recomposición no prosperó por varias razones. La segunda recomposición fue la más polémica, porque el sector movilizaba estaba sorprendido por la designación del Sr. Ramón Arias Santos como alcalde encargado, ya que según la población movilizaba era improcedente, por ser personaje ligado al extinto alcalde, pero el día que entregó el JNE la credencial al alcalde encargado, Ramón Arias Santos, uno de los dirigentes advirtió diciendo que «**el JNE puede designar a quien quiera, pero de allí a que el pueblo acepte es otra cosa**» (*Correo*, 25.05.04). Y el viceministro del Interior Richard Díaz dijo «**la ley no se negocia**», es decir, durante todo el proceso del conflicto había posiciones encontradas.

#### **Cuadro N° 26**

#### **Consejo Provincial de El Collao-Ilave, proclamado por el sector de población movilizaba- 2004**

<b>Integrantes del Consejo Municipal de El Collao, Ilave</b>	
<b>Alcalde</b>	Miguel Ángel Flores Chambi
<b>Regidores</b>	Rosalía Apaza Calli
	Sabu Gil Arias Ancachi
	Edgar Cotrado Ramírez
	Domingo Ticona Encinas
	Elias Rizalaso Incacutipa
	Mateo Ticona Cusacani
	Mario Flores Muñico
<b>Regidor no juramentado</b>	Ricardo Butrón Calderón

**Fuente:** Elaboración propia, 2009

Ante la continuidad de vacío de poder, la población movilizaba proclamó al Alcalde y regidores el domingo, 4 de julio de 2004 en la Plaza de Armas de Ilave(ver cuadro N° 26). Consideró el acto como un «verdadero ejemplo democrático», aunque no intervino ningún organismo electoral, ni se ha actuado en función a la normatividad

vigente de elección de autoridades políticas, pero se hizo la proclamación. Al respecto, uno de los entrevistados señaló lo siguiente:

«...las leyes que tenemos en la nación son muy flexibles, entonces, ellos decían pues ¿no?, que estas leyes para nosotros no sirven, por eso no las tomaban en cuenta, por eso han puesto a otro Alcalde, ni a los policías querían verlos y los policías estaban solo en sus oficinas ya no salían, los que ponían orden eran los tenientes, ellos cumplían función de policía y también tenían o estaban con su vestuario de autoridad comunal como teniente» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave –sección a, 2009).

En este particular entendimiento de ejercicio de ciudadanía, el Estado ya no puede seguir con su misión “civilizadora”, centralista y con el tímido reconocimiento de la diversidad cultural y la diferencia, sino debe forjar una nueva relación con las sociedades locales sobre la base del firme reconocimiento cultural visibilizando sus prácticas y significados, porque la configuración del Estado-nación moderno no empalma en diversas realidades. Asimismo, «en lugar de promover el cumplimiento de la ley estatal, la maraña legislativa, induce a la llamada informalidad, a la resistencia (activa o pasiva) y a la emergencia de espacios sociales semiautónomos que crean sus propios mecanismos de regulación, coacción y sanción» (Guevara, 2009:74).

La mayoría de los entrevistados respondieron a la pregunta: ¿por qué la población movilizada no tomó en cuenta las leyes en el conflicto suscitado en el 2004? *Por desconocimiento*. Además, es común escuchar decir «los ciudadanos no conocen sus derechos y deberes», pero en el caso Ilave, no se puede generalizar ni afirmar el desconocimiento total; ya que algunos lo ignoran porque no ejercen sus derechos o le son negados y otros, aun sabiendo las especificidades, no las acataron por la propia situación de crisis de gobernabilidad, precariedad de la democracia, fragilidad institucional, ilegitimidad de la normatividad nacional y por la existencia de intereses políticos, individuales y grupales en ese entonces.

Para seguir tratando sobre la ilegitimidad social de la normatividad oficial, vamos a analizar la declaración de una ciudadana aimara el 28 de abril de 2004, que textualmente dijo:

«no hay justicia para nosotros, ya somos tímidos nosotros, la gente ya nos amenaza por todo sitio, mejor de una vez que nos maten de una vez, toditos que nos acaben. Para los que tienen plata hay justicia siempre, para nosotros no hay justicia; no hay ley para nosotros, mejor es que no haiga ley, mejor nos vamos a ir a otro país pues mejor, mejor eso queremos, queremos irnos a Bolivia, a quién les importa, no hay justicia» (Reportaje tomado del texto de Pajuelo, 2009: 47).

Tomando en cuenta el contexto de la comunicación, observamos que la ciudadana aimara expresa su profunda desconfianza en la efectividad de la justicia estatal peruana oficial, al sostener que **«para nosotros no hay justicia»**, pero hace la distinción con Otros(los que tienen plata, lo dice literalmente) que sí tienen justicia. Además hace referencia ala frecuencia de justicia, al decir que **«para los que tienen plata hay justicia siempre»**; entonces, al no acceder a la justicia en igualdad de condiciones, se ilegitima la normatividad oficial; por eso concluye **«no hay ley para nosotros»**. Seguidamente, presentamos una entrevista que también se refiere a la situación de ilegitimidad:

«Las normas son normas escritas, pero en la práctica estas no se dan cumplimiento, pero sabemos que tenemos una serie de derechos, pero hay veces nos son negados y... ¿sino prevalecen mis derechos, porque yo tengo que cumplir con mis obligaciones?» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

Para Guevara (2009:70), cabe preguntarse:

«Que sucede cuando las condiciones sociales y económicas impiden el ejercicio de los derechos y obligaciones asignadas. Cuando las disparidades son tan grandes, los ciudadanos no comparten, en la práctica, una plataforma común para accionar jurídicamente y acceder a las instituciones oficiales en pie de igualdad. Por eso, la inequitativa distribución de los recursos materiales y simbólicos necesarios para operar en el mundo jurídico oficial (alfabetismo, educación cívica básica, acceso a la administración, asesoría legal adecuada) impide la vigencia universal del derecho oficial y genera la ilegitimidad social»

Desde el punto de vista legal, es cierto que en la región Puno es predominante la informalidad pero es consecuencia del propio sistema jurídico, pues los ciudadanos al no contar con los medios y recursos materiales y simbólicos suficientes recurren a otras estrategias que son más compatibles con sus condiciones económicas, sociales, políticas y culturales. De manera que cuando se generan problemas y conflictos muchas veces no hay compatibilidad de perspectivas entre el Estado y la ciudadanía local. Específicamente, en el marco de búsqueda de solución al conflicto de Ilave, se realizaron varias reuniones entre los dirigentes de los diferentes zonas de Ilave, organizaciones sociales, autoridades políticas y la Comisión de Alto Nivel, pero el diálogo se hacía complicado, ya que después de haberse llevado una serie de reuniones no llegaban a los acuerdos esperados, y haciendo referencia a ello el entrevistado manifiesta lo siguiente:

«Ahora para evitar cualquier conflicto o manejar, se tenga que tener conocimiento claro de las leyes, para poder dialogar, no de igual a igual, pero por lo menos la población que entienda lo que quiere decir el Estado o los representantes, caso contrario nunca vamos tener diálogo fluido, sino diálogo de sordos» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).



#### 4.4.5. Práctica ciudadana basada en las costumbres

Es importante señalar que no todos los elementos de la concepción convencional de ciudadanía son practicados por la población aimara y efectivamente este aspecto saltó a la vista cuando la población movilizaba en Ilave actuaba según sus costumbres mas no en función a las reglas preestablecidas; al respecto uno de los entrevistados señaló:

«Tienen sus costumbres no debían ser buenos, sino regulares, porque en parte no conocen ciudadanía. El ciudadano peruano tiene DNI y tiene derechos y deberes y tiene que regirse a las leyes y normas vigentes, sin embargo estos comuneros no hacen caso, entonces ¿dónde está la ciudadanía?, el ejercicio de ciudadanía no se da» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).

La universalización de la ciudadanía, sin duda, trajo consigo una manera homogénea de concebir la ciudadanía; por consiguiente, el entrevistado precedente manifiesta que si los pobladores de comunidades tienen sus costumbres y no conocen la ciudadanía tampoco se rigen por las leyes y normas no deberían ser buenos ciudadanos sino regulares y se pregunta: **¿dónde está la ciudadanía?** Por supuesto, que el despliegue de acción de la ciudadanía aimara no se ajusta al concepto convencional de ciudadanía, pues los aimaras son sujetos activos y no actúan necesariamente en función a los parámetros preestablecidos, sino van incorporando en el proceso de la socialización diversos elementos sociales y culturales de las estructuras que no siempre son suyas; resignificando, redefiniendo y reinventando todo lo que les sea funcional y que en conjunto y simultáneamente definen la práctica ciudadana.

Cuando se les pidió a los entrevistados que definieran la ciudadanía, la mayoría la definió en términos de deberes y derechos automáticamente; pero cuando se les hacía la mención del caso Ilave, recién empezaban a responder reflexivamente y ahí aparecía la incoherencia de lo que se define imaginariamente como ciudadanía y lo que realmente es la práctica ciudadana; en consecuencia, es necesario redefinir la noción de ciudadanía de

acuerdo con la práctica ciudadana tomando en cuenta el aspecto activo del ciudadano como sujeto socializado desde condiciones culturales específicas, porque la actual noción de ciudadanía peruana no deriva de la propia realidad. Por ende, uno de los entrevistados un poco confundido sostuvo lo siguiente:

«Ciudadano es persona que tiene derechos y deberes. Y en el caso Ilave; lo que se vio es..., o no siempre en todo el esquema de ciudadano se puede meter en el mismo saco, hay formas de pensar, de cultura de ciudadano» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).

La diferencia entre los ciudadanos es una constante, ya que no todas las personas con estatus formal de ciudadanía adoptan conciencia ciudadana automáticamente, en virtud de que esto depende de las circunstancias vividas desde la niñez y las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales en que se encuentran actualmente, y en conjunto imprimen la ciudadanía real, pero no en términos mejores ni peores, simplemente diferentes. Sin embargo, cuando la población movilizaba en Ilave durante el conflicto bloqueaba carreteras, puentes, etc., muchos calificaban a estas acciones, prejuiciosamente, con el estereotipo ‘culturas inferiores’ y esta percepción se enmarca en la racionalidad de la modernidad, donde la discriminación está presente, en el sentido de que «solo algunos poseen la verdad y el conocimiento, los “otros” deben ser tutelados o aniquilados material y simbólicamente» (Vich, 2001:77). De manera que la discriminación no solo se da a nivel conductual sino también como un autoritario modelo de modernidad. Y corroborando lo mencionado el siguiente entrevistado manifestó respecto a la actuación de la población movilizaba:

«Hay desconocimiento, falta de sensibilización, falta de formación, falta de fortalecimiento de capacidades a los comuneros y autoridades, hacer una promoción de capacitación recién van a entender» (Entrevista: Ciudadano aimara– Ilave – sección a, 2009).

Este tipo de discurso representa el razonamiento de ciertos sectores de la población, ya que considera que el saber no se encuentra dentro de la comunidad. Así que, «se asume que el conocimiento se encuentra “fuera” de la comunidad y que ni las culturas ni los sujetos tienen nada que ofrecer, entonces todos debemos terminar sometidos a la autoridad de los que sí saben» (Vich, 2002:31). Realmente la declaración del entrevistado precedente es reveladora, debido a que con esta forma de razonamiento se asumen relaciones sociales e imaginarios subalternos, no solo a nivel de las localidades, también a nivel nacional, como es el imaginario entre la costa y la sierra.

La propuesta del extinto Alcalde de cambiarla transferencia anual de recursos a las comunidades por la implementación de equipos audiovisuales a los locales comunales para que la población rural pueda educarse es concordante con el imaginario anterior, dado que el Alcalde concebía la construcción de la ciudadanía aimara mediante la educación. Es decir, soslayó las costumbres, la identidad étnica y la vivencia de la población aimara; más aún, según él los recursos monetarios transferidos a las comunidades rurales y centros poblados debían sujetarse al criterio del gobierno local y no de libre disponibilidad de las comunidades, tal como se puede observar en la siguiente entrevista:

«Él siempre ha estado al tanto de los pedidos de la gente del campo, pero también salía más al campo, porque allí donde lo necesitaban, es más trató de cambiar muchas políticas que se venían arrastrando de gestión a gestión. El señor Alcalde inició con esa campaña en sentido que no les podía dar en dinero, ni animales, porque al final se ha visto; nosotros supervisamos, sí efectivamente, ¿existían los animales? y ¿dónde está el dinero?, y no encontramos nada» (Entrevista: ex funcionario municipal (2003 – 2004), sección a, 2009).

#### 4.4.6. El reconocimiento y la ciudadanía aimara

El Perú es un país poscolonial antes que moderno, ya que aún se repiten estrategias coloniales; por ejemplo, en el caso del conflicto en Ilave, «no fueron los Otros los que debieron haber dicho quiénes eran –o quiénes creían ser – sino que más bien esta tarea se convirtió en algo casi exclusivamente reservado para el trabajo de los intelectuales» (Vich, 2002:57-58), como para los periodistas, columnistas de los medios de comunicación nacionales y locales, funcionarios del gobierno y entre otros, dado que, antes de la muerte del Alcalde a nivel de los medios de comunicación local, fue tratada la población movilizadora injuriosamente. Luego, se polemizó el hecho del linchamiento e ingresó a la agenda de los medios de comunicación nacional. Como Pajuelo relata: «durante esos días, muchos pobladores compraban fotocopias de los periódicos, enterándose así que los denominados “aimaras” eran tildados de “bárbaros”, “salvajes” y hasta “demoniacos” (p.48). Además, estas adjetivaciones concuerdan con el imaginario: “la sierra entendida como el lugar de la “barbarie” de una cultura inferior a la de la costa; una cultura que en el mejor de los casos había que “educar” tutelarmente» (Vich, 2009: 63).

A la coyuntura de menosprecio de la población aimara, coadyuvó en ese entonces el Ministro del Interior, cuando sostuvo que la ola de violencia desencadenada era una **«acción irracional»** (*Expreso* 27.04.04, edición Lima), de manera que los imaginarios hegemónicos se desencadenaron desde afuera; y ahí estaba presente lo que Rama dice: «la ciudad letrada no pertenece únicamente al periodo colonial y se ha tratado, más bien, de una terca constante en la formación de los Estados latinoamericanos y de muchas de sus más significativas prácticas políticas» (citado en Vich, 2002:58). Es cierto que de ninguna manera se puede justificar el linchamiento del Alcalde, pero la declaración del Ministro fue despectiva, ya que muchos pobladores aimaras han actuado a la defensiva, como se puede observar en la declaración de un poblador en una radio local enfatizando lo siguiente: **«los aimaras somos inteligentes, pacíficamente hemos hecho nuestro paro, pero el problema es que este Alcalde se fugó, se burló de nosotros. Así**

**llegamos a este gran caos, esto es tierra de nadie»** (*El Comercio* 28.04.04, edición Lima).

El etnocentrismo ha estado presente en el conflicto de Ilave, porque se ha juzgado las acciones de la población movilizada etnocéntricamente, porque «estamos considerando la democracia liberal como patrón universal, que se construye en nuestro país como sobre una página en blanco. En todo caso, a partir de una “no cultura política”, de una sociedad anómica –cuyo ejemplo recurrente son los conductores que se pasan la luz roja– a la que hay que enseñarle ley y orden» (Degregori, 50). Esta forma de razonamiento supone falso reconocimiento de las poblaciones originarias, es «que a partir de 1492 los europeos proyectaron una imagen de tales pueblos como inferiores, “incivilizados” y mediante la fuerza de la conquista lograron imponer esta imagen a los conquistados» (Taylor, 44) y muchos ciudadanos y ciudadanas aimaras aún no superan este complejo de inferioridad, esta suerte de introyectado “etnocentrismo autodenigrante”, legado desde el colonialismo y que está profundamente incorporado en sus subjetividades, como podemos apreciar en la declaración siguiente del entrevistado:

«...más que todo los de zona rural desconocemos la mayoría de los ciudadanos los derechos, deberes, la mayoría se dejan influenciar, además no respetan las leyes que rigen. Para mi todos son ciudadanos, solo que no actuamos como debe ser» (Entrevista: ciudadano aimara, sección a, 2009).

Por otro lado, hay un gran sector de la población que sin perder su identidad cultural busca ser reconocido y respetado desde sus propios imaginarios, como se puede apreciar en el discurso del dirigente Nelson Rivera: **«nos han insultado de todo, nos han dicho que somos contrabandistas, narcotraficantes y hasta salvajes. Honestidad, trabajo y lucha, eso somos nosotros y ahora demostraremos hasta dónde somos capaces de llegar para hacernos respetar»**; además agrega: **«Nosotros hemos conquistado las grandes ciudades del país: Arequipa, Tacna, Moquegua, Cusco y otras más, son prósperas gracias al trabajo de nuestra gente»** (*Correo* 28.06.04). Entonces al

problema inicial de la movilización se fueron sumando otros problemas más estructurales e históricos, que no han sido resueltos hasta la actualidad, como el justo reconocimiento del pueblo aimara; el mencionado reconocimiento es necesario para liberarles de la identidad parcialmente impuesta y para que puedan recuperar su autoestima y desarrollar sus capacidades apreciando sus valores culturales y concebirse a sí mismos como iguales frente a otras sociedades, aunque en condiciones diferentes, pero no inferiores ni superiores.

## **CAPÍTULO V**

### **PERSPECTIVA HISTÓRICA Y CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO DE ILAVE**

#### **5.1. Antecedentes de la dinámica relación entre las comunidades rurales aimaras y la municipalidad**

##### **a) Presencia de la municipalidad en las comunidades rurales aimaras**

La concepción de la ciudadanía peruana ha sido excluyente tanto históricamente como culturalmente. Asimismo, Puno es una de las regiones donde predomina el quechua y el aimara en las zonas rurales y la población ilaveña mayoritariamente es rural (70%). Actualmente quechuahablantes y aimarahablantes tienen igual estatus formal de ciudadanía, pero son invisibilizados como ciudadanos aimaras y esta condición especial ha hecho que fueran excluidos del ejercicio pleno de su ciudadanía hasta hace tres décadas, dado que los ciudadanos aimaras monolingües no ejercían el derecho al voto; y por lo mismo, la municipalidad era una institución foránea e insignificante, sin presencia en la vida cotidiana del poblador rural andino. Solo a partir del proceso de democratización del país, expresado en la universalización de los votos se les concedió el derecho al voto a los analfabetos y comenzó la elección de las autoridades municipales por voto popular periódicamente y fueron incorporando a sus experiencias el ejercicio de la ciudadanía política.

En 1980 se realizaron las elecciones municipales distritales y provinciales en la región Puno y en todo el país, y ese año Ilave era aún distrito de la provincia de Chucuito. Recién en el año 1991, durante la gestión y bajo el impulso del alcalde distrital Saúl Melchor Ramos Morales, se convierte en provincia con cuatro distritos, denominándose provincia de El Collao. El mencionado exalcalde y expolicía ha sido un notable vecino de la ciudad de Ilave y se caracterizó por el manejo de un discurso

modernizante. «Su caso es el de un típico vecino perteneciente al antiguo sector de clase media de la ciudad» (Pajuelo, 2009:86), de manera que él no provenía del sector rural; pero desde las elecciones municipales de 1993 los alcaldes y regidores mayoritariamente han sido de origen indígena-campesino; en efecto, se observa que hay un acceso al poder estatal local por parte de la sociedad rural.

A partir de 1993 asume la alcaldía provincial Gregorio Ticona Gómez, elegido democráticamente y fue el primer alcalde provincial que gobernó tres periodos, aunque el último periodo lo asumió José Antonio Maquera (1999-2002), que era de la misma agrupación política, la cual gobernó un total de diez años (ver Cuadro N° 27). Ticona Gómez venía de ser alcalde en el distrito de Pilcuyo y fue dirigente campesino, por consiguiente era un miembro integrante de la comunidad rural aimara y tuvo una relación social directa con su grupo de origen, de ahí que cuando se convirtió en flamante Alcalde con 37% de votos recibió todo el respaldo de la población rural durante su gestión, mas no tanto de la población urbana. «Fue por ello que algunos vecinos de la ciudad de Ilave se negaron inicialmente a aceptarlo como Alcalde, argumentando que por su origen campesino sería incapaz de realizar una buena gestión» (Pajuelo, 2005:45); en vista de que, históricamente, el poder local lo ostentaban los terratenientes quienes sentían como su patrimonio este ámbito de poder asumiendo que solo ellos tendrían el derecho y la capacidad para gobernar. Refiriéndose a este tipo de Estado oligárquico, Rénique dice: «en el Congreso de la República se hace efectiva la alianza de oligarcas y terratenientes. Se identifican los primeros con un liberalismo conservador. Se presentan los segundos como defensores de la civilización frente al salvajismo indígena» (2009:464).



**Cuadro N° 27****Alcaldes elegidos democráticamente del distrito de Ilave y provincia de El Collao**

<b>Años</b>	<b>Alcalde distrital/provincial</b>	<b>Partidos y movimientos políticos</b>	<b>Años de Gestión</b>
<b>1990 – 1992</b>	Saúl Melchor Ramos Morales (Alcalde distrital)	Frente Nacional de Trabajadores y campesinos (FRENATRACA)	03
<b>1993 – 1995</b>	Gregorio Ticona Gómez (Alcalde provincial)	Izquierda Unida (IU)	03
<b>1996 – 1998</b>	Gregorio Ticona Gómez (Alcalde provincial)	Frente Independiente Juntos por Obras (FIJO)	03
<b>1999 – 2002</b>	José Antonio Maquera (Alcalde provincial)	Frente Independiente Juntos por Obras (FIJO)	04
<b>2003 – 2004</b>	Fernando Cirilo Robles Callomamani (Alcalde provincial)	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)	01

**Fuente:** Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Durante casi diez años de gobierno, Gregorio Ticona entabló una sólida articulación con las autoridades comunales y estas «parecen sustentarse en relaciones extremadamente personalizadas entre el Alcalde y las autoridades rurales, con evidentes rasgos clientelistas» (82). Pero, lo más resaltante es la institucionalización de una relación basada en la transferencia de recursos en forma anual a las comunidades rurales y centros poblados. La transferencia consistía de dinero en efectivo, materiales de construcción, ganados y entre otros que se daban según el pedido de los centros poblados, parcialidades o comunidades campesinas, de ahí que la municipalidad fue tomando presencia y significancia como una institución importante en el quehacer del poblador rural aimara.

En vista de que la ciudadanía aimara se construye desde su socialización en una “relación Nosotros” y puesto que la municipalidad es una institución externa a dicha relación, entonces con respecto a esa institución externa se establece una “relación Ellos”. En el mundo de la vida cotidiana existe una comprensión mutua entre los pobladores del medio rural, pero con la municipalidad no hay mucha familiaridad y, en efecto, en el conflicto del 2004, muchos de los manifestantes que venían de las comunidades rurales desconocían las competencias de la municipalidad normativamente, pero sí tenían claro, a partir del estilo de gestión de Gregorio Ticona, que esa entidad cumplía la función de transferir recursos anualmente y de construir obras de infraestructura. Es por eso que, cuando el extinto alcalde Fernando Robles propone cambiar la relación basada en la transferencia de recursos por la dotación de equipos, televisores y DVD con fines educativos, para muchos era inaceptable la propuesta.

«Todas las gestiones anteriores les habían dado cierta cantidad de dinero, sino era dinero eran vacunos, ovinos qué sé yo. Ellos estaban acostumbrados a recibirlos anualmente, de ahí que unos lo tomaron bien y otros no. Así, tal vez se creó cierto rechazo, de estar diciendo que no hay, las anteriores gestiones nos daban esto..., esto... y de esto» (Entrevista: exfuncionario – 2003- sección a, 2009).

En un inicio de su gestión el extinto alcalde Robles Callomamani tuvo el respaldo de la población rural porque, al igual que Gregorio Ticona, también era de procedencia campesina; pero como docente universitario no formó parte del círculo social de la población rural aimara. Mientras Gregorio Ticona se ha mantenido cercano a las comunidades rurales aimaras, en cambio el extinto Alcalde demostró desinterés en mantener una relación estrecha con la población rural, puesto que buscaba diferenciarse de las gestiones anteriores.

## **b) Apertura de participación ciudadana en el gobierno local**

En el gobierno de Gregorio Ticona (Izquierda Unida) se promovió la participación ciudadana a través del Consejo Vecinal y Comunal (COVECO) y fue una de las primeras experiencias de participación y concertación entre la ciudadanía y la autoridad municipal. «Las experiencias de participación ciudadana en los gobiernos locales gobernados por Izquierda Unida desde 1980: no surgieron porque un Alcalde con fuerte personalidad y liderazgo militar en IU, sino porque el programa político que conducía había sido capaz de enraizarse en las organizaciones sociales» (Chirinos, 2004: 202).

El COVECO, como espacio de participación ciudadana, convocaba a un importante sector de la población, organizaciones e instituciones para la formulación de planes municipales, elaboración del presupuesto y rendición de cuentas; se reunían dos veces al año en la ciudad de Ilave. En otras ocasiones se realizaban asambleas informativas en los diferentes distritos y servía como medio de difusión de los acuerdos alcanzados en la mencionada instancia. «A ojos de gran parte de la población, el COVECO significaba un espacio democrático de gestión municipal» (Pajuelo, 2005: 81); refiriéndose al respecto una ex funcionaria del gobierno de Gregorio Ticona señaló lo siguiente:

«Nosotros a nivel de la provincia en el año 2002 tuvimos una bastante fuerte organización a nivel de centros poblados, presidentes de comunidades, barrios; había una relación estrecha en bien de lo que es la transparencia y la legalidad en la gestión y de la provincia»(Entrevista: exfuncionaria de la municipalidad del periodo Ticona, sección a, 2009).

Pero también hay quienes señalan que el COVECO era utilizado políticamente para aparentar que se estaba haciendo una gestión municipal transparente; sin embargo, en este espacio de concertación y de informes económicos participaban los partidarios del Alcalde y dirigentes involucrados con la gestión.

«Con COVECO se hacía informativo encerrado en un local y participaban dirigentes con credencial a puerta cerrada, aparentemente se demostraba que hacia informe en el Coliseo Cerrado, solo su gente estaba ahí» (Entrevista: exregidor de la municipalidad 2003 – sección a, 2009).

El COVECO, entonces, no solo era una instancia que convocaba a la población, organizaciones e instituciones para los fines que fue concebido, sino que también constituía un importante espacio de negociación con los opositores a la gestión de Ticona, además de proyectar una imagen de gestión transparente, la que en parte favoreció el manejo municipal y la gobernabilidad. El COVECO funcionó eficazmente durante las dos gestiones de Gregorio Ticona y perdió legitimidad durante la gestión de José Antonio Maquera.

### **c) Mecanismos de participación ciudadana promovidos por el Estado**

#### **c.1) Mecanismos de participación y control ciudadano**

Durante el gobierno de Fujimori, la participación ciudadana fue ampliada: «de la elección de autoridades y representantes, se extendió a un conjunto de mecanismos de democracia directa» (Balbuena, 2006:9). Efectivamente, con la **Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Ley N° 26300**, se estipuló en el artículo N°2 los siguientes derechos ciudadanos:

- a) Iniciativa de Reforma Constitucional
- b) Iniciativa en la formación de las leyes
- c) Referéndum
- d) Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales
- e) Otros mecanismos de participación establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

Además, los derechos de control como:

- a) Revocatoria de autoridades,
- b) Remoción de autoridades,
- c) Demanda de rendición de cuentas
- d) Otros mecanismos de control establecidos por la presente ley para el ámbito de los gobiernos municipales y regionales.

De todos estos diversos mecanismos de participación y control ciudadano, el más usado fue la demanda de rendición de cuentas y la revocatoria de autoridades vía consulta popular; la revocatoria no es procedente durante el primero y el último año de mandato.

### **Cuadro N° 28**

#### **Mecanismos de la Ley 26300 usados hasta el 2004 a nivel nacional**

<b>Mecanismos</b>	<b>Número de veces</b>
<b>Iniciativa legislativa presentada al Congreso</b>	30
<b>Solicitud de rendición de cuentas</b>	0
<b>Remoción de autoridades</b>	0
<b>Revocatorias realizadas</b>	173

**Fuente:** ONPE y Transparencia 2004.

Según los datos del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), desde 1997 hasta el 2004 se habían realizado tres procesos de revocatoria a nivel nacional; respecto de los kits vendidos para la revocatoria de autoridades municipales, hasta inicios de abril, diez correspondían a revocatorias de alcaldes provinciales y veintitrés a revocatorias de alcaldes distritales del departamento de Puno, y nadie adquirió kits para revocar al extinto alcalde Robles Callomamani; a su vez en febrero del 2004 había 46 comités de revocatoria provinciales y 314 para alcaldes distritales, pero ningún comité de la Provincia de El Collao.

Con respecto al mecanismo de rendición de cuentas, en la Provincia de El Collao, este sí fue solicitado en el periodo de gobierno de Fernando Robles Callomamani, pero se realizó de manera inadecuada el 2 de abril. Este informe fue invalidado por el público asistente al no quedar claro y los asistentes declararon que querían que se hiciera un informe económico real y detallado; sin embargo, el informe de los gastos se presentó en montos globales lo que obstaculizó la comprensión del público asistente, como se observa en la siguiente declaración:

«En ese momento toda la población ilaveña y las zonas rurales lo que querían es que se hiciera un informe económico real, un informe detallado de todo el año 2003, pero en el fondo no ha sido así, sino que todo el informe económico fue genérico, lo que quería la población es que se haga en forma detallada obra por obra, rubro por rubro» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009)

## **c.2) Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP)**

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) fue impulsada por el Estado en el gobierno de transición de Valentín Paniagua (2000 – 2001), para la institucionalización de la concertación entre funcionarios públicos, representantes de la sociedad civil y autoridades políticas. Había un esquema de organización nacional y

descentralizada para la MCLCP, con mesas departamentales, provinciales y distritales. Para Federico Arnillas (2004:242), la naturaleza de MCLCP se caracterizó por lo siguiente:

- Carácter mixto del espacio: sector público/sociedad civil.
- Ubicación del espacio: zona de frontera entre lo público estatal y lo público social. Externo a la estructura estatal. Externo a la sociedad civil.
- Formalidad o institucionalidad: creado por decreto supremo. Respaldado por la ley.
- Implicancias jurídico-políticas de la formalidad respecto de la participación: mandatorio para la autoridad (ejercer una obligación); discrecional para la sociedad (ejercer un derecho).

La MCLCP de Puno, una vez instalada en el 2001, se vinculó con mayor facilidad con las experiencias de las provincias aimaras del sur que con las provincias quechuas del norte (Panfichi y Dammert 2007:119), mientras que en las provincias de la zona norte, Melgar, Huancané y Azángaro, CARE Perú formaba las Mesas de Concertación Interinstitucional (MCI), que posteriormente constituyeron la Red de Mesas de Concertación Institucionales. La mesa de Puno se inició con gran éxito y se debilitó posteriormente, razón por la cual, durante la gestión trunca de Fernando Robles Callomamani, no se conformó ni instaló la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza. Esto nos indica que el gobierno municipal no promovía la participación ciudadana durante su gestión ni daba importancia a las instancias de participación ciudadana.

Ilave, a pesar de tener experiencias de concertación y participación ciudadana en el gobierno local, simplemente en la gestión de Robles Callomamani no fue tomada en cuenta, debido al afán de hacer una gestión diferente. Puede haber muchas instancias de participación ciudadana, pero esto depende de la voluntad política de las autoridades y de la cultura política de la población, porque, al no haber institucionalización de la concertación y participación ciudadana, la voluntad política de los gobiernos locales y regionales define los términos de participación ciudadana en la gestión pública; por

ejemplo, David Giménez Sardón durante su gobierno regional (2002 – 2006) no asumió el Plan Concertado de Desarrollo de Puno (PDCP), aunque firmó el acuerdo de gobernabilidad conjuntamente con los candidatos durante la campaña electoral.

En el 2002 puso en marcha el proceso de descentralización el gobierno de Alejandro Toledo ligándolo con la participación ciudadana; y la MCLCP perdió su razón de ser, en la medida en que fueron estableciendo nuevos mecanismos de participación ciudadana para la formulación, debate y concertación en los planes de desarrollo y presupuesto en la gestión pública.

### **c.3) Presupuesto Participativo y Consejo de Coordinación Local**

Después de la caída del régimen fujimorista, el gobierno de Toledo emprendió el proceso de descentralización con una política explícita de participación ciudadana; asimismo, las reformas descentralistas de los últimos veinte años a nivel de Latinoamérica se asociaron siempre a la participación ciudadana. Entonces, en ese marco de asociación entre los procesos de descentralización y la participación ciudadana, en la reforma constitucional (ley 27680), se dispuso que los gobiernos regionales y locales formularan sus presupuestos con la participación de la población (artículo 199).

El Presupuesto Participativo (PP) fue creado mediante la Ley N° 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo, con el fin de asegurar la efectiva participación de la Sociedad Civil en el proceso de formulación de presupuestos y Planes de Desarrollo Concertado (PDC). Ya partir del 2003 los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana; esta forma de introducción de la participación se trata de un modelo «desde arriba», y por supuesto, para muchos gobiernos locales y regionales era nuevo gobernar con la participación de la ciudadanía, y en ese contexto el



extinto alcalde Cirilo Robles tenía dificultades para establecer su plan de gobierno y cumplir con las promesas electorales; al respecto uno de los ex funcionarios declara:

«Ellos tenían su plan de gobierno (Alcalde y regidores del gobierno) que habían presentado en la campaña y en un inicio no se tenía bien clara las metas que se habían establecido para desarrollar su gestión municipal, es así que yo tuve que intervenir en los tres primeros meses y tratar de plasmar todo el plan de gobierno que ellos habían prometido y por otro, tenía que adecuarme al nuevo sistema que se estaba implementando, que era la participación ciudadana para la ejecución de obras públicas y justamente Ilave era ciudad piloto» (Entrevista: exfuncionario – 2003 – sección a, 2009).

Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades 27972 establece que los gobiernos locales instalen el Consejo de Coordinación Local (CCL), y esto entró en vigencia desde el 2003. Sin embargo, no se instaló ningún espacio de concertación en la gestión trunca de Robles. «Al desinterés del Alcalde se sumaba el de Sandoval y los regidores opositores, quienes en ningún momento solicitaron la conformación de la MCLCP, ni del CCL, ni tampoco apostaron por la vía legal del proceso de revocatorias municipales» (Panfichi y Dammert, 2007: 136); por lo visto, ni el exalcalde Robles ni los de la oposición quisieron compartir el poder con los no elegidos, es decir, con la sociedad civil.

La relación entre la Municipalidad y la población en general durante el año 2003 se había distanciado, debido a que los «mecanismos de participación como el CCL o la MCLCP no se habían instalado o estaban desactivados» (Degregori, 2004:47), situación que influyó en el desconocimiento de la población del manejo del presupuesto municipal, generándose así un escenario propicio para la especulación, desconfianza, incertidumbre e instigación. Es decir, faltó voluntad política en las autoridades municipales y funcionarios para promover la participación ciudadana a fin de

transparentar y dinamizar la relación en términos de concertación, coordinación y articulación con la población local.

Es importante enfatizar que los mecanismos de participación ciudadana promovidos por el Estado no forman parte de la cultura política de la ciudadanía aimara, dado que son sociedades históricamente marcadas por la servidumbre, el autoritarismo y el clientelismo; y no siempre los ciudadanos demandan y están predispuestos a participar en estas instancias, sino solo algunos sectores de la población y otros se articulan a su modo; al respecto Luis Chirinos del proyecto Participa Perú, dice que según las experiencias de casos de conformación de Consejos de Coordinación Regional «no existe, al parecer, una vocación natural e innata de la ciudadanía a participar. La demanda la encontramos más bien en los sectores de liderazgo social con cierta conciencia programática y política» (200). En resumen, la participación en la gestión pública no forma parte de la cultura política de la ciudadanía peruana en general.

El rechazo, la desconfianza y la resistencia del Alcalde a la participación ciudadana no solamente se produjo en Ilave, sino también en los gobiernos regionales y locales a nivel nacional en el proceso de la descentralización emprendido en el gobierno de Alejandro Toledo. Además se presentaron una serie de problemas, tal como Chirinos señala:

*Se puede afirmar que en la generalidad de los casos el procedimiento fue apresurado, excluyente, falto de reglamento e incluso con serias deficiencias de información a la ciudadanía (se llegó, en algún caso, a convocar con una nota de prensa) y a plazos cortos. A ello se añadió, en otro caso, la selección y/o eliminación arbitraria de organizaciones en el registro. Es necesario señalar, por otro lado, el escaso interés de la sociedad civil por intervenir en el proceso, lo que es una expresión de su debilidad y fragmentación, así como de un dramático déficit de información. En este sentido, es significativo que el Estado no haya desarrollado una intensa campaña de información a la ciudadanía sobre el*

*contenido de la reforma descentralista en general, y sobre los derechos de participación (195).*

Grandes sectores de ciudadanos y ciudadanas aimaras desconocían los contenidos mínimos del proceso de la descentralización, como las disposiciones del manejo del presupuesto municipal y también los cambios que se estaban dando en el sistema de administración de recursos públicos, pues en las comunidades rurales existe el predominio del cotidiano que es lo que les interesa y conocen más y «el acervo de conocimiento opera, por consiguiente, como una pauta automática de conducta o como un esquema de interpretación explícito» (Martin, 1993:103). Como podemos observar en las siguientes respuestas a la interrogante: ¿sabe usted cómo funciona o se gerencia la municipalidad?

«Hay veces los ciudadanos estamos ocupados en nuestras cosas y no damos importancia y no sabemos casi esas cosas del Alcalde, tampoco estuve nunca como regidor»(Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección c, 2009).

Es importante señalar que mientras no se garanticen los umbrales mínimos de bienestar a la gente y no se promueva la igualdad de oportunidades, es casi nula la participación de la ciudadanía en la gestión pública, más aun se produce la desafección política, entonces, en ese entorno es evidente la exclusión de quienes no están en condiciones para interesarse en la política, de manejar información y conocimiento, por lo tanto, son ciudadanos que no acceden a la ciudadanía política, pues esto no solo implica el derecho al voto sino también derecho a ser elegido y tener acceso a los espacios de discusión, debate, concertación, decisión y deliberación.

## **5.2. Sucesos del conflicto de Ilave**

### **5.2.1. Aspectos previos al conflicto**

#### **a) Pugna por el poder**

En los comicios electorales de noviembre del 2002, Fernando Cirilo Robles Callomamani excandidato al Congreso y a la alcaldía de la Provincia de El Collao en 1998, logró ser elegido Alcalde provincial por el movimiento independiente Unión Regional para el Desarrollo. La campaña electoral consistió en promesas de cambio de estilo de gestión, ataques y críticas a la gestión del gobierno del Frente Independiente Juntos por Obras (FIJO). Asimismo, por su profesión y experiencia en la dirigencia política local, generaba expectativas entre los ciudadanos.

Para las elecciones del 2002, Robles estableció una alianza electoral con Alberto Sandoval, antiguo adversario político en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno; en ese entonces Robles había militado en Patria Roja y Sandoval era militante de Pukallacta, escisión de Patria Roja. Esta alianza se habría iniciado cuando Robles buscaba la revocatoria de José Antonio Maquera y Sandoval se había sumado a esta búsqueda y, así, formaron una férrea oposición y de esa manera este acercamiento entre estos dos personajes sirvió para acceder al poder local.

En el año 2003, Robles Callomamani asume la alcaldía conjuntamente con los seis regidores del mismo movimiento político, formando un gobierno municipal mayoritario, también integrado por tres regidores de otros movimientos, sumando un total de nueve Concejales de la Municipalidad de El Collao, más el Alcalde, establecido así por el JNE según el número de electores (ver Cuadro N° 29).

**Cuadro N° 29**  
**Consejo Provincial de El Collao-Ilave 2003 hasta abril de 2004**

<b>Alcalde y regidores</b>	<b>Nombres</b>	<b>Partidos y Movimientos Políticos</b>
<b>Alcalde</b>	Fernando Robles	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Teniente alcalde</b>	Alberto Sandoval	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Segundo regidor</b>	Teófilo Contreras	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Tercer regidor</b>	Arnaldo Chambilla	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Cuarto regidor</b>	Juan Mamani	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Quinto regidor</b>	Melania Flores	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Sexto regidor</b>	Edgar Lope	Unión Regional para el Desarrollo (URPD)
<b>Sétimo regidor</b>	Gilberto Olivera	Somos Perú
<b>Octavo regidor</b>	Marcelino Aguilar	Frente Progresista
<b>Noveno regidor</b>	Encarnación Mamani	Movimiento Amplio País Unido (MAPU)

**Fuente:** Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Pero, ¿cuándo se inicia el conflicto que desembocó en la trágica muerte del Alcalde? El conflicto comenzó desde el inicio de la gestión municipal de Robles Callomamani al interior de la municipalidad, entre el Alcalde y Teniente alcalde, y fue exteriorizándose hacia la población, a través de una serie de hechos, denuncias, acusaciones, etc. Al respecto un exfuncionario declara:

«Yo trabajé directamente con el Alcalde, en un inicio el Teniente alcalde ha estado designado como regidor de obras, en la comisión de obras estaba y trabajaba con él los tres primeros meses, pero después tuve que trabajar y coordinar con él [el extinto Alcalde] porque este señor Teniente alcalde que estaba en obras, venía con insinuaciones, con malas intenciones desde el inicio de la gestión» (Entrevista 01: ex funcionario – 2003 – sección a, 2009).

La alianza entre los principales actores del conflicto ha sido efímera y electoral, ya que terminado el proceso de elección se inició la disputa por el poder; para Pajuelo (2009: 204-205), fueron básicamente cuatro los conflictos que a lo largo del año 2003 y hasta abril de 2004 hicieron imposible la marcha normal de la municipalidad: a) conflictos que estuvieron vinculados a la situación laboral de los trabajadores; b) conflictos en torno a la gestión del Programa del Vaso de Leche; c) conflictos con los alcaldes de centros poblados menores; y d) el deterioro de la relación entre la municipalidad y las autoridades comunales, sobre todo los tenientes gobernadores.

Asimismo, el Órgano de Control Interno (OCI) había realizado un examen especial a la Municipalidad Provincial de El Collao- Ilave, desde el 1 de diciembre de 2002 al 31 de julio de 2003 y alcanzó a la Contraloría General de la República los hallazgos de ocho casos(*Los Andes*,08.03.04):

1. Reintegro de remuneración sin sustento legal
2. Gastos que superan presupuesto de personal
3. Inexistencia de normas para el presupuesto
4. Desembolsos indebidos por S/. 22, 757
5. Omisión de descuentos por inasistencia
6. Incremento de presupuesto exorbitante
7. Contratados no reúnen requisitos
8. Incumplimientos del acuerdo del Consejo

En el marco de intervención de la Contraloría General de la República, también se efectuó un Examen Especial a la Municipalidad Provincial de El Collao – Ilave, periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 al 31 de julio de 2004,y autorizan al procurador iniciar acciones legales contra presuntos responsables mediante Resolución de la Contraloría N° 284 – 2005- CG (ver anexo 4). Entonces, hubo perjuicio económico a la municipalidad, es por eso que el conflicto previo se inicia, con la población organizada, en forma aún no contundente en el mes de marzo de 2004 y cuando los dirigentes de la

Asociación de Usuarios y Consumidores de Electricidad de la región Puno convocaron a un paro regional de 72 horas para reclamar precios justos ante el alto costo de las tarifas de electricidad. El último día del paro los manifestantes solicitaron la presencia del burgomaestre en la Plaza de Armas para concertar un Cabildo Abierto, al que accedió Robles Callomamani pero solo en su despacho, programándolo para el día 31 de marzo de 2004 (*Correo*, 04.04.04), este hecho generó malestar entre los manifestantes pues ellos exigían la presencia del Alcalde en la Plaza de Armas.

Llegada la fecha programada para realizar el Cabildo Abierto, se anunció que se había postergado para el 2 de abril. Dicha reprogramación disgustó a muchos de los ciudadanos interesados en asistir a la mencionada reunión. «La muchedumbre se sintió desconcertada y descontenta. Pero no había nada que hacer, a quién acudir frente al anuncio recibido. Los comuneros se retiraron desgastados, desairados, decepcionados» (Ayala, 2005:29).

Como ya mencionamos, desde el inicio de la gestión de Robles, el Teniente alcalde se convirtió en oposición, uniéndose así a los regidores de otras agrupaciones políticas y posteriormente se fueron uniendo otros regidores de la misma agrupación política (Unión Regional para el Desarrollo), formando así dos facciones integradas por cinco regidores de oposición y cuatro regidores gobiernistas más el Alcalde (ver cuadro N°30) y «el burgomaestre se vio entonces obligado a dirimir con frecuencia votaciones, amparándose en el doble voto que le otorga la Ley Orgánica de Municipalidades. Este cambio en la correlación puso al Alcalde a la defensiva, hizo que evite aun más la convocatoria a reunión del Consejo y reforzó su tendencia a la opacidad en la toma de decisiones» (Degregori, 2004:26).

**Cuadro N° 30****Facción de gobiernistas y opositores 2003 – abril 2004**

<b>N°</b>	<b>Gobiernistas</b>	<b>N°</b>	<b>Opositores</b>
<b>1</b>	Cirilo Robles Callomamani (URPD)	<b>1</b>	Alberto Sandoval Contreras (URPD)
<b>2</b>	Edgar Lope Condori (URPD)	<b>2</b>	Teófilo Contreras Encinas (URPD)
<b>3</b>	Arnaldo Chambilla Maquera (URPD)	<b>3</b>	Gilberto Olivera (Somos Perú)
<b>4</b>	Juan Mamani Mamani (URPD)	<b>4</b>	Marcelino Aguilar Arce (Frente Progresista)
<b>5</b>	Melania Flores Yujra (URPD)	<b>5</b>	Encarnación Mamani Huanacuni (MAPU)

**Fuente:** Elaboración propia (2009).

«Ellos eran cinco regidores de oposición, gente mediocre y nosotros éramos cuatro regidores, más el Alcalde, estaban apoyados también por gente frustrada, incapaz, que no han tenido logros»(Entrevista: exregidor 2003 –sección a, 2009).

De acuerdo a las entrevistas realizadas, Sandoval estaba decidido a asumir el cargo de la alcaldía, por ende, estaba empeñado en conseguir y dispuesto a luchar hasta las últimas consecuencias, incluso había jurado ser Alcalde el año 2004. Además, ha sido testigo uno de los exfuncionarios de la municipalidad de sus reclamos, insinuaciones y discusiones, que podemos apreciar en la siguiente declaración:

«...yo era personal de confianza del señor Alcalde, yo no me anunciaba con la secretaria ni tocaba, yo entraba no más, porque él (alcalde) me había autorizado. Entré una vez y encuentro un escándalo, pues el señor Sandoval amenazaba al Alcalde dando a entender que había un acuerdo de que él había de entrar a la alcaldía, pero durante el proceso, me parece que tenía que asumir de todas maneras el cargo de Teniente alcalde y lo reclamaba como un derecho, entonces fue la primera vez que me quedé sorprendido y dije ¡qué es esto!; de ahí empecé a tener un poquito de desconfianza y tal vez un poco de temor, porque nunca le había oído hablar de esa manera, estaba totalmente enfurecido, hasta un poco de temor sentí, de



ahí empecé a cuidarme de él, pero cada vez que salíamos, él decía tú tienes que apoyarme a mí, que en un dos por tres yo le voy a derrocar; ahí yo voy asumir la alcaldía»(Entrevista: exfuncionario municipal 2003- sección a, 2009).

Es decir, el Teniente alcalde pretendía vacar al Alcalde, de allí que procedió a través de diversas estrategias, primero contaba para lograr su objetivo con las dificultades, limitaciones y errores cometidos por el Alcalde y todo esto facilitó la tarea emprendida logrando, a su vez, la credibilidad de un sector de la población; al respecto un ciudadano aimara dice:

«En sí, ha sido una pugna entre el Teniente alcalde y el Alcalde, el primero quería vacarle; y el otro no se dejaba, entonces el Teniente alcalde a la población enseñaba aquí está la prueba, quien instaba era el Teniente alcalde. Primero había pugna entre ellos y ambos no cedían y se han ido a la población y la población ha creído porque él estaba frente al pueblo y la masa; todos los días junto a ellos, con algunos regidores más se han agrupado» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

Una de las primeras estrategias de Sandoval fue la denuncia constante del supuesto mal uso de los fondos de la municipalidad y esto fue difundiéndose, generando descontento en la ciudadanía aimara; al respecto Degregori señala que Sandoval desplegó una estrategia en dos frentes:

«Por un lado, una **ofensiva legal**, a través de cartas, oficios y cartas notariales, enviadas entre el mes de mayo y junio de 2003. Agotada la vía administrativa, conjuntamente con los regidores de oposición realizaron una serie de denuncias de irregularidades ante la Fiscalía Provincial Mixta de Ilave en vía de prevención del delito y se hizo las investigaciones respectivas, dando razón a los denunciantes, señalando a Robles y a sus principales funcionarios como autores de delitos contra la administración pública en su modalidad de abuso de autoridad, concusión – colusión

desleal y peculado– malversación de fondos; delito contra la fe pública en su modalidad de falsificación de documentos; delito contra la administración de justicia en su modalidad de omisión de denuncia, de igual manera Sandoval inició una **ofensiva social**, hilvanando una alianza con los tenientes gobernadores de las comunidades» (Degregori, 2004:27).

Sandoval durante todo el año de gestión de Robles (2003) y parte del 2004, estuvo empeñado en desacreditar al Alcalde, así al finalizar el año 2003, cuando el Alcalde inauguró las obras ejecutadas por la municipalidad, él se dedicó a boicotear dicha actividad, además las visitas que realizaba a las comunidades rurales eran planificadas y estratégicas; tal aseveración la podemos encontrar en la siguiente declaración:

«En diciembre del 2003 se inauguró catorce obras en el primer año de gestión y él (Teniente alcalde) armó todo un boicot y no tenía el respaldo que quería tener, entonces empezó a salir a las comunidades y ahí es donde adquirió más credibilidad, porque bajaba con un fólter en la mano, diciendo que él tenía todos los documentos ahí y que podía demostrar que Fernando Robles y funcionarios estaban robando, pero nunca los mostró, porque él como regidor tenía acceso a Oficina de Planificación y Presupuesto (OPI) y tenía los gastos que se estaban ejecutando y eso es lo único que tenía»(Entrevista: exfuncionario municipal 2003 – sección a, 2009).

#### **b) Contrato de personal foráneo e incremento de sueldos exorbitantes**

Según los entrevistados, la contratación de personal de confianza en la municipalidad fue una de las causas de discusión entre el Alcalde y el Teniente alcalde, dado que ambos tenían el interés de contratar a sus allegados.

«El Alcalde quiso meter a sus allegados y el Teniente alcalde también, entonces no hubo comprensión» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

Robles comenzó a contratar al personal de confianza incrementando, a su vez, sus remuneraciones funcionariales desde un inicio de la gestión (ver cuadro N° 31). En contraste, en la provincia de El Collao el ingreso per cápita es de S/. 182.4 mensual y en el distrito de Ilave es de S/. 201.2 al mes (fuente: PNUD, 2009), entonces este hecho desató un escándalo entre los ciudadanos y ciudadanas, más aun cuando el incremento del «sueldo en por lo menos 150% de alrededor de S/. 1,000 mensuales a un promedio de S/. 2,500» (Degregori, 2004:24); es más, los incrementos de las remuneraciones han sido autorizados por resoluciones de la alcaldía.

**Cuadro N° 31**

**Remuneración de personal de confianza (2002 – 2003) en la Municipalidad provincial de El Collao**

Cargo	Remuneración	Remuneración
	2002 (S/.)	2003 (S/.)
<b>Director municipal</b>	1,091	2,600
<b>Asesor Legal</b>	1,196	2,300
<b>Contador municipal</b>	1,091	2,200
<b>Director de sistemas (3 meses)</b>	-----	2,500

**Fuente:** Degregori, 2004..

La práctica de solidaridad y el clientelismo con los amigos y familiares no es un fenómeno extraño en las instituciones públicas como en las municipalidades. «Como sabemos, nepotismo y amiguismo se han vuelto prácticas que atraviesan la política peruana, desde el vértice mismo del poder nacional hasta los gobiernos locales. El gobierno provincial de Ilave aparece como un notable ejemplo de estas prácticas» (Idem); asimismo, había presión de los militantes y seguidores para poder acceder a algún cargo en la municipalidad u obtener algún beneficio, en vista de que con ese interés y objetivo clientelar apoyaron en las campañas electorales bajo diversas modalidades.

Después del contrato de personal de confianza en la municipalidad, los regidores de la oposición denunciaron el hecho públicamente, aduciendo que son personal foráneo y con sueldos exorbitantes y que no ha sido aprobado en sesión del Consejo el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), ni el Presupuesto Analítico de Personal (PAP). Al respecto el exfuncionario municipal señala:

«Sandoval se ensañó conmigo y me quiso sacar a toda costa; me quiso sacar por la prensa, panfletos, en las sesiones de Consejo y en las reuniones de los domingos con el Alcalde, entonces me trató de boicotear por todo lado, diciendo que yo no era un profesional de la zona de Ilave, yo no hablaba aimara, me empezó a discriminar prácticamente»(Entrevista: exfuncionario municipal 2003 – sección a, 2009).

El tema de incremento de remuneraciones y el contrato de personal foráneo, en un contexto de pobreza y desempleo, resultó impactante para la ciudadanía aimara, dado que en esta zona es escaso el empleo remunerado; además la mayoría de los profesionales de la zona se encuentran desempleados y subempleados, en consecuencia se oponen al contrato de profesionales foráneos. Asimismo, la población aimara en un 69% se dedica a las actividades de agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

### **c) Ruptura de una relación: la percepción de maltrato**

Como a partir del 2003 se exigió el establecimiento de instancias de coordinación y concertación con la Sociedad Civil, esta situación implicaba todo un cambio en la gerencia de las municipalidades y, en efecto, el Alcalde, regidores y funcionarios de la municipalidad provincial de El Collao - Ilave tenían serias dificultades para acatar las nuevas reglas de manejo presupuestal, soslayando, a su vez, una serie de aspectos previos a la gestión, que en seguida mencionaremos:

1. Había articulación entre la autoridad edil y la población rural basada en la costumbre de transferencia de fondos de la municipalidad anualmente.

2. Promesas hechas durante las campañas electorales.
3. Plan de gobierno municipal establecido y presentado en las campañas electorales.

Al respecto, Moore dice que «las nuevas leyes siempre se aplican sobre configuraciones sociales existentes y portadoras de una compleja red de obligaciones vinculantes. Con frecuencia, la legislación es promulgada con el fin de transformar esas configuraciones existentes, pero es frecuente que estas sean más efectivas que las nuevas leyes» (Moore en Guevara, 2009:38); de manera que la población exigía el presupuesto anual ignorando los cambios de la política del gobierno local y las normas de manejo de presupuesto municipal a nivel nacional.

Paralelamente, el Alcalde interrumpió la costumbre de transferir anualmente recursos económicos y bienes a las comunidades rurales y centros poblados, debido a que quiso diferenciarse de la gestión anterior, además era parte de su política «el cambio» y fue su compromiso de la campaña electoral. La puesta en marcha de la propuesta de gestión municipal diferente no priorizaba la participación de la ciudadanía, es por eso que como un factor central de la ruptura de la relación institucionalizada el extinto Alcalde no consultó a los beneficiarios a pesar de que esta transferencia era considerada por los campesinos como un derecho muy valorado. Sin embargo, Robles no percibe esto e intempestivamente corta la transferencia de recursos y decide no dar ni dinero, ni animales e inicia su campaña de implementación de equipos audiovisuales, además, todo esto se realiza de manera rápida propiciando desconcierto y desavenencia entre los pobladores.

Asimismo, los entrevistados han mencionado que en la municipalidad había maltrato, no solo por parte del Alcalde, también por el personal contratado; incluso, indican que en una ocasión se le exigió al Alcalde que renovara su personal y el Alcalde

se comprometió a despedirlos, pero no lo cumplió; al respecto tenemos las declaraciones siguientes:

«...el pueblo exigía la destitución de sus trabajadores y no daba ese gesto el Alcalde, seguramente ellos le decían que nosotros te respaldamos y al pedido del pueblo no respondió» (Entrevista: exregidor (2003-2004) –sección a, 2009).

---

«...en sí él tenía el apoyo de todos los profesionales que empezábamos a trabajar con él...»(Entrevista: exregidor 2003 – sección a, 2009).

La percepción de maltrato se correlacionaba con el estilo de gobierno de Robles Callomamani, como con la arrogancia del personal contratado, pero el Alcalde le restaba importancia a esta situación y actuaba a la defensiva, por ende uno de los ciudadanos entrevistados señala lo siguiente:

«Cuando se le decía que cambie a esos trabajadores no escuchaba, en otras palabras su palabra era ley y en forma dictatorial, entonces chocaba con la población» (Entrevista: ciudadano aimara– Ilave – sección b, 2009).

Con la elección de la autoridad edil obviamente iban a darse algunos cambios, pero en este caso el cambio ha sido radical. Para Pajuelo «durante el segundo periodo de gobierno municipal de Ticona (1996-1998), una vez conformada la agrupación independiente FIJO, la relación establecida con los centros poblados y comunidades a través de sus autoridades, parece sustentarse en relaciones extremadamente personalizadas entre el Alcalde y las autoridades rurales, con evidentes rasgos clientelistas»(2005:82). Las autoridades campesinas que se entrevistaban con Ticona calificaban la atención como buena, en cambio con Robles no, porque, según indican, actuaba prepotentemente y cuando realizaban algún pedido o proyecto, les solicitaba sustento legal para atender sus pedidos, entonces, las autoridades de las comunidades

rurales se sentían ofendidas y maltratadas. En relación a esto, podemos observar las siguientes entrevistas:

«...realmente para mí había buena atención del municipio, porque Gregorio me recibía en su oficina, bueno siempre yo pasaba con toda confianza ¿no? entonces yo decía señor Alcalde, yo necesito esta cantidad de cemento para la construcción del municipio, ¿podría ser 100 bolsas? Y él me dijo ven y yo te voy a entregar, entonces su palabra era bien cumplido...»(Tomada del texto de Pajuelo. Entrevistado: Cesar Rubén Pari, alcalde de la municipalidad del Centro Poblado de Sullcacatura II).

---

«El Alcalde no promovía la participación del pueblo, más actuaba prepotentemente diciendo que ¿en qué parte de la ley o reglamento o norma dice que viene en nombre de la comunidad el presupuesto?, así respondía a los comuneros; y los comuneros respondían; bueno algún día llegarás a la comunidad»(Entrevista: exregidor 2003 – sección a, 2009).

---

«... con el alcalde Robles hemos sufrido bastante con el trámite, no era rápido, teníamos que venir todos los días a hacer la gestión. Nos ha hecho perder tiempo, nos ha quitado tiempo, igual a las comunidades, a las parcialidades, a los tenientes, todos sufriendo aquí; a nosotros el gasto nos recarga pidiendo para pasaje a diario, almuerzo que gastábamos, con todo eso nos ha hecho mal el alcalde Robles» (Entrevista tomada del texto de Pajuelo, 96).

#### **d) Ilegitimidad social del Alcalde y crisis de los partidos políticos**

El extinto alcalde Fernando Robles Callomamani no solamente requería de legitimidad legal sino también de legitimidad social basada en las costumbres dadas las condiciones semitradicionales para mantenerse en el poder local. Es así que para Max Weber, la legitimidad se concibe como la base esencial e indispensable de la autoridad política; sin embargo, el extinto Alcalde solo se sostenía en la supuesta legitimidad

legal-racional, pero esta no fue suficiente para mantenerse en el cargo, pues no contaba con el apoyo del pueblo. Al respecto un exregidor y un ciudadano manifiestan:

«...él decía me ampara la ley, por nepotismo no me sacan, por corrupción no me sacan, por ningún motivo, solo matándome»(Entrevista: exregidor 2003 –sección a, 2009).

---

«...él decía la ley me permite continuar, por lo tanto, tengo que seguir gobernando, pero la situación dominó. Y no le permitieron llegar a la municipalidad, porque tomaron el local municipal, el puente internacional, por otro lado, el Alcalde se resistía y decía que a él no lo podía vacar nadie»(Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

Para Alberto Adrianzén la «relación entre representantes y representados, más aun si se entiende que esta relación se constituye interactivamente mediante la comunicación política en un espacio público, el cual requiere ser recreado y legitimado constantemente por la autoridad» (2004:89). Pero en el caso Ilave no fue recreado ni legitimado.

En los escenarios locales las organizaciones partidarias son inexistentes, solo se ve la presencia de diversidad de organizaciones políticas durante los procesos electorales, pasadas las elecciones automáticamente desaparecen. «En su gran mayoría se trata de listas locales, “independientes”, armada *ad hoc* por algún aspirante. También en Puno, la política gira alrededor de personas, no de programas e instituciones; no hay afiliaciones políticas consolidadas ni estabilidad asociativa. Se refleja así el derrumbe de los partidos políticos en el país, cuya ocasional presencia en las elecciones municipales tampoco se debe a adhesiones ideológicas, sino a una lógica de franquicias» (Huber, 2008:224). En Ilave debido a la multiplicidad de candidatos hubo dispersión de votos, razón por la cual, Robles en las elecciones provinciales del 2002 solo logró alcanzar el 21.65% de votos de un total de 11 candidatos a la alcaldía (ver cuadro N° 32). Obviamente esto no le



garantizaba legitimidad social ni soporte político, más aun cuando en los distritos de Conduriri, Santa Rosa y Capaso estaban siendo gobernados por otras fuerzas políticas (ver cuadro N° 33).

**Cuadro N° 32**

**Resultado de las elecciones provinciales de El Collao – 2002**

<b>Candidatos</b>	<b>Agrupación Política</b>	<b>N° Votos</b>	<b>%</b>
<b>1. Cirilo F. Robles Callomamani</b>	Unión Regional para el Desarrollo	7,822	21.65
<b>2. Mario L. Vargas Jilaja</b>	Somos Perú	4,811	13.32
<b>3. Jaime E. Velasco Coaquira</b>	Frente Unido Progresista	4,519	12.51
<b>4. Israel Rubén de Celis Atencio</b>	Mov. Amplio País Unido	3,834	10.61
<b>5. Raúl Ayunta Alanoca</b>	Mov. por la Aut. Reg. Quechua Aymara	3,733	10.33
<b>6. José Antonio Maquera Atencio</b>	Poder Democrático Regional	3,219	8.91
<b>7. Ceveriano Ramos Maquera</b>	Mov. Ind. Democrático de los Aymaras	3,046	8.43
<b>8. Rubén Laura Chura</b>	Acción Popular	1,394	3.86
<b>9. Eloy J. Calli Pacohuanaco</b>	Perú Posible	1,325	3.67
<b>10. Martín N. Huilahuaña Madani</b>	Renacimiento Andino	1,310	3.63
<b>11. Leónidas Gómez Arce</b>	Partido Aprista Peruano	1,117	3.09
<b>Total</b>		<b>36,130</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Meléndez, 2004.

**Cuadro N° 33**

**Alcaldes distritales de la Provincia de El Collao elegidos el 2002**

<b>Distrito</b>	<b>Alcalde</b>	<b>Partido Político</b>	<b>Porcentaje</b>	<b>N° de votos</b>
<b>Capazo</b>	Victoriano Uruchi...	Mov. Ind. Dem. de los Aymaras	34.66%	139
<b>Conduriri</b>	Florentino Montalico	Somos Perú	34.11%	351
<b>Pilcuyo</b>	Alberto Catachura	Unión Regional para el Desarrollo	22.41%	1,849
<b>Santa Rosa</b>	Cruz Chambi	MARQA	27.69%	491

Fuente: Meléndez, 2004.

Si no hay sistema de partidos políticos sólidos e institucionalizados, entonces los que aparecen como “partidos” no cumplen con su papel en el sistema democrático, como es la canalización de las demandas e intereses de la ciudadanía. Y debido a la crisis de representación, los ciudadanos de Ilave no buscaron canalizar sus demandas a través de sus solo formales representantes sino buscaron establecer una relación directa con el gobierno municipal. Estos hechos en Ilave demuestran la calidad de democracia y la legitimidad de la misma en el Perú.

### **5.2.2. Inicio del conflicto**

El viernes 2 de abril a las 10:00horas, la gente empezó a concentrarse en la Plaza de Armas y se inició el informe con 60 minutos de retraso. Los pobladores querían saber el destino de 8 millones de soles que recibió la municipalidad por concepto de Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) el año 2003, pues las principales promesas electorales como la pavimentación de la carretera Ilave-Mazocruz, refacción del mercado, la reparación del Puente Viejo, entre otros, hasta esa fecha no habían sido ejecutadas.

El Alcalde y los funcionarios informaron a los asistentes sobre la situación de cómo se encontraban las arcas de la municipalidad al asumir la gestión y el destino del presupuesto municipal durante el año 2003. Mencionó los siguientes gastos:

- Asfaltado de la carretera Ilave Mazo Cruz por la suma de S/. 240,000.
- Estudio del Mercado Central por S/. 30,000.
- Mejoramiento de rehabilitación de la Plaza de Armas por S/. 10,000.
- Estudio de catastro urbano por la suma de S/. 60,000.
- Estudio de puentes carrozables, Vizcachani, Jalluyo, Santa Rosa, López por la suma de S/. 90,000.

- Apoyo de desastres naturales por la suma de S/. 50,000.
- Promoción y Desarrollo Micro empresarial Rural Urbano por S/. 80,000.
- Instalación de infraestructura de agua y desagüe por S/. 30,000.
- Estudio de promoción de comercialización de productos de exportación por la suma de S/. 20,000.
- Mantenimiento de Parques y Jardines por la suma de S/ 30,000.
- Control del aprovechamiento de calidad ambiental por la suma de S/. 90,200.
- Programa de Extensión Universitaria por S/. 183,000.
- Implementación de Laboratorio de la Extensión Universitaria por la suma de S/. 40,000 (Fuente: Archivo Oficina Defensorial de Puno - 2004).

Terminada la exposición, se invitó a participar a los regidores. Según los entrevistados el exregidor Sandoval dio el contrainforme y cuando recién se iniciaba la rueda de preguntas del público asistente al diálogo, se interrumpió a causa del corte de energía eléctrica y se produjeron trifulcas y protestas e, inmediatamente, se suscitó el enfrentamiento entre los dos bandos, mientras el Alcalde y los funcionarios se retiraron con la ayuda de la Policía Nacional al local municipal. No obstante, el exfuncionario entrevistado culpabiliza del disturbio al ex Teniente alcalde declarando lo siguiente:

«Él es el que inició, pues el contrainforme, nosotros estábamos dando, el Alcalde y todos los profesionales, los responsables de cada área personalmente teníamos que darlos y estábamos llanos a responder cualquier pregunta y ahí es donde empezó todo, empezaron los disturbios» (Entrevista: exfuncionario – 2003 – sección a, 2009).

Momentos después del enfrentamiento, los asistentes se congregaron en un sector de la plaza e inesperadamente alrededor de setenta personas ingresaron raudamente a la Plaza de Armas con chicotes, palos y piedras arremetiendo contra los asistentes que aún

permanecían en la plaza; el enfrentamiento dejó once heridos, entre ellos dos indefensos menores de 11 y 3 años de edad; ante ese hecho reaccionaron y enfrentaron a los agresores quitándoles sus «armas», logrando su retirada. Las armas rústicas fueron juntadas y quemadas frente al frontis del palacio municipal y pidieron a viva voz la vacancia de la autoridad edil (*Correo*, 04.04.04). Según los entrevistados, hubo varios enfrentamientos hasta que finalmente tomaron el frontis exterior del palacio municipal. Mientras tanto, el Alcalde salió por la puerta trasera con dirección a la ciudad de Puno.

El enfrentamiento en la Plaza de Armas entre los partidarios y opositores del alcalde Robles ha marcado el punto neurálgico del inicio de las movilizaciones. En todo caso, al conflicto interno se sumaron las organizaciones sociales, sobre todo las comunidades campesinas aimaras, por eso, el conflicto ya no era solo entre las dos facciones sino se involucraron otros actores.

### **5.2.3. Escalamiento del conflicto**

#### **Toma del local municipal y pedido de vacancia del Alcalde**

Al siguiente día del enfrentamiento, el sábado 3 de abril, se concentran las diferentes organizaciones sociales en la Plaza Armas de Ilave y conforman el Comité de Lucha Ampliada y «deciden paralizar sus actividades, exigiendo una investigación sobre las agresiones recibidas por parte de los seguidores del Alcalde. Miles de personas se plantan en el frontis del municipio y realizan una olla común» (Degregori, 2004:30). Incluso, el mencionado enfrentamiento generó el pedido de vacancia del Alcalde y, frente a la búsqueda de información transparente, los pobladores tomaron el local municipal alegando cuidar la respectiva documentación archivada en la municipalidad, como se puede apreciar en la siguiente declaración de un alcalde de Centro Poblado:

«El Alcalde se ha retirado, se ha escapado. La gente que no le eche la culpa al poblador, cuidado. Porque si una noche se vacía cualquier cosa nos puede echar la culpa. Entonces han salido las comunidades, toditos, por obligación, a cuidar el municipio, no es que se ha tomado, se está cuidando nada más. Si se pierden los papeles cualquier cosa puede pasar...» (Pajuelo, 16).

### **Concentración e inicio de la movilización por turnos de la población rural**

El domingo 4 de abril se congregaron los comerciantes, pobladores de las comunidades rurales de la zona alta, media, baja y barrios para la respectiva movilización en contra del alcalde Robles y planificaron medidas de lucha; también se organizaron aproximadamente 45 comunidades campesinas y se distribuyeron por turnos la vigilancia del local municipal. Los manifestantes bloquearon la carretera Puno-Desaguadero y el Puente Internacional, no obstante el día domingo en Ilave se concentra la población para realizar el intercambio comercial-ferial, pero en esa ocasión fue para hacer movilizaciones.

El pedido de los manifestantes fue la presencia del Alcalde, por lo tanto, los regidores de la oposición presentaron al secretario de la municipalidad una solicitud dirigida al Alcalde, pidiendo una sesión extraordinaria a horas 12:30 p.m., con la siguiente agenda:

- Declaración de emergencia de la municipalidad
- Vacancia del Alcalde
- Situación de trabajadores municipales

Sin embargo, el Alcalde no accedió a dicho pedido y la población esperó al Alcalde hasta las 2:30 pm.; al día siguiente un dirigente por vía telefónica declaró al diario *Los Andes*: **«no quiere escuchar nuestras demandas el señor Robles, mucho menos quiere dialogar con el pueblo que lo eligió como Alcalde»** (05.04.04).

#### **5.2.4. Formación de Comisión Mediadora y búsqueda de solución al conflicto**

Debido a la continuidad del conflicto, en Puno se reunieron los representantes de la Oficina Defensorial de Puno, el Coronel de la PNP, Jefe Departamental de la Policía, el Fiscal Decano de Puno, la Fiscal de Prevención del Delito y el alcalde Fernando Robles Callomamani, quienes vieron por conveniente formar una comisión mediadora, a su vez, sugirieron la participación de la Iglesia en la mencionada comisión para la respectiva intermediación.

Mientras tanto, el martes 06 de abril llega a la Oficina Defensorial de Puno, un Memorial dirigido al señor Defensor del Pueblo, Lima, cuyos suscritos fueron: Frente Único de Defensa de los Intereses de Ilave (FUDI), Federación Provincial de campesinos (FPCC), Central Única de Barrios de Ilave (CUBUI), Frente Único de Comerciantes (FUC), SUTEP Ilave, Estudiantes de la Extensión Universitaria Ancasaya (UNA), Asociación de Centros Poblados (AMUCEP), Juventud de aimaras, Tenientes Gobernadores, Autoridades Comunales y el pueblo en general de la Provincia El Collao, Ilave (Fuente: Archivo de Oficina Defensorial de Puno – 2004), en donde se informa de manera detallada los hechos del enfrentamiento del 2 de abril y se realizan una serie de denuncias, por lo que pidieron la destitución del Alcalde(ver anexo 01).

La comisión mediadora conformada por la Prefectura de Puno, la Defensoría de Pueblo y la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Juli se constituyeron el 06 de abril a la Plaza de Armas de Ilave y se reunieron alrededor de cinco mil personas, quienes por medio de sus dirigentes sustentaron sus reclamos y pidieron la renuncia del Alcalde, pero la comisión les explicó que el cargo de alcaldía era irrenunciable y pusieron en conocimiento las vías legales para vacar al Alcalde, quedando, a su vez, en reunirse con el cuestionado Alcalde. Cabe aclarar que a la comisión mediadora se fueron integrando posteriormente otras autoridades en el proceso de intermediación.

La comisión, una vez reunida y luego de haber llegado a un acuerdo con el Alcalde el 7 de abril, inmediatamente se dirigió a Ilave donde informaron a los manifestantes, indicando que la mencionada autoridad había aceptado solicitar licencia temporal de su cargo por treinta días mientras se realiza la evaluación por la Contraloría General de la República y también informaron que el Alcalde pidió que el Teniente alcalde haga lo mismo; pero los manifestantes rechazaron dicho acuerdo. Asimismo, ese día los reservistas (Etnocaceristas) ilaveños con indumentaria y postura militar arribaron a la ciudad de Puno, lanzando declaraciones y arengas; fueron, desde todo un despliegue paramilitar, a buscar a Cirilo Robles y expresaron textualmente: **«venimos a buscarte y no regresaremos hasta llevarte a que rindas cuenta a tu pueblo»**, además, varios de los líderes advirtieron a través de una cadena radial, que a partir de esa fecha bloquearán totalmente el Puente Internacional: **«soldaremos el puente sino viene Cirilo»** (*Correo*. 08.04.04).

La comisión mediadora había logrado formalizar el acuerdo de la primera reunión realizado con el alcalde Robles bajo una Resolución de Alcaldía N° 278 – 2004 - MPCÍ, en la mencionada resolución pide el Alcalde licencia por treinta días y designa el cargo al regidor de la oposición Teófilo Contreras y dicha autoridad declaró: **«todo está sujeto necesariamente a la decisión de la población, a sus dirigentes y a su comité de lucha. La decisión lo toma de todas maneras el pueblo, nosotros no somos los que enrumamos este movimiento»**(*Los Andes*, 13.04.04). Luego, la comisión mediadora plantea su retiro porque se hacía difícil la mediación y advierten que existía un manoseo político de la situación, además exhortaron al Alcalde, a los regidores, a los dirigentes, a los representantes de organizaciones sociales y a las autoridades en su conjunto, a dejar de lado intereses políticos y personales; además dijeron que los únicos llamados a resolver la crisis, son los regidores, debido a que ellos tienen las funciones y competencias estipuladas por la ley. Después del retiro de la comisión mediadora algunos de los manifestantes a viva voz solicitaron el arribo de una Comisión de Alto Nivel, en la que participen los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), buscándose así una salida legal para retirar de su cargo de Alcalde a Robles.

### 5.2.5. Anuncio de la «nación aimara» y el entrampamiento del conflicto

Aproximadamente llegaron dos mil personas en marcha de sacrificio el 15 de abril a la ciudad de Puno, primero se concentraron en la zona de Salcedo y luego ingresaron a la Plaza de Armas de Puno. Allí realizaron un mitin exigiendo la destitución del Alcalde. En la marcha se anunció el supuesto despertar de la «nación aimara», y en ese contexto uno de los dirigentes pidió que se dé el cumplimiento de las disposiciones del convenio 169 de la OIT que estipula la autodeterminación de los pueblos originarios, igualmente, en las protestas se han producido discursos con connotaciones raciales. También, se tomó como referencia al conflicto en el vecino país de Bolivia en el que se obligó al presidente de la República Sánchez de Lozada a renunciar y dijo una manifestante **«nosotros seremos el segundo ejemplo»** (*Los Andes*, 16.04.04).

Ante la exigencia continua de los huelguistas de vacancia del Alcalde, los regidores de la oposición buscaron vacar al Alcalde bajo la modalidad de incomparecencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas (artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades); la primera sesión de Consejo extraordinario la llevaron a cabo el miércoles, 14 de abril en la Plaza de Armas de Ilave y también se acordó realizar las siguientes sesiones para declarar la vacancia del Alcalde. Sin embargo, el Alcalde después de haber solicitado licencia estuvo al tanto de las reuniones y se pronunció en contra de las sesiones, pues envió a los regidores de oposición cartas notariales comunicándoles que las sesiones que estaban realizando eran ilegales y que se tendrían que someter a la sanción de ley.

Cuando llega a Ilave el congresista por Puno Jonhy Lescano Ancieta, llama al pueblo al restablecimiento de la paz y la tranquilidad, incluso, indicó que los dirigentes y la población lograron entender que la manera de separar del cargo al Alcalde es mediante los conductos regulares y dijo: **«yo llegué a Ilave para explicarles que la única vía para retirar a su autoridad era que el Teniente alcalde y los regidores son los llamados a resolver la situación del Alcalde»** (*Correo*, 14.04.04). Los



manifestantes estaban decididos a continuar con su lucha hasta lograr la vacancia del Alcalde, en consecuencia, uno de los manifestantes declaró: **«definitivamente no vamos a dar ningún paso atrás»**(*Los Andes*, 16.04.04). Esta declaración indica el rechazo definitivo de la continuidad del Alcalde en el cargo.

Después de realizar varias reuniones los regidores de la oposición, finalmente, convocan a una sesión de Consejo de carácter ordinario para el 28 de abril (siendo el punto principal de la agenda la situación legal del alcalde Robles Callomamani) en el frontis de la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, y con esta sesión se determinaría la vacancia del Alcalde. «Entretanto, los ánimos de la población se caldeaban debido a la prolongación del conflicto. El cansancio y el sacrificio de los manifestantes, sobre todo de los campesinos encargados rotativamente de mantener tomada la plaza, se revela en la mayor irritación y la intensificación del reclamo de ser respetados» (Pajuelo, 2009:227).

#### **5.2.6. Asesinato del Alcalde e intervención de la Comisión de Alto Nivel**

El 25 de abril los allegados, regidores gobiernistas y el alcalde Fernando Robles se reunieron en su domicilio en Puno y acordaron que no fuera a Ilave el señor Alcalde, pero sin medir las consecuencias el extinto Alcalde convocó, mediante cartas notariales, a una Sesión Ordinaria a los nueve regidores para el 26 de abril a las 8:00 a.m., en su vivienda en Ilave. Al respecto uno de los exfuncionarios señaló:

«Un día antes de que se suscitara los hechos, hemos estado hasta las ocho de la noche en reunión y se acordó que era mejor que no vaya, porque si no iba definitivamente lo iban vacar y todo eso, y se quedó en que eso no procedería, entonces él dijo ya no iré. Yo no sé qué pasó desde las 8 p.m. hasta 5 a.m. que él se apareció a dirigir la sesión de Consejo en Ilave. Él siempre fue bien persistente, decía: “yo que no he hecho nada y no tenía por qué retirarme así, y si yo me retiro me voy, pero cumpliendo mi gestión como debe ser”» (Entrevista: exfuncionario (2003- 2004), sección a, 2009).

El 26 de abril a las 8:00 a.m., el alcalde Fernando Robles Callomamani y los regidores del Movimiento Unión Regional, Edgar Segundo Lope, Juan Mamani y Melania Flores se disponían a iniciar la Sesión Ordinaria programada en jirón Los Incas en Ilave, mientras los detractores, en contados segundos, sitiaron la vivienda del Alcalde y empezaron a tirar piedras y de igual modo también respondieron los que se encontraban en la vivienda, pero la multitud que acechaba hizo que se refugiaran en la vivienda contigua del vecino. Aproximadamente a las 10:00 a.m. la turba enardecida ingresó a la vivienda del vecino donde se refugió y sacaron a rastras al Alcalde y concejales y les hicieron pasar en un “callejón oscuro” propinándoles golpes, luego fueron conducidos con dirección a la Plaza de Armas. Al respecto el exregidor señala:

«Yo cuando pasé callejón oscuro me defendí con mis manos, porque de joven practicaba boxeo, eso es lo que me ayudó a no quedar inconsciente, porque yo vi que los demás han salido casi inconscientes» (Entrevista: exregidor (2003-2004), sección a, 2009).

En ese instante, las llamadas se producen incesantemente y los del Ministerio Público se dirigieron al domicilio del Alcalde con el objetivo de establecer un diálogo, pero fueron agredidos con piedras y otros objetos contundentes, sin lograr ningún diálogo, ante lo cual se refugiaron en el hospital de Ilave y posteriormente en la comisaría. Mientras, las llamadas continuaron, una madre de familia horrorizada llamó por vía telefónica a una radio emisora, con voz entrecortada y dijo «...**el Alcalde está moribundo en la Plaza de Armas, está ensangrentado...**» (*Los Andes* 27.04.04), también la esposa del alcalde Marina Cutipa solicitaba la presencia de una comisión de diálogo para que pueda intervenir. Ante la llamada y al pedido de la esposa se conforma la segunda comisión humanitaria en Puno, conformado por el prefecto y representantes de la Iglesia católica y adventista, quienes se dirigieron a Ilave en horas de la tarde e intentaron ingresar a la Plaza de Armas, sin embargo al igual que la primera comitiva fueron repelidos y se refugiaron en la parroquia. Horas más tarde, en el frontis de la municipalidad el Alcalde fallece producto de politraumatismos, de cuchilladas y su cadáver es llevado por la turba al Puente Viejo; a las 13:50 horas el Fiscal de Ilave en representación del Ministerio Público certifica la muerte del Alcalde en la morgue del

hospital de apoyo de El Collao, Ilave. Luego a las 19:30 aproximadamente se inicia el ataque multitudinario a la Comisaría de Ilave, reclamando la libertad de varios detenidos implicados en el asesinato del Alcalde y finalmente logrando su objetivo y frente a todos aquellos tan pavorosos acontecimientos la policía solo permanecía acuartelada en la comisaría sin hacer nada al respecto, no obstante lo trágico de la situación. Mas tarde, la policía logró capturar a varios autores directos del crimen quienes, como se observó, fueron posteriormente liberados.

Después de la muerte del Alcalde, el 27 de abril ante la Oficina Defensorial de Puno, los regidores Alberto Sandoval, Encarnación Mamani, Teófilo Contreras y Marcelino Aguilar presentaron una carta de renuncia irrevocable de sus cargos de regidor(ver anexo 02),mencionando que el control de los manifestantes no ha estado bajo su dirección, a su vez, indicaron que se someten a las investigaciones sin ninguna restricción ni distinción y que se ponen a disposición de la autoridad de la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial y de toda autoridad en cuanto tenga competencia en la investigación (Archivo de la Oficina Defensorial de Puno, 2004).

La Comisión de Alto Nivel, presidida por señor Luis Thais presidente del Consejo Nacional de la Descentralización (CND) en ese entonces, arribó de Lima a Puno el mismo día del suceso en horas de la noche; después de varias reuniones en la Vicaría de Juli y en el hotel de Isla Estévez de Puno con dirigentes y regidores de la oposición, se dirigieron a Ilave el 28 de abril y se reunieron allí con los manifestantes y buscaron alternativas de solución al conflicto; primero se planteó la realización de elecciones complementarias, y segundo, que sea asumido el gobierno local por los nueve regidores, finalmente optaron por la segunda propuesta. Pero ese acuerdo tomado no era procedente, porque los regidores de la oposición estaban poniendo a disposición sus cargos, además estaban implicados en el crimen del Alcalde e incluso los regidores heridos que se encontraban en el hospital de Puno, no estaban presentes en el acuerdo tomado. **«Nos han amenazado de muerte y por eso no pensamos regresar...no entendemos cómo el señor Thais se prestó a semejante acuerdo, nosotros no hemos sido consultados si aprobamos o no al nuevo Alcalde, por lo tanto la decisión**

**carece de validez»**dijo haciendo alusión al acuerdo, Melania Flores exregidora gobiernista (*Correo*. 02.05.04).

Mientras tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Manuel Sánchez Palacios, aclaró que la Ley Orgánica de Municipalidades no contempla la renuncia al cargo de regidor. Asimismo, Gastón Soto Ballena, miembro titular del JNE aclaró que **«Sandoval es parte del Consejo Municipal. El hecho de que como consecuencia de la aplicación de la Ley, acceda al cargo no le da patente de corzo para que no pueda ser procesado penalmente»** (*Los Andes*, 03.05.04).

Después de la llegada de la Comisión de Alto Nivel, hubo divisionismo entre los que estaban a favor de llevar nuevas elecciones y los que estaban de acuerdo con la continuidad de los nueve regidores en el gobierno local. Cerca de doscientas comunidades campesinas exigieron nuevas elecciones rechazando el acta suscrita por la CAN, mientras tanto la Municipalidad permanecía cerrada en perjuicio de la población usuaria, pues se vieron impedidos de contraer matrimonio, inscribir a sus hijos recién nacidos, realizar trámites de defunción, etc.

Ante la denuncia de la viuda a los detractores y las investigaciones policiales y judiciales realizadas durante ocho días, tiempo en que se recogió abundante prueba documental, testimonial, pericial, etc., se hizo posible la detención definitiva del señor Alberto Sandoval y otros acusados como instigadores, Teófilo Contreras Encinas, Marcelino Aguilar Arce, Encarnación Mamani Huanacuni, Galo Henry Medina Cabrera (propietario de radio San Miguel, Ilave), Rogelio Cotrado (propietario de radio Armonía, Ilave) y Gilberto Olivera Quispe, a quienes se les recluyó en el penal La Capilla de Juliaca. La respuesta de los manifestantes no se dejó esperar; pues anunciaron 72 horas de paro (10, 11 y 12 de mayo) exigiendo a su vez, la liberación de los implicados, inclusive pidieron que se deje sin efecto la orden de detención preventiva que pesaba en contra de 41 personas aproximadamente.

El 8 de mayo, el congresista Jonhy Lescano advirtió que si en breve plazo no se resuelve el problema de Ilave, podría agudizarse la violencia, por lo que solicitó la conformación de una comisión integrada por ministros y representantes del Jurado Nacional de Elecciones, para que den solución en forma definitiva al conflicto y declaró: **«los sucesos de Ilave pudieron evitarse con la presencia de la Comisión que viajó a Ilave anteriormente. Hoy estamos advertidos que si no hay autoridades en Ilave y se mantienen los problemas surgidos con la vacancia de la alcaldía y la detención de quienes tendrían que sucederlo, el reclamo de la población podría repetirse»**(*Correo*. 08.05.04).

Después de haberse cumplido las 72 horas de paro con resguardo de más de 500 efectivos del orden, los huelguistas al no encontrar respuestas a sus reclamos, dieron una tregua de cuatro días al gobierno central, para que liberen a sus dirigentes y así iniciar el diálogo. De igual manera, solicitaron sanción a los responsables de la muerte de seis personas que perecieron durante la movilización, principalmente de David Ichuta Quispe, joven autor de las pintas y caricaturas que ridiculizaba al extinto Alcalde, que fue asesinado por desconocidos, pero se atribuía la responsabilidad de su muerte al alcalde Robles y su entorno.

El 14 de mayo, el poder ejecutivo constituye la Comisión de Alto Nivel para promover acciones que permitan solucionar conflictos pendientes en los gobiernos locales del departamento de Puno, bajo la Resolución Suprema N° 170-2004-PCM y estuvo conformada por:

- El Ministro del Interior
- Un representante del Ministerio de Justicia
- Dos Viceministros designados por Resolución Suprema
- Dos representantes del Consejo Nacional de Descentralización
- Las autoridades electas, de carácter regional y local del departamento de Puno (diario oficial *El Peruano* 15.04.04).

El domingo 16 de mayo, la Comisión de Alto Nivel llegó a Puno y se reunieron en el hotel de Isla Esteves; la comisión estaba presidida por Javier Reátegui Roselló y la comitiva aimara constituida por 17 personas de diferentes zonas y sectores de la población y acompañada por el abogado defensor Edmundo Inga Garay. Asimismo, la comitiva aimara invitó a la comisión a que vaya a la ciudad de Ilave para desde allí gestionar el conflicto. Pero la Comisión retornó a Lima sin acudir a la invitación y sin emprender diálogo alguno con la población ilaveña, situación que generó malestar en un gran sector de la población movilizada.

El 25 de mayo llegan a Ilave más efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Fuerza Armada, para reforzar a las fuerzas del orden en la Provincia, luego que estas fueron repelidas y arremetidas por los comuneros en las jornadas de protesta. También ese día llegó la nueva Comisión de Alto Nivel y en las horas de la noche instalaron la denominada «Mesa de Diálogo» con los dirigentes de las comunidades de Ilave en el hotel de Isla Estévez, presidida por el viceministro del Interior Richard Díaz. Después de la segunda ronda de negociaciones se dieron diez días de tregua al gobierno central, para que en ese lapso viabilice y resuelva los reclamos planteados por la comisión negociadora.

El 3 de junio se instaló la Mesa de Diálogo en la provincia de El Collao, Ilave y en esta primera rueda de negociaciones participaron nueve comuneros de la Zona de Lago, nueve de la Zona Media, once de la Zona Alta y trece dirigentes de barrios y organizaciones, y a su vez, más de diez miembros de la Comisión de Alto Nivel; y llegaron a los siguientes acuerdos:

1. El Jurado Nacional de Elecciones se instale en Ilave para definir los preparativos de los comicios municipales del 17 de octubre donde se tiene previsto elegir Alcalde y cuatro regidores.

2. Instar al Poder Judicial que acelere la solicitud de cambio de mandato de detención por comparecencia a los implicados en el asesinato del extinto alcalde Robles.
3. Pedido del traslado de presos que se encuentran en el penal de la ciudad de Chiclayo hacia el penal La Capilla de Juliaca.
4. Mecanismos de control para la gestión anterior, actual y futura del gobierno local de Ilave.
5. Desarrollar una agenda económica y social para el desarrollo de la provincia: obras de infraestructura y desarrollo social a través de los programas PRONAA, FONCODES, A Trabajar Urbano y Rural, PRONAMACH y otros.
6. Reanudación inmediata de los servicios básicos del municipio e instalación inmediata del Consejo provincial (*Correo*, 04.06.04).

Pero, cabe recalcar, que los de la comisión negociadora de la provincia de El Collao Ilave, solicitaron celeridad a sus pedidos, sobre todo respecto a la variación del mandato de detención por el de comparecencia, caso contrario amenazaron con romper el diálogo. Al respecto Richard Díaz, viceministro del Interior, aclaró que el Poder Judicial es una instancia autónoma, por lo mismo, el Poder Ejecutivo no tiene injerencias en las decisiones que tome esa instancia, pero que se desarrollarán los procesos dentro de los plazos establecidos con celeridad.

### 5.2.7. Alcaldes designados por el Jurado Nacional de Elecciones durante el conflicto

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió el 9 de mayo la Resolución N°077-2004-JNE para recomponer el Consejo de la Municipalidad Provincial de El Collao y fue designado como Alcalde el tercer regidor Arnaldo Chambilla Maquera (ver cuadro N° 34) como sucesor del Alcalde asesinado, pero este por su estado de salud y por temor decidió renunciar al cargo. Tampoco la población movilizada estaba de acuerdo con su designación, tal como se puede observar en la pancarta del registro fotográfico.

#### Registro fotográfico 2: manifestantes con pancarta en contra de la designación de Arnaldo Chambilla Maquera



Fuente: (Diario, *Correo* 13.04.2004).



**Cuadro N° 34**  
**Primera Recomposición de JNE al Consejo Provincial El Collao - Ilave**

**Resolución N° 077-2004-JNE (9 de mayo)**

<b>Título</b>	<b>Consejo Provincial El Collao – Ilave</b>	<b>Partido</b>	<b>Cargo</b>	<b>En reemplazo</b>
<b>Alcalde</b>	Arnaldo Chambilla Maquera	URPD	2 <sup>do</sup> Regidor	
<b>Regidores</b>	Ramón Arias Santos	URPD	1 <sup>er</sup> Regidor accesitario	Cirilo Robles
	Gertrudes Yanqui Mamani	URPD	2 <sup>do</sup> Regidor accesitario	Alberto Sandoval
	María Nora Nina Ramos	URPD	3 <sup>er</sup> Regidor accesitario	Teófilo Contreras
	Juan Mamani Mamani	URPD	3 <sup>er</sup> Regidor	
	Melania Flores Yujra	URPD	4 <sup>to</sup> Regidor	
	Edgar Segundo Lope Condori	URPD	5 <sup>to</sup> Regidor	
	Gilberto Olivera Quispe	SP	6 <sup>to</sup> Regidor	
	Elías Rizalaso Incacutipa	FUP	Regidor accesitario	Marcelino Aguilar
	Encarnación Mamani Huanacuni	MAPU	8 <sup>vo</sup> Regidor	

**Fuente:** Meléndez Carlos (2004).

Al no prosperar la primera recomposición del Consejo Municipal el JNE, con fecha 23 de mayo de 2004, emite otra Resolución N° 098-2004-JNE, donde se solicita al señor Presidente de la República la convocatoria a las elecciones complementarias para elegir Alcalde y cuatro regidores del Consejo Provincial de El Collao, Ilave; mientras tanto, encargó temporalmente la alcaldía al señor Ramón Arias Santos y al cuerpo de regidores (ver cuadro N° 35).

**Cuadro N° 35**  
**Segunda Recomposición de JNE al Consejo Provincial El Collao-Ilave**  
**Resolución N° 098-2004-JNE (24 de mayo)**

<b>Título</b>	<b>Consejo Provincial El Collao – Ilave</b>	<b>Partido</b>	<b>Cargo</b>	<b>En reemplazo</b>
<b>Alcalde</b>	Ramón Arias Santos	URPD	1 <sup>er</sup> Regidor accesitario	
<b>Regidores</b>	Gertrudes Yanqui Mamani	URPD	Regidor accesitario	
	María Nora Nina Ramos	URPD	Regidor accesitario	
	Miguel Ángel Flores Chambi	SP	Regidor accesitario	Gilberto Olivera
	Rosalía Apaza Ccalli	SP	Regidor accesitario	Arnaldo Chambilla
	Sabú G, Gregorio Arias	SP	Regidor accesitario	Juan Mamani
	Elías Rizalaso Incacutipa	FUP	Regidor accesitario	
	Mateo Ticona Causacani	FUP	Regidor accesitario	Melania Flores
	Ricardo G. Butrón Calderon	MAPU	Regidor accesitario	Encarnación Mamani
	Mario Flores Muñuico	MAPU	Regidor accesitario	Edgar Lope

**Fuente:** Meléndez Carlos (2004).

Este encargo temporal de la alcaldía al señor Ramón Arias también fue rechazado contundentemente por la población movilizada en la convulsionada provincia, indicando que bajo ningún motivo aceptarán autoridades que pertenezcan a la facción de Robles. En el conflicto de Ilave las comunidades rurales aimaras fueron el eje de la toma de decisiones antes y después de la muerte del Alcalde, pues a pesar de varios intentos de restablecimiento de la autoridad municipal no se logró la reapertura de la institución municipal. Finalmente, el 4 de julio en Ilave, el sector movilizadado integrado mayoritariamente por la población rural, proclamó a los integrantes del Consejo Municipal de Ilave desestimando la recomposición del Jurado Nacional de Elecciones.

Legalmente era improcedente la designación de Miguel Ángel Flores, pero, en consenso, la población movilizaba estaba de acuerdo por la legalización de la autoridad proclamada, pero esto procedía siempre y cuando renunciase voluntariamente el alcalde designado Ramón Arias Santos y, sorprendentemente, renunció ante el JNE esta autoridad edil. Miguel Ángel Flores provenía de una lista de regidores accesitarios de Somos Perú, «se consideraba que no tenía filiación ni compromiso político alguno. Paradójicamente, su trayectoria apolítica –maestro de escuela secundaria y periodista local– era su principal capital político. La legitimidad de la autoridad tradicional expresada en el acuerdo y compromiso de los tenientes gobernadores, le transfería, en opinión de los dirigentes, la legitimidad para asumir el cargo de Alcalde, aunque de acuerdo con la normatividad vigente no le correspondía» (Meléndez, Carlos. 2004:22).

Cuando se emitió el Decreto Supremo N° 040-2004-PCM convocando a Elecciones Municipales Complementarias de Alcalde y cuatro regidores del Consejo Provincial de El Collao-Ilave, para el 17 de octubre, inmediatamente se inició el proceso electoral. Entonces, «la convocatoria a elecciones y la puesta en marcha del proceso, fueron determinantes para la normalización de la situación política en Ilave...y el movimiento opositor a la gestión de Robles, que dominaba el escenario local, empezó a mostrar signos de debilidad» (Meléndez, 2004:24)

A causa de la proximidad de las elecciones complementarias se hacía necesario contar con un Alcalde, razón por la cual, el JNE el 27 de noviembre emitió las resoluciones 191– 2004 – JNE y 102 – 2004 – JNE, recomponiendo por tercera vez el Consejo Provincial de El Collao (ver cuadro N° 36); esta recomposición se hizo en base a lo proclamado por los ilaveños el 4 de julio, por lo tanto, «este nombramiento representaba, para muchos en Ilave, el respeto final del gobierno central a las decisiones que tomaban los dirigentes locales» (Meléndez, 2004:27).

**Cuadro N° 36**  
**Tercera Recomposición del Consejo Provincial de El Collao**  
**Resolución N° 191– 2004 – JNE (27 de setiembre)**

<b>Cargo</b>	<b>Integrantes del Consejo Provincial</b>	<b>Partido</b>
<b>Alcalde</b>	Miguel Ángel Flores Chambi	Somos Perú
<b>Regidores</b>	Edgar Cotrado Ramírez	SP
	Domingo Ticona Encinas	SP
	Rosalía Apaza Ccalli	SP
	Sabú Gil Gregorio Arias Aycachi	SP
	Genoveva Inquilla Nina	SP
	Elias Rizalaso Incacutipa	FUP
	Mateo Ticona Causacani	FUP
	Ricardo Butrón Calderón	MAPU
	Mario Flores Muñuico	MAPU

**Fuente:** Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Meléndez (2004).

#### **5.2.8. Cese del conflicto**

Después de generarse un ambiente electoral entre la ciudadanía ilaveña, rápidamente se fue desintegrando la organización de los dirigentes movilizados y posteriormente se fueron adoptando las reglas de juego democrático. Entonces, el proceso de elecciones complementarias emprendido fue uno de los factores principales que influyeron en la finalización del conflicto. El conflicto finalizó lentamente con señales de oposición a las elecciones e incluso con una convocatoria a un paro el día de elecciones complementarias pero no prosperó, debido al desgaste, quedando ello como expresión de una minoría de la población, especialmente de la zona rural, y que no necesariamente expresaba su representatividad.

El 17 de octubre las Elecciones Complementarias se llevaron con total normalidad saliendo como alcalde electo Miguel Ángel Flores Chambi con 8,552 votos que representaba el 23.86% del total de electores de la provincia, perteneciente a la agrupación política Fuerza Democrática (fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales - 2004). Una vez obtenido los resultados finales de las actas de escrutinio la ONPE alcanzó los resultados al Jurado Nacional de Elecciones y, a través de la Resolución 236 -2004-JNE, se ha establecido finalmente el Consejo Provincial(ver cuadro N° 37).

**Cuadro N° 37**  
**Consejo Provincial de El Collao - Ilave, resultado de elecciones**  
**complementarias 2004**

<b>Cargo</b>	<b>Integrantes del Consejo Provincial</b>	<b>Partido</b>	<b>Condición</b>
<b>Alcalde</b>	Miguel Angel Flores Chambi	Fuerza Democrática	
<b>Regidores</b>	Simón Alberto Cotrado Cotrado	FD	Tnte. alcalde
	Roberto Braulio Flores Yujra	FD	Segundo regidor
	Teófilo Maquera Yujra	FD	Tercer regidor
	Francisco Rivera Condori	Somos Perú	Cuarto regidor
	Rubén Atencio Atencio	Fuerza Democrática	Quinto regidor (suplente)
	María Teresa Flores de Huallpa	Fuerza Democrática	Sexto regidor (suplente)
	Héctor Flavio Centón Aroquipa	Somos Perú	Octavo regidor (suplente)
	Alcides G. Incacutipa Limachi	Frente Unido Progresista	Noveno regidor (suplente)
	Francisco Quenta Ticona	Nueva Izquierda	Décimo regidor (suplente)

**Fuente:** Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Meléndez (2004).

## CAPITULO VI

### PARTICULARIDADES DEL CONFLICTO DE ILAVE (2004)

#### 6.1. Trascendencia política del conflicto

El conflicto de Ilave trascendió políticamente porque después de la muerte del Alcalde la clase política, desde el Congreso, se encargó de identificar al responsable político y la imputación cayó sobre el ministro del Interior Fernando Rospigliosi Capurro, pidiendo por mayoría su separación del gabinete del Consejo de ministros, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, tal como podemos ver en la declaración del congresista Mauricio Mulder: **«cuando se tiene un ministro peleando con otro ministro y un congresista, sin preocuparse de la seguridad de los ciudadanos, es obvio que no sirve para estar en el cargo»**(*Expreso* 27.04.04, edición Lima); también Jorge Mufarech dijo: **«cuando yo manejo una empresa, pongo orden. Si no puedo poner orden, cierro la empresa y se acabó»** (*La Razón* 27.04.04, edición Lima).

El Ministro del Interior Fernando Rospigliosi fue censurado por el Congreso obteniendo 62 votos a favor y 39 en contra, pero esto no solucionó la problemática de la ciudadanía aimara, ni la crisis política, solo fue una respuesta coyuntural. Así, no fue vista integralmente la problemática de estos pueblos ni por parte del gobierno central ni por parte del Congreso, finalmente solo se limitaron a buscar culpables de la muerte del Alcalde y acabaron el asunto sin proponer algún proyecto de ley de reconocimiento efectivo de la diversidad cultural en el país.

El gobierno de Alejandro Toledo estaba en una etapa de crisis y con lo sucedido en Ilave se complicó aún más la situación de gobernabilidad del país, por consiguiente se generaron mayores críticas al gobierno central y al mismo sistema político, como podemos apreciar en el análisis político de Carlos Franco: **«el régimen está cosechando aquello que ha sembrado con su indiferencia y desatención. Ahora la población está utilizando el recurso de la violencia para ser escuchado»** (*Correo* 28.04.04, edición Lima). Asimismo, Alberto Adrianzén señaló: **«los Estados de Derecho además de legalidad requieren legitimidad. Es decir, como en toda República, que todos se sientan ciudadanos por igual y que el interés público esté al servicio de todos»**. Además sostuvo: **«que nadie en su sano juicio puede estar a favor del linchamiento y del crimen. Esos son actos de barbarie. Pero nadie puede acusar al otro de bárbaro, sobre todo cuando hay una élite racista que vive de espaldas al país y mantiene en el atraso a millones de nuestros compatriotas»** (*La República* 28.04.04, edición Lima).

También en ese entonces, David Jiménez Sardón (Presidente del gobierno regional de Puno) criticó duramente al gobierno central diciendo que **«la gran Nación quechua y aimara marginada, burlada, hastiada, le reclama a un gobierno central sordo, ciego y mudo»** (*La Razón* 28.04.04, edición Lima). A su vez, aprovechando la coyuntura, el líder indígena boliviano Felipe Quispe, instó a los aimaras peruanos a revelarse contra los qaras (blancos) y calificó como un hecho histórico el linchamiento del Alcalde en manos del pueblo aimara. Al encontrarse Puno en la frontera con Bolivia ha habido cierta influencia de tal índole pues también los aimaras se encuentran en regiones del oeste y en el centro de Bolivia, como en la Paz.

## 6.2. Movilización de los aimaras y politización de la identidad étnica

La población movilizada ha sido integrada mayoritariamente por la población indígena aimara, en vista de que fueron los directos afectados por las políticas emprendidas por el Alcalde, además estaban indignados por los hechos del enfrentamiento y por el supuesto mal uso de los fondos de la municipalidad; en relación a esto Lucio Calli Incacutipa declaró: **«el Alcalde y los regidores están malogrando al pueblo, enfrentándolo esto podría acabar en un charco de sangre, no podemos permitir que el Alcalde utilice fondos del Estado para comprar gente, mientras nuestras comunidades se mueren de hambre por falta de trabajo»**(*Los Andes*, 05.04.04); también Pedro Paucar dijo: **«nosotros estamos molestos con el Alcalde. Cómo es posible que contrate gente de las comunidades para dar su informe económico, queríamos preguntar porque no hizo obra alguna en nuestra comunidad pero su relacionista pública ordenó que habláramos por micrófono. No es justo que con el dinero que manejan en el Consejo y que es de todos, no nos quiera dar una explicación de la utilización de los fondos»** (*Los Andes*, 05.04.04).

Al ser integrada la movilización mayoritariamente por los aimaras, muchos calificaban las protestas como la movilización de la «nación aimara» pero realmente la gente salió a las calles a reclamar la renuncia del Alcalde, por eso miles de manifestantes los primeros días de la movilización entonaban a viva voz **«el pueblo en las calles por culpa de Cirilo»** (*Correo* 05.04.04). La movilización masiva se debió a varias razones, pero se han resaltado tres razones:

1. Las declaraciones del extinto Alcalde contribuyeron al escalamiento del conflicto, porque minimizaba la concentración de los manifestantes, indicando que se trataba de un grupo de personas de oposición quienes



estaban protestando, sin embargo, con estas declaraciones hizo que la población se volcara más a la movilización. En efecto, el señor Wilber Gómez dijo: **«acá estamos demostrándole al Alcalde que no somos el 10%; sino todo el pueblo, que pide su renuncia»** (*Correo* 05.04.04).

2. El carácter obligatorio de la participación en las movilizaciones, por zonas y turnos; dicha estrategia de movilización involucraba a todos los integrantes de las comunidades rurales de las tres zonas: alta, media y baja o lago, al respecto los siguientes entrevistados manifiestan:

«Venían por sectores, varios sectores, por ejemplo de zona alta venían tantas comunidades, otro día de otras comunidades, así era rotativo. Ellos tenían que quedarse un día y al día siguiente se iban, así es» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

---

«... inclusive se han turnado, en las noches; la juventud hombres y mujeres y en las horas de la mañana adultos y ancianos» (Entrevista: ciudadano aimara– sección b, 2009).

3. Por otro lado, el teniente alcalde Alberto Sandoval ha estado preparando el terreno para la vacancia del Alcalde, haciendo alianzas con diferentes autoridades y dirigentes como con Valentín Ramírez Chino, comerciante de ganado y dirigente de Frente Único de Defensa de los Intereses de Ilave (FUDI), como también con los presidentes de las comunidades, tenientes gobernadores y alcaldes de centros poblados que estaban descontentos con la gestión de Robles; haciendo alusión a ello, ante la Comisión de Investigación del Congreso Valentín Ramírez declaró: **«entre febrero y marzo un grupo de dirigentes formaron diversas organizaciones de defensa y movimientos ciudadanos y aimaras con el objeto de defender los intereses de Ilave»** (Degregori, 2004: 48).

La legitimidad del discurso de la «nación aimara» en Ilave ha sido efímera pues los entrevistados respondieron cuestionándola cuando se les pidió opinar sobre la nación aimara. La consigna aimara fue usada durante el conflicto pero muchos consideran que no tiene sentido hablar de «nación aimara» al ser ciudadanos de la nación peruana; para otros no tiene suficiente sustento ideológico, político ni legal, ni se puede definir con claridad, así como señala el entrevistado siguiente:

«Está mal dicho eso de nación aimara, porque una nación está organizada, la nación peruana es legal y la nación aimara no pues. Nosotros ya tenemos nación peruana, entonces eso no más debe primar» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección c, 2009).

Pero como dice Anderson «el nacionalismo no debería ser analizado como una especie de ideología sino, más bien, como un constructo cultural que tiene afinidad con el “parentesco o la religión”», (citado en Claudio Lomnitz, 2009:357).

Evidentemente el tema de la nación aimara ha sido coyuntural; así hoy en día ya nadie hace alarde al respecto, aunque el alcalde Fortunato Calli Incacutipa ha estado utilizando el eslogan «ILAVE CAPITAL DE LA GRAN NACIÓN AYMARA» en el frontis de la municipalidad provincial de El Collao, pero no ha tenido mayor significación para muchos pobladores, porque no expresaba el interés común de los aimaras. Pero, «la mayoría de los pueblos originarios y sus principales dirigentes e intelectuales apelan reiteradamente a su pasado para fortalecer y dar sentido a su identidad e incluso para expresar su utopía» (Xavier Albó, 2009:521).

«La nación aimara es término político, la población tampoco está contenta con esa denominación, está bien Ilave es una población aimara, nuestra cultura es aimara, eso no quiere decir que nosotros vamos ser nación, anteriormente no había; recién con este gobierno» (Entrevista: ciudadano aimara – 2009 – sección b, 2009).

Pero no se puede negar que en la zona aimara de Puno es fuerte la identidad étnica, en consecuencia, tiene presencia en la política local, aunque no posee argumentos sólidos. «Por más inacabado que sea el discurso, lo cierto es que desde los sucesos en Ilave en abril de 2004, el tema de la identidad aimara como recurso político está tomando fuerza» Huber Ludwig (2008:230).Efectivamente, a partir del conflicto Ilave se consolida la capitalización política de la identidad aimara puesto que siempre ha estado presente en la política regional y como se puede ver en las elecciones del 2002,pues a nivel regional ganó el Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara (MARQA); asimismo, para las elecciones complementarias del 17 octubre del 2004 se han inscrito dos organizaciones políticas ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Puno aludiendo la identidad étnica (ver cuadro N° 38).

**Cuadro N° 38**  
**Organizaciones políticas inscritas ante JEE – Puno en las elecciones**  
**complementarias 2004 con discurso étnico**

<b>Tipo de organización</b>	<b>Organización Política</b>
<b>Organizaciones nacionales</b>	Ninguno
<b>Organización regionales</b>	Movimiento por la Autonomía Regional Quechua y Aymara (MARQA)
<b>Organización local</b>	Movimiento Independiente Democrático Los Aymaras (MIDA)

**Fuente:** ONPE, Resolución 206 – 2004-J/ONPE.

### 6.3.Reivindicación de la identidad aimara

La consigna de «nación aimara» surgió en un contexto de indiferencia del Estado al conflicto de Ilave. Así, una ex dirigente de una organización social mostró su indignación por la marginación que sufren los pobladores de origen aimara y expresó lo siguiente: **«nosotros vamos a crear nuestras leyes para que nuestros hijos gobiernen. Ya no queremos a los mistis»**(*Los Andes* 16.04.04); asimismo, exigieron que se dé el cumplimiento de las disposiciones del convenio 169 de la OIT que estipula la autodeterminación de los pueblos originarios, entonces lo que se puede observar es que hay un sector de la población aimara que reivindica los derechos especiales de autogobierno a merced de ser pueblos originarios, olvidados, marginados y excluidos.

Para Vicente Alanoca, «la propuesta de la nación aimara es la expresión de un pueblo que exige y no quiere desaparecer en el torrente de un modelo excluyente» (2008: 13); ciertamente, el conflicto de Ilave pasaba desapercibido hasta la muerte del Alcalde, incluso no había presencia de la prensa nacional cubriendo los hechos, es por eso que cuando la prensa capitalina se volcó a la ciudad de Ilave, después de la muerte del Alcalde, entre los pobladores se escuchaba por doquier decir **«recién se acuerdan de venir»** (*La República* 28.04.04, edición Lima). Por lo tanto, al no ser resuelto oportunamente el conflicto este se fue complejizando despertando sentimientos constreñidos y sacando a flote otros problemas como el olvido, la pobreza, la discriminación y la marginación que han vivido históricamente estos pueblos; en relación a esto dijo un entrevistado:

«Un poquito descontento la gente con lo que Ilave ha sido olvidado, entonces ellos decían para nosotros no hay apoyo, entonces nos anexamos a Bolivia, entonces es un poquito chocante las leyes del centralismo, piensan que el Perú solo es Costa, sino hay Costa, Sierra y Selva y tenemos costumbres muy distintas, pero todos los

gobiernos se basan en la Costa, entonces estamos totalmente olvidados y eso es el meollo de los aimaras» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

A la ausencia e indiferencia del Estado, se sumaron las instigaciones y agitaciones por parte de los dirigentes, regidores, ideólogos, etc., y el pedido de vacancia del Alcalde se tornó contundente y, a su vez, el conflicto se expresó con poca viabilidad de solución inmediata; realmente la indiferencia y la postergación de los problemas de estos pueblos no es una mera coincidencia sino es una tradición nacional, porque siempre han sido las prioridades de la agenda política nacional los asuntos que han estado y están en armonía con el proyecto de la modernidad; al respecto el antropólogo Vladimiro Centeno sostiene:

«Sin mayor conocimiento de supuestas acciones negativas (del Alcalde), un poco motivados por el prejuicio; ellos sienten la impotencia de no poder expresar lo suyo en un diálogo horizontal con las autoridades, sienten subordinación, exclusión. Y para romper eso buscaron la oportunidad para expresar lo suyo» (Entrevista 02: Docente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) Puno - 2009).

Durante el proceso del conflicto hubo la intervención de varias agencias del Estado, pero en la gestión del conflicto se soslayó el aspecto cultural de la población aimara, porque, en parte, el sistema educativo peruano no prepara a los operadores del Estado para ser ciudadanos de un país multicultural, multiétnico y plurilingüe. En el Perú «conviven muchas culturas, lenguajes, y religiones; geografías y paisajes; costumbres, tradiciones y valores; colores, sabores y olores diferentes. Pero además, las diferencias culturales y étnicas están relacionadas con desigualdades sociales y económicas que hacen del Perú un país profundamente estratificado, conformado por grupos tan disímiles que muchos no tienen siquiera idea de la existencia de los otros en el mismo territorio» (Ilizarbe, 2002:77), es por eso que en el conflicto primó el prejuicio desde Lima. Además, debido a la incapacidad de una respuesta rápida al conflicto éste se fue

vinculando de inmediato con la ausencia del Estado, pero, aunque haya presencia del Estado es casi como si estuviese ausente a causa de las brechas sociales, económicas y culturales presentes a través de la historia.

#### 6.4. Estigmatización del Alcalde

En el proceso del conflicto el asesinado Alcalde ha sido estigmatizado como ladrón y corrupto, y fue representado con imágenes de «zorro» y «ratón», animales considerados en la zona como astuto y ladrón, por consiguiente las pintas, caricaturas y pancartas simbólicamente han hecho del Alcalde una persona desacreditada y desacreditable. A su vez, en la vivienda colindante al frontis del edificio de la municipalidad se encontraba una pancarta pegada en la pared que exhibía la siguiente arenga: **«Fuera incapaz alc. Cirilo Zorro. Renuncia del alcalde y sus regidores»**; al respecto uno de los entrevistados dijo:

«Aquí se considera al zorro como animal muy astuto y también había dibujos de ratones, y a estos se les considera como rateros, entonces con esas imágenes se representaba. El zorro, porque era una persona muy astuta por su formación y experiencia» (Entrevista: ciudadano aimara – Ilave – sección b, 2009).

El uso de las imágenes se constituyó en la fuente de comunicación más efectiva entre los manifestantes, además “las imágenes dicen más que mil palabras”, porque para cualquier poblador la exhibición de la imagen del zorro y el ratón era muy conocida, ya que son animales perjudiciales en las comunidades rurales y también lo encontramos en la literatura de la región Puno; la personificación del zorro, generalmente en cuentos andinos, lo representan como un animal astuto, inteligente, engañoso y ladrón; así por ejemplo en una de las narraciones orales de Domingo Sayritupa Asqui hallamos un cuento denominado «El Zorro Antonio y el gallo» y un fragmento del cuento literalmente dice: «El gallo se salvó de morir a manos del zorro Antonio; era mentira que

estuviera estudiando para profesor, todo era un astuto engaño del zorro Antonio» (Ayala, 2002:87).

La estigmatización lo convirtió al Alcalde en un ser despreciable ante los ilaveños. «De ese modo dejamos de verlo como una persona total y corriente para reducirlo a ser inficionado y menospreciable»(Goffman, 2001:12); de manera que el Alcalde al ser estigmatizado tenía pocas posibilidades de continuar como autoridad en la municipalidad provincial, sin embargo, las instancias correspondientes no reaccionaron a ese nivel.

La coyuntura que se vivía en Ilave era la crónica de una muerte anunciada. Primero, porque el extinto Alcalde estaba fuertemente estigmatizado y «creemos por definición, desde luego, que la persona que tiene un estigma no es totalmente humana. Valiéndonos de este supuesto practicamos diversos tipos de discriminación, mediante la cual reducimos en la práctica, aunque a menudo sin pensarlo, sus posibilidades de vida» (Goffman,2001:15); y segundo, Robles había solicitado el 5 y 22 de abril «garantías personales» a la Fiscalía Provincial de Ilave -Collao, aduciendo que recibía amenazas de muerte, como su esposa recordó: **«Mi esposo había pedido garantías para su vida a la Fiscalía Provincial de Ilave, pero ni la subprefectura ni la policía nos hizo caso»** (*Correo* 27.04.04, Edición Lima).

Pero, en el proceso del conflicto, no solo el Alcalde ha sido estigmatizado sino también la población de Ilave como «mata alcalde» a nivel local y «bárbaros», «salvajes» etc., por la prensa después de la muerte violenta del Alcalde, también Huber, Ludwig dice que los “ilaveños acaben por asumir ese ‘estigma’ [de aimaras definidos como ancestralmente violentos y recientemente separatistas] y convertirlo en recurso (2008:230). Pero muchos de los ciudadanos implicados indirectamente con los hechos

del 2 de abril no quieren hacer mención del tema y hasta se sienten aludidos automáticamente cuando se hace mención el caso del conflicto de llave.



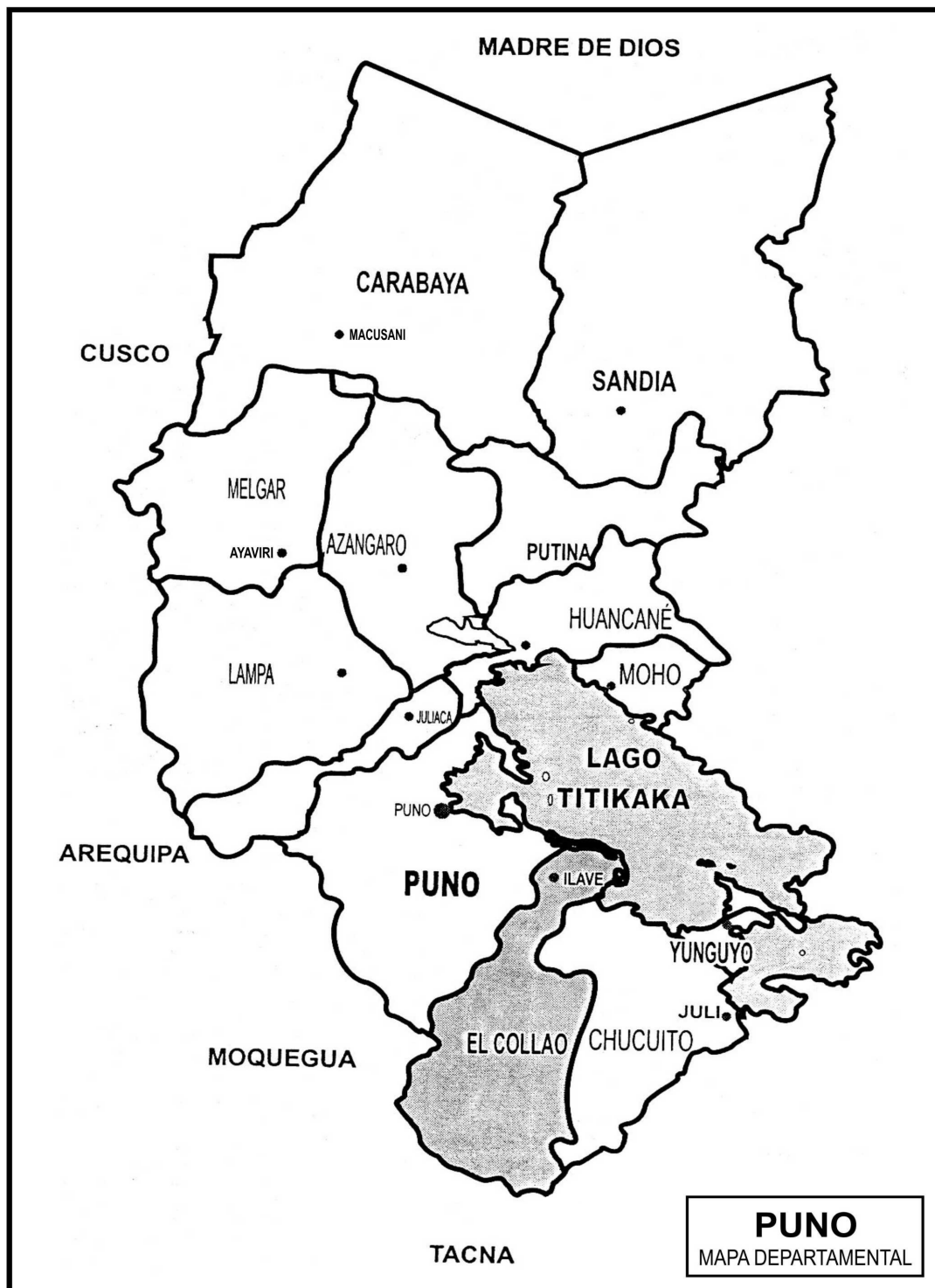
## CONCLUSIONES

1. Los aimaras no ejercen su ciudadanía en el marco de la concepción convencional de ciudadanía dado que en el entramado de los hechos y sucesos del conflicto de Ilave (2004) hubo un predominio de las costumbres en la práctica ciudadana. De ahí que, la ciudadanía aimara se construye desde la socialización de sus costumbres y de sus singularidades culturales.
2. La gestión del conflicto carecía de manejo de perspectiva intercultural. En efecto, hubo evasión de las costumbres de las comunidades rurales, de su identidad étnica y de sus vivencias, y no se dio apertura a las propuestas de solución planteadas por la población movilizada, y se produjo el desencuentro entre el Estado y la ciudadanía aimara, lo que generó el entrampamiento del conflicto que escaló hasta llegar a la etapa de crisis.
3. En el conflicto de Ilave, a consecuencia de la falta de un firme reconocimiento de los pueblos originarios, se impuso, mediática y centralistamente, el etnocentrismo y la incomprensión a los reclamos de la población aimara movilizada. Esta forma de razonamiento también es coincidente con el imaginario de un sector de la población local que genera complejo de inferioridad y va deteriorando la identidad étnica.
4. Hay una politización instrumental de la identidad étnica debido a la ausencia e indiferencia del Estado a atender los problemas de la población indígena y una fuerte tendencia a la búsqueda de reconocimiento de los derechos de autogobierno por parte de un sector de la población aimara.
5. En el conflicto de Ilave ha trascendido que los pobladores aimaras tenían su propia concepción de la gestión municipal, de derecho y del ejercicio del poder. Dicha concepción estaba ligada con sus costumbres. Por lo tanto, durante el conflicto se ha producido la colisión de dos sistemas normativos: el sistema normativo consuetudinario aimara y el sistema normativo oficial.

## RECOMENDACIONES

- El reconocimiento sociocultural de los aimaras es necesario para liberarles de la “identidad” impuesta y así puedan recuperar su autoestima y desinhibir sus capacidades apreciando sus valores culturales, concibiéndolos como iguales frente a otras sociedades, aunque en condiciones diferentes, pero no inferiores ni superiores.
- Los derechos deben de ser el resultado de las reivindicaciones sociales (desde abajo) y estar en sintonía con la realidad social, política, económica y cultural de los ciudadanos y ciudadanas.
- En los ámbitos locales, las ciudadanías se construyen con distintas identidades, costumbres, vivencias y percepciones que requieren ser estudiados y procesados, transformándolos en derechos oficiales aquellas que ellos consideran desde su propia legitimidad sociocultural como sus derechos.

# ANEXOS

**Anexo N° 1: Mapa del departamento de Puno**

## **Anexo N° 2: Guion de entrevista**

### **I. Datos generales**

- 1.1. Apellidos y nombres.
- 1.2. Lugar de residencia y procedencia.
- 1.3. Idioma y actividad principal.

### **II. Relaciones sociales**

- 2.1. Relación entre la municipalidad y la población.
  - 2.1.1. La relación social entre los integrantes de la población aimara urbano - rural.
- 2.2. La relación social entre los integrantes de las comunidades rurales.
- 2.3. La participación ciudadana en la gestión municipal.

### **III. Significancia de la municipalidad**

- 3.1. Conocimiento sobre la gestión de la Municipalidad Provincial de El Collao.
- 3.2. Opinión respecto la gestión del extinto alcalde Fernando Robles Callomamani.
- 3.3. Confianza en una gestión municipal transparente

### **IV. Organización comunal**

- 4.1. Patrones de organizaciones comunales aimaras
- 4.2. Opinión respecto a la capacidad de gestión comunal

### **V. Percepción del conflicto**

- 5.1. Movilización masiva de la población
- 5.2. La normatividad durante el conflicto
- 5.3. La ciudadanía de Ilave durante el conflicto
- 5.4. Opinión sobre la «nación aimara»

**Anexo N° 3: Memorial alcanzado a la Defensoría del Pueblo – Lima.**

DE :

NO. DE FAX :

07 ABR. 2004 10:39AM P1

**URGENTE****DEFENSORIA DEL PUEBLO  
OFICINA DEFENSORIAL DE PUNO**

Jr. Libertad N° 219 – 229

Telefax 051 – 369183

**FAX**Para: Dr. Porfirio Barrenechea C. Fax: 014267800 - 221De: Dr. Paolo Vilca Arpas Fax: 051 369983N° Pág.: 05 (incluida ésta) Fecha: 07 - 04 - 04Asunto: Remite MemorialUrgente    Para Revisar    Comentarios    Responder    Reciclar

MEMORIAL

SEÑOR:

DEFENSORÍA DEL PUEBLO - Lima

Los Suscritos,  
 Frente Único de Defensa de los Interés de Ilave, (FUDI),  
 Federación Provincial de Campesinos (FPCC) Central  
 Unica de Barrios de Ilave, (CUBUI), Frente Unico de  
 Comerciantes de Ilave (FUC), SUTEP Ilave, Estudiantes  
 de la Extensión Universitaria Ancasaya (UNA),  
 Asociación de Municipalidades de Centros Poblados  
 (AMUCEP), Juventud Aymara, Tenientes Gobernadores,  
 Autoridades Comunales y Pueblo en General de la  
 Provincia de El Collao nos dirigimos a las autoridades  
 tutelares de hacer cumplir las normas legales vigentes, en  
 lo referente a gobiernos locales y demás instituciones;  
 para manifestar lo siguiente:

**LAS AUTORIDADES, DIRIGENTES SINDICALES**

**PRIMERO.-** Con fecha 02 de Abril del año 2,004, el Alcalde de la Municipalidad Provincial El Collao, convocó a la llamada "ASAMBLEA INFORMATIVA" la misma que se realizó en la plaza de Armas de nuestra ciudad, oportunidad en la que se pretendió hacer un informe incompleto sobre la gestión al frente de la Municipalidad, y haciendo participar a gente allegada a su persona únicamente.

**SEGUNDO.-** Al haberse detectado una serie de falsedades y mentiras por parte del Alcalde es que los dirigentes, representativos de la ciudad y la población organizada quisimos hacer uso de la palabra para que explique las incoherencias del informe efectuado; sin embargo, no se nos accedió el uso de la palabra, llegando a desconectar los cables de los parlantes y a recoger los parlantes y el micrófono.

**TERCERO.-** Ante esta actitud, los pobladores en general presentes en dicho acto procedieron a expresar su protesta con silbidos, y arengas en contra del Alcalde; de este hecho aprovecharon las personas allegadas al Alcalde, quienes se encontraban premunidos de palos, chicotes, fuetes y piedras para empezar a agredir a la población organizada generando un caos total en las inmediaciones de la plaza de armas de nuestra ciudad, ocasionando inclusive daños en propiedades privadas, y de la propia municipalidad, como rotura de vidrios entre otros.

**CUARTO.-** Luego de estos sucesos, y efectuadas las averiguaciones se ha llegado a determinar que el Alcalde contrató personas de dudosa reputación y matones para que arremetan en contra de la población; es mas tenemos pleno conocimiento de que en vehículos rurales (combis) trajeron piedras para cometer la agresión; ello significa que la agresión fue premeditada, haciéndoles presentes que no es un hecho aislado pues ésta política de agresión y matonería también la efectuó en el proceso de las elecciones, como también el la primera asamblea informativa del año 2,003, así mismo los trabajadores contratados del Municipio de El Collao por el Sr. Cirilo Robles estuvieron apoyando estos actos de violencia. EL UNICO AUTOR INTELLECTUAL DE ESTE TIPO DE VIOLENCIA ES EL SEÑOR CIRILO FERNANDO ROBLES CALLOMAMANI.

**QUINTO.-** Al margen de lo manifestado debemos expresar nuestra protesta y rechazo total hacia el alcalde Cirilo Fernando Robles Ccallomamani, por su incapacidad demostrada al frente de su gestión, incapacidad que la traducimos a continuación:

1. La mala gestión del Alcalde Cirilo Fernando Robles Ccallomamani se traduce en que los propios regidores al detectar irregularidades, recurrieron ante la fiscalía de la ciudad de Ilave, para denunciar por los delitos de malversación de fondos, peculado, entre otros (07) siete delitos, sin embargo sabemos que el Fiscal de Ilave solo ha hecho denuncia por solo dos (02) delitos apañando los otros cinco (05) delitos, ello por que hay rumores en la ciudad de que el alcalde a través de sus asesores ha pagado al fiscal para que lo protejan. Entonces nosotros consideramos que los fiscales también están dentro de la corrupción, y que también haremos conocer en su momento, porque hay varios delitos que han denunciado el Fiscal por proteger al Alcalde los esta Archivando, así tenemos: malversación del Grifo Municipal, Usurpación de Funciones y Asociación Ilicita para delinquir, así mismo es una persona antidemocrática, autoritarias, abusiva y fomentador de violencia en contra del pueblo atentando el orden público.
2. También debemos hacer conocer que existe pronunciamiento de contraloría de la república con sede en Puno que concluye que en el municipio se ha cometido falsificación de documentos, pagos indebidos a funcionarios, hay ejecución de gastos que superan el presupuesto analítico de personal; sine embargo hasta la fecha no hay pronunciamiento por par del Alcalde Cirilo Fernando Robles Ccallomamani.
3. El Alcalde al momento de emitir su informe el día 02 de Abril, mintió al pueblo al precisar obras que no se han ejecutado, y que si se ha gastado el dinero que estaba presupuestados para ello, así tenemos:
  - Carretera asfaltado Ilave Mazo Cruz por la suma de S/. 240,000 Nuevos Soles esta obra nunca ha sido hecha.
  - Estudio del Mercado Central por la suma de S/. 30,000 Nuevos Soles
  - Mejoramiento de Rehabilitación de la Plaza de Armas por S/. 10,000 Nuevos Soles.
  - Estudios de Catastro Urbano por la Suma de S/. 60,000 Nuevos Soles.
  - Estudio Relleno Sanitario por la suma de S/. 28,756 Nuevos Soles.
  - Estudio de Puentes Carrozables Viscachani, Jalluyo, Santa Rosa, López por la suma de S/. 90,000 Nuevos Soles.
  - Apoyo por desastres naturales por la suma de S/. 50,000 Nuevos Soles.
  - Promoción y Desarrollo Micro Empresarial Rural y Urbano por S/. 80,000 Nuevos Soles.
  - Instalación de Infraestructura de Agua y Desagüe por S/. 300,000 Nuevos Soles.
  - Estudio de Promoción de Comercialización de Productos, de Exportación pro la suma de S/. 20,000 Nuevos Soles.
  - Mantenimiento de Parques y Jardines por la suma de S/. 30,000 Nuevos Soles.
  - Control aprovechamiento de calidad ambiental por la suma de S/. 90,200 Nuevos Soles.
  - Programa de Extensión Universitaria por S/. 183,000 Nuevos Soles.
  - Implementación del Laboratorio de la Extensión Universitaria por la suma de S/. 40,000 Nuevos Soles.

Estas obras jamás se han ejecutado según el presupuesto Fiscal del año 2,003, produciéndose malversación de fondos que necesariamente deben ser denunciados por la incapacidad del Alcalde Cirilo Fernando Robles Callomamani para seguir al frente de la gestión Municipal.



4. Otra de las perlas del alcalde está en el hecho de que incumpla las leyes pues la Ley Orgánica de Municipalidades dispone se realicen cuando menos dos sesiones ordinarias al Mes y como máximo (04) cuatro sesiones de concejo, pero el alcalde en el mes de Marzo del presente año sólo ha efectuado una sola sesión extraordinaria; con ello se perjudica a la población porque los integrantes del Concejo Municipal no pueden tener oportunidad para decidir sobre la ejecución de obras a favor de la población, tampoco los regidores tienen oportunidad para realizar las observaciones de los malos manejos del Alcalde Cirilo Fernando Robles Ccallomamani.
5. DE Igual forma debemos hacer presente que el alcalde solo favorece a las personas de su comunidad porque solo contrata personal de su comunidad, cometiendo con ello incluso nepotismo y que también hace necesario su vacancia.
6. Otra de las razones por las que el Alcalde convoca a sesiones es el hecho de que se ha presentado la vacancia de tres de sus regidores allegados a quienes protege como son: Juan Mamani Mamani, Melania Flores Yujra, y Arnaldo Chambilla Maquera y los protege porque con ellos realiza los malos manejos de la gestión municipal.
7. Viene incumpliendo lo aprobado para el manejo del presupuesto aprobado para el año fiscal 2,004 hasta la fecha.
8. Existen actas que obran en las distintas comunidades de compromisos del alcalde para invertir de acuerdo al presupuesto, pero que sin embargo no son cumplidas, y que el presupuesto destinado para ello no sabemos que destino ha corrido.
9. El Ciudadano Ricardo Butron Calderón en fecha 04 de Septiembre del año 2,003 y el 29 de septiembre del año 2003, denunció ante la contraloría de la república Sede Regional de Arequipa los Malos Manejos Económicos en la Municipalidad Provincial de El Collao y que hasta la fecha no se obtiene ningún resultado.
10. Hasta la fecha no existe acceso a información verídica en cuanto al manejo de pecosas de las entradas y salidas de materiales así mismo tenemos la sobrevalorización de las obras que viene ejecutando casos: Complejo Recreativo Ramon Castilla, Adquisición de Vidrios para el Complejo Municipal.
11. Inauguró obras sin la Respectiva Liquidación conforme a lo estipula la Ley General de Construcción, al mismo tiempo que han sido ejecutadas por personal no calificado como bachilleres e ingenieros geólogos ya que deberían de ser realizadas por profesionales competentes debidamente acreditados por el Colegio de Ingenieros del Perú. Lo cual también es una falta.
12. Sobre valorización de las transferencias a las comunidades en sus diferentes obras y el no cumplimiento de su compromiso con la zona rural: Zona Lago Camicachi ofrecimiento de la construcción de la Templo, Arreglo de Vías.
13. Rendición de Cuentas de las transferencias de ORDESUR para la ejecución de carreteras.
14. Sin criterio alguno contrató personal incapaz para la gestión municipal a plazo fijo, sin la opinión técnica de la oficina de personal, planificación y otros.
15. Realizó viajes de placer a la Capital Lima sin obtener ninguna gestión positiva a favor del pueblo.
16. Los funcionarios allegados al Alcalde vienen cometiendo una serie de acciones antisociales como tomar licor en las oficinas del Terminal Terrestre y otros así mismo estos hechos han sido denunciados y no han sido sancionados.

SEXTO.- Por todo lo manifestado señores PEDIMOS LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE CIRILO FERNANDO ROBLES CCALLOMAMANI, por que ha demostrado, incapacidad administrativa, para continuar dirigiendo los destinos de la Provincia, por que en este año que esta al frente del Municipio, la Provincia a retrocedido CIENTO Años en claro perjuicio de la población en general.

**SEPTIMO.-** Señores autoridades, les manifestamos que la voluntad del pueblo es que se produzca de una vez la **DESTITUCIÓN DEL ALCALDE**, por **INCAPAZ**, y si Uds. No nos hacen caso, la población seguirá en pie de lucha hasta lograr el objetivo trazado por nosotros sin dar un paso atrás porque sabemos que **LA VOZ DEL PUEBLO ES LA VOZ DE DIOS**, y si nosotros elegimos a este alcalde incapaz, ahora somos nosotros también quienes pedimos su inmediata destitución.

**OCTAVO.-** Para acreditar los malos manejos y que el alcalde miente a su pueblo alcanzamos un acuerdo de consejo mediante Resolución Municipal N° 126-2003 por el que se quedó en firmar convenio entre la Municipalidad con la Empresa América Televisión que sin embargo no se ha realizado pues lo único que ha hecho el Alcalde es Comprar un Codificador, y esto de Contrabando desconociendo así un acuerdo de Consejo sumiendo así a la población en la desinformación de los acontecimientos nacionales y extranjeros, con la única finalidad de seguir manejando el Municipio a su antojo y para su provecho y el provecho de sus allegados.

**NOVENO.-** Las Autoridades en su conjunto solicitamos la inmediata solución de este problema ya que en caso de no solucionar este problemas social estaremos radicalizando esta medida de lucha.

**PARA finalizar señores autoridades, REITERAMOS NUESTRO PEDIDO DE DESTITUCIÓN DEL ALCALDE INCAPAZ CIRILO FERNANDO ROBLES CALLOMAMANI PORQUE HA DEMOSTRADO INCAPACIDAD ADMINISTRATIVA PARA GOBERNAR, A DEMOSTRADO CORRUPCIÓN, APROVECHAMIENTO ILÍCITO PARA SU BENEFICIO PERSONAL Y PARA SUS ALLEGADOS CORRUPTOS, TAMBIÉN LE EXPRESAMOS QUE NO DEJAREMOS NUESTRA MEDIDA DE LUCHA HASTA LOGRAR NUESTROS OBJETIVOS.**

**VIVA EL PARO INDEFINIDO POR LA DESTITUCIÓN DEL ALCALDE**

**VIVA LA AUTONOMÍA DEL PUEBLO PARA DETERMINAR O ELEGIR A SUS AUTORIDADES.**

**VIVA NUESTRA JUSTA LUCHA.**

**QUE SE NOS HAGA JUSTICIA Y SE ESCUCHE EL CLAMOR DE LA VOZ DEL PUEBLO Y POR ENDE LA VOZ DE DIOS**

Ilave, 06 de Abril del año 2,004.

# Anexo N° 4: Resolución N° 284 de la Contraloría General de República.



Lima, lunes 13 de junio de 2005

NORMAS LEGALES

El Peruano

Pág. 294607

prendidos en el Informe de Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA  
Vicecontralora General de la República  
Contralora General de la República (e)

10801

**Autorizan a procurador iniciar acciones legales contra presuntos responsables de la comisión de delitos en agravio de la Municipalidad Distrital de Puños**

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA  
N° 283-2005-CG

Lima, 9 de junio de 2005

VISTO, el Informe Especial N° 171-2005-CG/ORHU, resultante del Examen Especial efectuado a la Municipalidad Distrital de Puños, provincia de Huamán, departamento de Huánuco, por el período comprendido de enero de 1999 a diciembre del 2002; y,

## CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el Plan Anual de Control para el ejercicio 2004 de la Oficina Regional de Control Huancayo de la Contraloría General de la República, se efectuó el Examen Especial a la Municipalidad Distrital de Puños, orientado a determinar si los recursos financieros asignados a la citada Entidad, fueron utilizados en concordancia con los objetivos institucionales y de acuerdo a la normativa vigente;

Que, como resultado de la acción de control practicada, la Comisión Auditora ha determinado que quienes tuvieron a su cargo la administración del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, Canon Minero y Vigencia de Minas, dieron una aplicación definitiva diferente a los fondos de inversiones, por el importe de S/. 126 634,00, utilizándolos en gastos corrientes y consignando información falsa en los comprobantes de pago, con la finalidad de encubrir la indebida utilización; acciones con las cuales limitaron la ejecución de las obras programadas en los respectivos Presupuestos; hechos que evidencian la existencia de indicios razonables de la comisión de los delitos de Malversación y contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, previstos y penados por los artículos 389° y 428° del Código Penal, respectivamente;

Que, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del Art. 22° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, constituye atribución de este Organismo Superior de Control, disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por parte del Procurador Público, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal, correspondiendo autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el inicio de las acciones legales respectivas contra los presuntos responsables comprendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el literal d) del artículo 22° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, Ley N° 27785, el Decreto Ley N° 17537, sus modificatorias, y la Resolución de Contraloría N° 276-2005-CG;

## SE RESUELVE:

**Artículo Único.-** Autorizar al señor Procurador Público encargado de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que en nombre y representación del Estado, inicie las acciones legales por los hechos expuestos, contra los presuntos responsables com-

prendidos en el Informe de Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA  
Vicecontralora General de la República  
Contralora General de la República (e)

10802

**Autorizan a procurador iniciar acciones legales contra presuntos responsables de ocasionar perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave**

RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA  
N° 284-2005-CG

Lima, 9 de junio de 2005

VISTO, el Informe Especial N° 172-2005-CG/ORPU, resultante del Examen Especial efectuado a la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, departamento de Puno, período comprendido entre el 1 de enero del 2003 al 31 de julio del 2004; considerando operaciones anteriores y posteriores al período antes citado; y,

## CONSIDERANDO:

Que, el Examen Especial practicado a la Municipalidad Provincial de El Collao - Ilave, departamento de Puno, corresponde a una acción de control programada dentro del Plan Operativo de la Oficina Regional de Control Puno de la Contraloría General de la República, correspondiente al ejercicio 2004;

Que, de la revisión a la documentación relacionada con la ejecución de la obra Complejo Municipal, VI Etapa, la Comisión Auditora ha evidenciado, que en la adquisición y servicio de montaje de vidrios, los funcionarios responsables otorgaron su conformidad al internamiento y montaje de vidrios, como si se hubiera cumplido con entregar las cantidades establecidas en el contrato suscrito con la empresa proveedora; sin embargo, de la inspección física realizada por la Comisión Auditora, se ha verificado que la empresa contratista entregó menor cantidad de metros de vidrios, pagándose en exceso el importe de S/. 36 774,31; estableciéndose, asimismo, que no se dedujo del pago final la cantidad de S/. 9 142,11, por concepto de aplicación de la penalidad por retraso injustificado en la adquisición y servicio de montaje; ocasionando perjuicio económico al patrimonio del Estado ascendente a S/. 45 916,42, que es necesario resarcir conforme al artículo 1321° del Código Civil;

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso d) del Artículo 22° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, constituye atribución de este Ente Técnico Rector del Sistema Nacional de Control, disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata, por parte del Procurador Público, en los casos en que en la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico o presunción de ilícito penal, correspondiendo en tal sentido, autorizar al Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, el inicio de las acciones respectivas contra los presuntos responsables comprendidos en el Informe de Visto;

De conformidad con el artículo 22° inciso d), de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, el Decreto Ley N° 17537, sus modificatorias, y la Resolución de Contraloría N° 276-2005-CG;

## SE RESUELVE:

**Artículo Único.-** Autorizar al señor Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que en nombre y representación del Estado, inicie las acciones legales correspondientes por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la



Pág. 294608

**El Peruano****NORMAS LEGALES**

Lima, lunes 13 de junio de 2005

presente resolución, contra los presuntos responsables comprendidos en el Informe de Visto, remitiéndose para el efecto los antecedentes del caso.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ROSA URBINA MANCILLA  
Vicecontralora General de la República  
Contralora General de la República (a)

10803

## REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL

**Autorizan delegación de funciones registrales y acciones administrativas a la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa de Kivinaki**

RESOLUCIÓN JEFATURAL  
Nº 649-2005-JEF/RENIEC

Lima, 3 de junio de 2005

VISTO: el Informe Nº 1228-2005-GO-SGREC/RENIEC de fecha 13 de mayo del 2005 y el Informe Nº 527-2005-GAJ/RENIEC de fecha 20 de mayo del 2005, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 26497 se creó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, como un organismo autónomo, constitucionalmente encargado de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su capacidad y estado civil. Corresponde exclusivamente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil las funciones de planear, organizar, dirigir, normar y racionalizar las inscripciones registrales de su competencia, entre los que se encuentran los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás actos que modifican el estado civil de las personas.

Que, a través del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM de fecha 23 de abril de 1998, se aprobó el Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, norma que regula la inscripción de los hechos relativos al estado civil de las personas, disponiendo a su vez que el Sistema Registral está integrado, entre otros organismos, por las Oficinas Registrales encargadas del procesamiento registral y demás funciones inherentes al Registro de Estado Civil, que la Alta Dirección del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estime conveniente;

Que, asimismo por Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF de fecha 3 de abril de 1996, se delegó las funciones registrales contenidas en el artículo 44º de la Ley Nº 26497, a las Oficinas de Registro de Estado Civil de la República ubicadas, entre otras instituciones, en las Municipalidades Provinciales, Distritales y de las Comunidades Nativas, debidamente autorizadas;

Que, el artículo 20º del Decreto Ley Nº 22175 - Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, establece que en cada una de las Comunidades Nativas debe haber una Oficina de Registro de Estado Civil;

Que, en cuanto al matrimonio civil en las Comunidades Nativas, el artículo 262º del Código Civil señala que éste se tramita y celebra ante un Comité Especial, el que debe estar constituido por la autoridad educativa e integrado por los dos directivos de mayor jerarquía de la respectiva comunidad, el cual será presidido por el directivo de mayor jerarquía;

Que, la Subgerencia de Registros del Estado Civil, a través del Informe Nº 1228-2005-GO-SGREC/RENIEC, señala que la Comunidad Nativa de KIVINAKI no ha presentado Acta de Conformación de Comité Especial, a que se refiere el considerando precedente;

Que, la Comunidad Nativa a que se refiere el informe del visto, ha formalizado expediente de regularización de Oficina Registral en su respectiva localidad, el mismo que se encuentra debidamente complementado, por lo que corresponde la aprobación de la delegación de funciones, que establezca la vinculación funcional que la normatividad vigente dispone, las mismas que requieren de publicidad, esencial para su vigencia;

Estando a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica y en uso de las facultades conferidas por el artículo 11º de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el artículo 11º inciso h) del Reglamento de Organización y Funciones de la Institución;

SE RESUELVE:

**Artículo 1º.-** Autorizar, en vía de regularización, la delegación de las funciones registrales establecidas en los literales a, b, c, i, l, m, n, o y q del artículo 44º de la Ley Nº 26497, Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme se precisa en la Resolución Jefatural Nº 023-96-JEF, así como las acciones administrativas que correspondan para llevar adelante la delegación, a que se refiere la parte considerativa de la presente Resolución, a la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa de:

COMUNIDAD NATIVA	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
KIVINAKI	PERENÉ	CHANCHAMAYO	JUNÍN

**Artículo 2º.-** El Jefe de la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa mencionada en el artículo precedente, queda encargado de las funciones establecidas en el artículo 16º del Decreto Supremo Nº 015-98-PCM de fecha 23 de abril de 1998, así como de las acciones administrativas que correspondan para llevar adelante la delegación funcional dispuesta, ceñida a la normatividad sustantiva y registral vigente, bajo la supervisión y control del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

**Artículo 3º.-** El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a través de la Subgerencia de Registros del Estado Civil, proporcionará los libros de nacimiento y defunción, a la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa de KIVINAKI, cuya delegación de facultades registrales se aprueba con la presente Resolución; así como también corresponderá a dicha Subgerencia, orientar e impartir instrucciones a ésta, a fin que el procedimiento registral se realice en concordancia con las normas legales, reglamentarias y administrativas, que regulan las inscripciones en los Registros de Estado Civil.

**Artículo 4º.-** Asimismo, la Subgerencia de Registros del Estado Civil proveerá del respectivo libro de matrimonio, a la Oficina de Registro de Estado Civil que funciona en la Comunidad Nativa de KIVINAKI, cuando ésta cumpla con remitir copia del Acta de Asamblea Comunal, mediante el cual se ha conformado el Comité Especial, a que hace referencia el artículo 262º del Código Civil.

Regístrese, publíquese y cúmplase.

EDUARDO RUIZ BOTTO  
Jefe Nacional

10831

**Autorizan a procurador iniciar acciones legales a presuntos responsables de la comisión de delito contra la fe pública**

RESOLUCIÓN JEFATURAL  
Nº 650-2005-JEF/RENIEC

Lima, 3 de junio de 2005

Vistos: El Oficio Nº 1047-2005-GO/RENIEC, emitido por la Gerencia de Operaciones, el Oficio Nº 868-2005-GP/RENIEC emitido por la Gerencia de Procesos y el Informe Nº 579-2005-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica;

---

**Relato N° 01**

---

**Alcalde de Ilave es obligado a arrodillarse y pedir disculpas**

Las autoridades acusan al burgomaestre de osar suplantarlas en el resguardo de un festejo. La posibilidad de que un alcalde de Ilave fuera nuevamente linchado rondó por el distrito puneño de la provincia de El Collao el último domingo, cuando un grupo de 300 tenientes gobernadores de las tres zonas de esa provincia se reunieron con el actual burgomaestre, Fortunato Calli Incacutipa, para exigirle cuentas respecto de un hecho acontecido la semana pasada durante la celebración del año nuevo andino.

Los tenientes gobernadores de la zona alta, media y baja de Ilave citaron al Alcalde y a algunos funcionarios para reclamarle haber designado a personas extrañas las labores de seguridad durante la celebración, cuando son los primeros –dijeron estos- los encargados de realizar habitualmente tales acciones. Según contaron los tenientes gobernadores, Calli hizo pasar como tales a 40 personas que no ostentan el cargo.

Luego de increparle también por no tomarlos en cuenta en otras actividades y de cuestionar su inacción respecto de las diversas obras prometidas durante su campaña electoral, Fortunato Calli fue obligado a arrodillarse y a pedir disculpas. También se les obligó a hacer lo mismo al primer regidor de la comuna, Wilson Maquera Lupaca, y al asesor político Patricio Huanacuni.

El hecho ocurrió en el cuarto nivel del edificio municipal ubicado en la plaza principal de Ilave, lugar en el que hace cuatro años se linchó al entonces burgomaestre de la provincia Cirilo Robles Callomamani.

A la fecha, Calli Incacutipa siempre había mostrado predisposición al diálogo y a ejecutar obras; sin embargo, los tenientes gobernadores estaban descontentos porque los hicieron a un lado y así se lo hicieron saber a través de lo que muchos pobladores consideraron una humillación, y otros, un castigo ejemplar”

## BIBLIOGRAFÍA

ADRIANZEN, Alberto. (2004). 'El bloqueo de la transición democrática en el Perú'.

En *La participación ciudadana y la construcción de la democracia en América Latina*. Lima: SER, CONSODE, OXFAM, Grupo propuesta ciudadana y Participa Perú, pp. 83-97.

ALANOCA, Vicente. (2008). “Nación Aymara” *Re-pensar el Perú desde Ilave*.

Puno: Impreso en Cadena del Sur.

ALBO, Xavier. (2009). 'Etnicidad y Política en Bolivia, Perú y Ecuador'. En

*Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS, pp. 497-560

ALFARO, Santiago, *et. al.* (2008). *Ciudadanía intercultural, conceptos y pedagogías*

*desde América Latina*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

ARNILLAS, Federico. (2004). 'Participación de la Sociedad Civil en el proceso de la Mesa

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza'. En *La participación ciudadana y la construcción de la democracia en América Latina*. Lima: SER, CONSODE, OXFAM, Grupo propuesta ciudadana y Participa Perú, pp. 242-259.

AYALA, José. (2002). *Literatura y cultura aimara*. Lima: Editorial Universitaria de

la Universidad Ricardo Palma.

— (2005) *Morir en Ilave, crónica de un conflicto de la nación aimara con el*

*Estado nación*. Lima: Editorial San Marcos.

BAERT, Patrick. (2001). *La teoría social en el siglo XX*. Madrid: Alianza Editorial.

BALBUENA, Patricia. (2006). *Sistema electoral local en escenarios de conflicto. El caso Tilali en Puno*. Lima: Oficina Nacional de Procesos Electorales.

BARDIN, Laurence. (1991). *Análisis de contenido*. Madrid: Ediciones Akal.

BAUDUCCO, Gabriel. (2001). *Secretos de la entrevista*. México: Editorial Trillas.

BELLO, Álvaro. (2008). 'Ciudadanía Intercultural en América Latina: La búsqueda de un marco conceptual'. En *Ciudadanía intercultural. Conceptos y pedagogías desde América Latina*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 29-48.

BERGER, Peter y Thomas LUCKMAN. (2003). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

BIONDI, Juan y Eduardo ZAPATA (2006). *La palabra permanente. Verba manent, scripta volant: Teoría y prácticas de la oralidad en el discurso social del Perú*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú.

BOBBIO, Norberto. (1986). *Liberalismo y Democracia*. México: Fondo de Cultura Económica.

BRODERSEN, Arvid. (1964). *Estudios sobre teoría social de Alfred Schutz*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

- CHIRINOS, Luis. (2004). "Participación ciudadana en los gobiernos regionales: el caso de los Consejos de Coordinación Regional" en *La participación ciudadana y la construcción de la democracia en América Latina*. Lima: Grupo propuesta ciudadana, Participa Perú, OXFAM, SER, CONSODE, pp.191-222.
- COOPER, Frederick. (2009) '¿Para qué sirve el concepto de Globalización? La perspectiva de un historiador africanista'. En *Repensando la Subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 261-298.
- CORDOVA, Paula. (2003). 'Interculturalidad y Dialogismo' en *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 37- 42.
- CORREA, Norma. (2011). *Interculturalidad y Políticas Públicas: Una Agenda al 2016*. Lima: Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
- COULON, Alain. (1988). *La etnometodología*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- DEGREGORI, Carlos. (2004). *Ilave: Desafío de la gobernabilidad, la democracia participativa y la descentralización*. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.
- ENRIQUEZ, Porfirio. (2005). *Cultura Andina*. Puno: Editorial Altiplano E.I.R.
- ESPINOSA, Oscar. (2003). Desafíos a la Ciudadanía Multicultural en el Perú: El "Mito del Mestizaje" y la "Cuestión Indígena". En *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 77- 89.



- ETXEBERRIA, Xabier. (2003). 'La ciudadanía de la Interculturalidad'. En *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú. pp. 91-109.
- FARIÑAS, José María. (1999). *Ciudadanía Universal versus ciudadanía fragmentada*, 15 de diciembre de 2010, 14:00h., <http://www.uv.es/cefd/2/Farinas.htm1#3..>
- FLACHSLAND, Cecilia (2003). *Pierre Bourdieu y el Capital Simbólico*. Madrid: Campo de Ideas SL.
- FLORES, Galindo. (1990). 'Prólogo' en *Tormenta Altiplánica. Rebeliones Indígenas de la Provincia de Lampa – Puno. 1920-1924*. Lima: CONCYTEC, pp. 7-10.
- FULLER, Norma, ed. (2002). *Interculturalidad y política: Desafíos y posibilidades*. Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú: PUCP - IEP y Universidad del Pacífico.
- GIUSTI, Miguel. (2002). 'Cuando se seque el pantano ya no habrá mosquitos'. Reflexiones sobre la violencia política en un escenario globalizado, en *Quehacer* (138). Lima: DESCO, pp. 34-41.
- Gobierno Regional de Puno. (2008) Diagnóstico situacional de la región Puno. 24 pp.
- GOFFMAN, Erving. (2001). *Estigma: la identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu editores.
- GUEVARA, Jorge. (2009). *Diversidad y complejidad legal. Aproximación a la Antropología e Historia del Derecho*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

- HUBER, Ludwing. (2008). 'La Representación indígena en municipalidades peruanas'. En *Ejercicio de gobierno local en los ámbitos rurales: presupuesto, desarrollo e identidad*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Grupo propuesta ciudadana, Participa Perú, OXFAM, SER, CONSODE, pp. 175- 272.
- ILIZARBE, Carmen. (2002). 'Democracia e Interculturalidad en las relaciones entre Estado y sociedad'. En *Interculturalidad y política: Desafíos y posibilidades*. Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú: PUCP - IEP y Universidad del Pacifico, pp. 77-111.
- JEFFREY, Alexander. (1997). *Las teorías sociológicas desde la segunda Guerra Mundial: análisis multidimensional*. Barcelona: Editorial Gedisa.
- KLOR, Jorge. (2009). 'La poscolonización de la experiencia (Latino) Americana'. En *Repensando la Subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 109-158.
- KYMLICKA, Will. (1996). *Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías*. Barcelona: Editorial Paidós, SAICF.
- LANDER, Edgardo, comp. (2000). *Colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.
- Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano N° 26300 y la modificada N° 29313 (2009) [http://www.google.com.pe/?gws\\_rd=cr&ei=Z5JIUsCIDI2C9QSKqoB4#q=LEY+26300](http://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=Z5JIUsCIDI2C9QSKqoB4#q=LEY+26300)
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. (2004). Lima: Edición “El Carmen”

- LOMNITZ, Claudio. (2009). 'El Nacionalismo como un sistema práctico' en *Repensando la Subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 345-384.
- LÓPEZ, Sinesio (1997). *Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú*. Lima: IDS – Instituto de Diálogo y Propuesta.
- (1999). *Información y ciudadanía en el Perú*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP.
- MALLON, Florencia. (2009). 'Promesa y dilema de los estudios subalternos perspectivas a partir de la historia latinoamericana'. En *Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 159-206.
- MARTÍN, Manuel. (1993). *La comunicación en la vida cotidiana. La fenomenología de Alfred Schutz*. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra (EUNSA).
- MATOS, José. (1987). *Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década del 80*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- MEAD, George. (1982). *Espíritu, Persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social*. Barcelona: Editorial Paidós, SAICF.
- MEJÍA, Julio.(2004). *Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- (2009). *Sociedad y Conocimiento*. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- MELÉNDEZ, Carlos. (2004). *Ilave: un desafío para la democracia. Las elecciones municipales complementarias de la provincia de El Collao de 2004*. Lima: Asociación Civil TRANSPARENCIA.
- MENDEZ, Cecilia. (2009). 'Militares Populistas. Ejército, Etnicidad y Ciudadanía en el Perú'. En *Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 561-598.
- MENDOZA, Sara. (2004). "Entrevista a Gerónimo Romero Huayta dirigente de UNCA" en *Revista pedagógica Maestros*. Racismo y discriminación étnica: desafío para la educación intercultural. Lima, trimestral N° 12 Vol. 10, pp.12-13.
- MOLINARI, Tirso. (2008). 'Sobre la invisibilización y las representaciones de lo indígena en el Perú. Algunas reflexiones sobre problemas centrales en la construcción social de la ciudadanía', en *Revista Investigaciones Sociales*, Año XII N°20, Fondo Editorial de Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM/IIHS, pp. 217-227.
- MONTOYA, Rodrigo. (1998) *Multiculturalidad y política derechos indígenas, ciudadanos y humanos*. Lima: SUR Casa de Estudios del Socialismo.
- NUN, José. (2000). *Democracia ¿Gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.
- OSORIO, Francisco, ed. (2004). *Ensayos sobre Socioautopoiesis y Epistemología Constructiva*. Santiago de Chile: Ediciones MAD.
- PAJUELO, Ramón. (2005). *Municipalidades de Centros Poblados y conflicto local: Las lecciones del caso de Ilave*. Lima: Asociación de Servicios Educativos Rurales (SER), OXFAM, GB.

— (2009) “No hay ley para nosotros...” Gobierno local, sociedad y conflicto en el altiplano: el caso Ilave. Lima: Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

PANFICHI, Aldo y Juan DAMMERT. (2007). 'Participación, concertación y confrontación en Puno. La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza'. En *Participación Ciudadana en el Perú: disputas, confluencias y tensiones*, Fondo Editorial de la Pontificia de la Universidad Católica del Perú, pp. 95-146.

PEREZ, José. (2003). 'Diálogo de culturas para una ciudadanía intercultural'. En *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 233- 266.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Perú (2009). Informe sobre el Desarrollo Humano. Por una densidad del Estado al servicio de la gente.

QUIJANO, Aníbal. (2006) 'Don Quijote y los molinos de viento en América Latina'. En *Revista Investigaciones Sociales*, Año X N°16, Fondo Editorial de Facultad de Ciencias Sociales, UNMSM/IIHS. pp. 347-368.

RAMOS, Augusto. (1990). *Tormenta Altiplánica. Rebeliones Indígenas de la Provincia de Lampa – Puno 1920-1924*. Lima: CONCYTEC, Gráfica Espinal E.I.R.L.

RÉNIQUE, José (2004). *La batalla por Puno: conflicto agrario y nación en los andes peruanos*. Lima: IEP, SUR Casa de Estudios del Socialismo, CEPES.

— (2009). Indios e Indigenistas en el Altiplano Sur Andino Peruano, 1895-1930. En *Repensando la subalternidad. Miradas críticas desde/sobre América Latina*. Lima: IEP, SEPHIS. pp. 461-495.

REYNOSO, Carlos. (1998). *Corrientes en antropología contemporánea*. Buenos Aires: Editorial Biblos.

RODRÍGUEZ, Gregorio, *et. al.* (1999). *Metodología de la investigación cualitativa*. Málaga: Ediciones ALJIBE.

SCHUTZ, Alfred. (1932). *Fenomenología del mundo social*. Buenos Aires: Paidós.

SCHUTZ, Alfred y Thomas LUCKMANN. (2003). *Las estructuras del mundo de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

STIGLITZ, Joseph. (2010). *Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial*. México: Editorial Taurus

TAYLOR, Charles. (1993). *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.

TOURAINÉ, Alain. (2000) *¿Qué es la democracia?* México: Fondo de Cultura Económica.

TRIVELLI, Carolina, *et. al.* (2009). *Desarrollo rural en la Sierra*. Lima: CIPCA, GRADE, IEP, CIES.

TUBINO, Fidel. (2002). Entre el Multiculturalismo y la Interculturalidad: más allá de la discriminación positiva. En *Interculturalidad y política: Desafíos y posibilidades* Lima: Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú: PUCP -IEP y Universidad del Pacífico. pp. 51-76.

— (2003) Ciudadanías Complejas y Diversidad Cultural. En *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas*. Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 167-191.

TUBINO, Fidel y Juan ANSION (2008). 'Introducción' en *Ciudadanía intercultural.*

*Conceptos y pedagogías desde América Latina.* Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 11-26.

VALLES, Miguel. (1997). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión Metodológica y práctica profesional.* Madrid: Editorial Síntesis.

VATTIMO, Gianni. (2000). *El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura posmoderna.* Barcelona: Editorial Gedisa.

VICH, Víctor.(2002). *El caníbal es el Otro: violencia y cultura en el Perú contemporáneo.* Lima: IEP Ediciones.

— (2007). 'Presentación' en *La nación en tiempo heterogéneo y otros estudios subalternos.* Lima: IEP, CLACSO, SHEPIS, pp. 9-19.

— (2009). 'El discurso sobre la sierra: la fantasía del atraso'. *En desarrollo rural en la sierra aportes para el debate.* Lima: Bellido Ediciones E.I.R.L. CIES, CIPCA, GRADE e IEP, pp. 61-70.

VIGIL, Nila y Roberto ZARIQUIEY (eds.) (2003). *Ciudadanías inconclusas. El ejercicio de los derechos en sociedades asimétricas.* Lima: Cooperación Técnica Alemana y Pontificia Universidad Católica del Perú.

WALSH, Catherine. (2002). '(De) Construir la Interculturalidad. Consideraciones críticas desde la política, la colonialidad y los movimientos indígenas y negros en el Ecuador'. En *Interculturalidad y política: Desafíos y posibilidades.* Lima: Red para el desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú: PUCP - IEP y Universidad del Pacífico, pp. 115-141.

WEBER, Max. (1981). *Economía y Sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.

ZEVALLOS, Ulises. (2002.) 'Indigenismo y nación. Los retos a la representación de la subalternidad aymara y quechua' en el *Boletín Titikaka* (1926-1930). Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA). Fondo Editorial del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).